

Ni amnésicos ni irracionales
Las elecciones peruanas de 2006 en perspectiva histórica

Alberto Vergara

Ni amnésicos ni irracionales
Las elecciones peruanas de 2006 en perspectiva histórica

Ensayo



Ni amnésicos ni irracionales. Las elecciones peruanas de 2006 en perspectiva histórica
Alberto Vergara
Primera edición: octubre de 2007

Diseño y maquetación: María Teresa Cánepa

©Alberto Vergara Paniagua

©De esta edición:
Solar Central de Proyectos EIRL
Calle Elías Aguirre 126, oficina 502, Miraflores
Lima, Perú
T 2411974 / 2419651
info@solarcentraldeproyectos.com

Colección El río subterráneo

ISBN: 978-9972-2546-8-0
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú
N° 2007-09965

Introducción	13
Primera parte:	
Estado y Nación: de la maduración al apuro	29
1. Primero fue el Estado	31
2. Y luego fue la Nación	37
3. Y por último apareció el Estado-Nación	45
4. América Latina y el llamado populista	49
Segunda parte:	
Elecciones 2006 y el peso de la Historia	57
1. Proceso de creación del Estado-Nación	61
2. El peso de la Historia	71
3. Los partidos y el peso de los ochenta	103
4. Conclusiones de la segunda parte	109
Tercera parte:	
Continuidades y rupturas	113
1. El Perú postoligárquico	115
2. Las mil y una transiciones	121
Conclusiones	135
Referencias	143
Agradecimientos	157

Para mi papá.
Marxista de derecha.
Único.

Los científicos sociales contemporáneos acostumbran tomar una vista fotográfica (*snapshot*) de la vida política, pero a menudo existen fuertes razones para pasar de las fotos a las películas (*moving pictures*). Ubicar la política en el tiempo puede enriquecer enormemente nuestro entendimiento sobre complejas dinámicas sociales.

Paul Pierson

Introducción

Something is happening here but you don't know what it is.

Bob Dylan

Como en toda investigación, mi punto de origen está en un enigma. El inicio es un signo de interrogación que reclama atención y hasta ahora nadie se la otorga. En los últimos años, una gran parte del electorado peruano se traslada de elección en elección a candidatos sumamente distintos. Fujimori, Toledo y Humala recibieron la bendición de sectores similares de la población y, en muchos casos, sus votaciones se han superpuesto como capas geológicas sobre los mismos territorios. Fujimori era autoritario y librecambista; Toledo, demócrata y librecambista; Humala, autoritario e intervencionista. Sin embargo, los tres recibieron el apoyo de los mismos sectores. Acá hay algo que no cuadra, ¿cómo explicar este apoyo a propuestas programáticas tan diferentes? Una opción sería pensar que estamos hablando de sectores ignorantes, sin ningún tipo de luz (el *electorado* le llaman algunos que apenas si disfrazan su desprecio en ropajes de análisis). Por mi parte, creo que el problema es que analizamos nuestra vida política *sólo* en términos económicos e institucionales. No estamos viendo la ruptura de fondo, el eje (o *cleavage*) que articula nuestra vida política sin que seamos conscientes: este eje divide el horizonte *estadonacional* del horizonte *postestadonacional*. El eje que propongo que observemos —poderoso e invisible— incluye las variables institucionales (autoritarismo/democracia) y económicas (librecambismo/intervencionismo), pero las articula con variables históricas y culturales. Obliga a pensar cada elección en términos más amplios que los utilizados cotidianamente (puramente económicos o políticos). Así, creo que

de utilizar las herramientas que presentaré en este ensayo, el apoyo obtenido por Fujimori, Toledo y Humala —a pesar de sus diferencias programáticas— por parte de las mismas poblaciones deja de ser tan enigmático y permite pensar cómo articular la vida política del país, pues no habrá democracia plena si la vivimos a salto de mata, con un electorado que vuela de una opción a otra cada cinco años y donde el futuro es siempre un pariente cercano de lo imprevisible. Para desarrollar este análisis me centraré en las elecciones generales de 2006 y, en menor medida, en las regionales y municipales de noviembre del mismo año.

Este ensayo explora las percepciones políticas del electorado peruano y trata de asignarles un significado tanto en términos teóricos como históricos. Es, pues, un ensayo de interpretación respecto de los grandes temores e ilusiones de nuestra sociedad a través de las votaciones puntuales obtenidas por algunos candidatos. Me anima la curiosidad por desentrañar lo que esas votaciones significan en un plano menos comprometido que la política del día a día. Me interesa el imaginario que los electores movilizan cada vez que son convocados a votar, qué desean y qué repudian cuando trazan una gran equis sobre la cara de su candidato. No me interesa —lo diré de una vez— la política nacional como fenómeno en sí, sino como espejo que refleja los deseos de un país.

El análisis político nacional sufre dos males saltantes. En primer lugar, la ausencia de revistas y departamentos de ciencia política empuja a los analistas hacia los brazos de la prensa cotidiana y, en los últimos tiempos, a los de la *blogósfera*. Pero la prensa cotidiana está interesada —va de suyo— en lo cotidiano. Así, un primer problema es que los procesos políticos son leídos como algo que sucedió hoy, con efectos sentidos hoy y, como mucho, habrá que ver qué hacemos mañana. En segundo lugar, muchos de nuestros analistas as-

piran a ser consejeros del príncipe, cuando no príncipes ellos mismos. Y entonces nos encontramos cada día con interpretaciones trufadas de deseos personales o cargadas de ajustes de cuentas¹. Este ensayo intenta esquivar los dos problemas. Vale decir, procura reubicar a la política nacional en un plano histórico y no tiene interés alguno por el análisis político como sucedáneo —culto y oculto— de la política mayor.

Para poner en perspectiva histórica y teórica las elecciones generales de 2006, debo primero presentarla como una foto (un *snapshot*), asirla en su dimensión estática, para luego desarrollar herramientas teóricas que permitan leerla y así mostrar los lazos que tiene con el pasado reciente; cuál es su relación con el proyecto de Estado nacional (el pasado lejano) y, finalmente, pensar hacia dónde podemos encauzarnos en los próximos años. Después de todo, el interés último de este ensayo es el de las condiciones necesarias para preservar la democracia. ¿Cuándo la habremos ganado para siempre?

La foto

Los análisis de los resultados de la elección general de 2006 se construyeron alrededor de los dos temas ya mencionados: una dimensión institucional y una dimensión económica. Sin embargo, estas dimensiones no eran separadas sistemáticamente. Así, en el mismo análisis, Humala podía ser un candidato autoritario y Lourdes Flores una neoliberal a ultranza. Entonces, el primero era descrito en función a lo institucional y la segunda en función a lo económico. Las dos dimensiones entrelazadas sin orden produjeron una serie de conclusiones parcialmente correctas o abiertamente contradictorias. Para algunos, los resultados electorales mostraron una clara voluntad por reformar radicalmente el modelo económico neoliberal

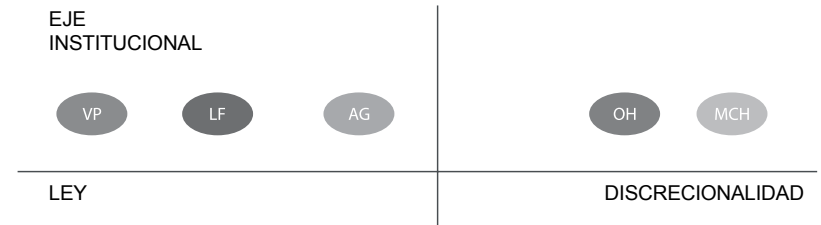
¹ Estos y otros males han sido descritos y analizados en Tanaka 2005a.

y, para otros, los resultados fueron ante todo una victoria de la democracia frente al autoritarismo. Pero poca gente ha visto que ambas proposiciones podrían ser ciertas al mismo tiempo o, tal vez, excluyentes la una de la otra. Están referidas a dos mundos distintos.

Trataré de corregir estas visiones construyendo dos ejes analíticos en los cuales ubicaré a los principales candidatos de las elecciones generales de abril del año 2006. El eje institucional opone *Ley* a *Discrecionalidad*. El eje económico tiene como polos opuestos al *librecambismo* y al *intervencionismo*².

El eje institucional

Este eje debemos construirlo a partir de consideraciones vinculadas con el Estado de derecho; es decir, las características referidas a dos niveles: el respeto por las libertades fundamentales y el balance efectivo entre los poderes del Estado³. Es un eje, entonces, eminentemente político, que no busca dar cuenta de otras características más que las aquí señaladas. Así, ubicaré a cada candidato en una línea continua que va del mayor respeto a la Ley, al mayor aprecio por la Discrecionalidad. Ambos extremos no existen en la realidad y sólo sirven como puntos referenciales del mapa político⁴. Si distribuimos a nuestros cinco candidatos en este eje obtenemos un gráfico como el que sigue:



Quien estaba más cerca del respeto a la Ley era, sin dudas, Valentín Paniagua. Presidente durante la transición, encarnaba la vuelta a la democracia, la autoridad de la norma e, incluso, fue duramente criticado por varios sectores de la opinión pública por hacer referencias permanentes a la Constitución y a la legalidad, temas que carecerían de todo interés para la población. Así, Paniagua era percibido claramente como el candidato que más hubiera respetado los principios enunciados por Robert Dahl como constitutivos de una *poliarquía*.

El polo opuesto quedaba constituido por Martha Chávez y Ollanta Humala. Proveniente de los cuarteles, con un discurso belicoso, expresando su simpatía por el general Velasco y Hugo Chávez, ligado a una familia de discurso radical y anunciando que no *gobernaría* la Nación sino que la *comandaría*, Humala se erigió como un candidato más afín a la discrecionalidad del poder que a la Ley. Martha Chávez, de su lado, heredera de un régimen autoritario, defensora de cuanto atropello hubo durante los noventa y con un semblante cercano al mesianismo⁵, era evidente que no sentía mayor aprecio por las cuestiones institucionales. No es cosa sencilla decidir quién debería ser ubicado más cerca de la discrecionalidad. Sin embargo, ubicaremos a la representante

2 La elección de estos términos no es menor. Uso *librecambismo* y no *liberalismo* porque esta última noción tiene fuertes connotaciones políticas que generalmente son ignoradas por quienes creen defenderlo. Utilizo *intervencionismo* y no *estatismo* porque la presencia de un Estado fuerte podría ser algo bienvenido en un librecambista. En el eje político, opongo *Ley* a *Discrecionalidad* porque utilizar los términos *democracia* y *autoritarismo* implicaría hacer un juicio de valor importante. De otro lado, tratándose de candidatos que participaban en una elección democrática no tenemos certeza de que se hubieran comportado autoritaria o democráticamente de llegar al poder.

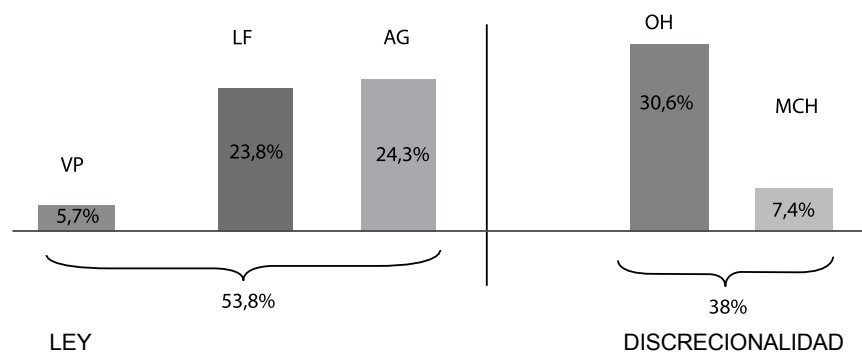
3 En términos teóricos: la poliarquía de Dahl (1971) más el *accountability* horizontal de O'Donnell (1997).

4 Debe quedar claro que en este ensayo no pretendo definir cuál es la verdadera posición ideológica de los candidatos, sino cuál es la posición que el electorado les asigna dentro de las distintas dimensiones de análisis.

5 Para los vínculos entre fujimorismo y senderismo: Degregori 2001.

del fujimorismo como la más arbitraria, pues ya había demostrado *en los hechos* su profundo desprecio tanto por las libertades individuales como por las instituciones.

El centro de nuestro eje es menos sencillo de completar. ¿Quién debería estar más cerca al respeto de la legalidad, Alan García o Lourdes Flores? La candidata de Unidad Nacional tenía un discurso bastante más cercano que García hacia el respeto de las libertades e instituciones. De otro lado, como ya lo hicimos para Martha Chávez, se sabe que durante su primer gobierno, García no fue el más escrupuloso garante de estas libertades. Y durante la campaña, propuso muchas veces modificar la Constitución, cuestionó contratos de estabilidad y hasta amenazó con cerrar el Congreso de la República si fuese necesario, además de mostrar, en general, un gesto bastante más autoritario que la candidata de Unidad Nacional. En todo caso, lo que resulta determinante para nuestro análisis es que ambos candidatos forman parte del sector *legalidad* del eje. Ambos, junto a Valentín Paniagua, constituían un sector opuesto al que ocupaban Ollanta Humala y Martha Chávez.

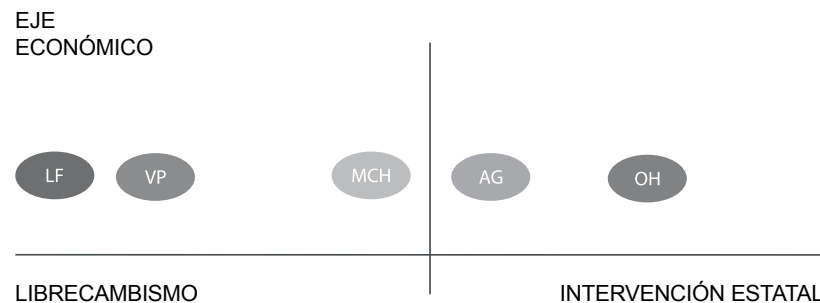


El gráfico anterior contiene el porcentaje de votos obtenido por cada candidato en la primera vuelta. Algunas conclusiones:

1. La suma de votos de los candidatos ubicados en el sector *Ley* es mucho mayor que la de los candidatos en el sector *Discrecionalidad*. Aquellos obtienen 53,8% y estos 38%.
2. García fue la figura más cercana al centro político. Este sector es donde los ciudadanos suelen sentirse más a gusto en las sociedades democráticas.
3. Nuestro gráfico dibuja una curva donde los extremos son delgados y casi simétricos. Esto también se condice con las tendencias ideológicas de las sociedades democráticas.

El eje económico

Construir un eje económico es bastante menos complicado que el político. Aun cuando podríamos recurrir a algún tipo de formulación teórica equivalente a la utilizada en la sección anterior para categorizar el *librecambismo* y el *intervencionismo*, será más fácil para la exposición de este ensayo apoyarse en las declaraciones de los candidatos, en sus planes de gobierno y en el sentido común. Así, nuestro eje económico queda formulado de la siguiente manera:

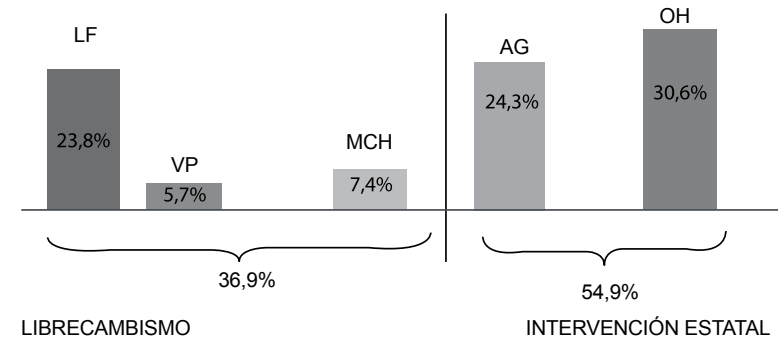


Una vez más, los extremos de nuestro gráfico son simples de ubicar. Lourdes Flores era la candidata que aseguraba con mayor énfasis la continuidad del modelo económico y Ollanta Humala quien más lo criticaba. Lourdes Flores no mostraba mayor interés en revisar los contratos de estabilidad con empresas extranjeras, tampoco en modificar a los altos mandos de la política económica de los últimos años y era la favorita de los grupos de poder. De su lado, Humala, sin pelos en la lengua (ni en su plan de gobierno), convirtió al verbo *nacionalizar* en su principal promesa económico-electoral. Menos claro era el significado que le atribuía a la *nacionalización*, pero lo que importa aquí es que este discurso (incongruente o conciso, eso es harina de un costal más académico) se erigió como el más desafiante hacia la ortodoxia económica.

Valentín Paniagua y Alan García resultaban en este eje los candidatos moderados. El primero era un moderado del lado librecambista y el segundo lo era del intervencionista. Las frecuentes críticas de Paniagua a las ganancias de algunas empresas extranjeras, su énfasis en los indicadores de desarrollo humano, además de una filiación añeja a los valores democristianos lo alejaban de la ortodoxia librecambista pero, al mismo tiempo, llevaba en su plancha presidencial a dos personajes vinculados, sin tapujos, con la derecha económica, ambos provenientes de Unidad Nacional. García, de su lado, era el moderado del sector intervencionista. No utilizaba el verbo *nacionalizar* como Humala pero fustigaba duramente a las empresas extranjeras, se manifestaba a favor del Tratado de Libre Comercio con EEUU (pero con tantos bemoles que uno ya no sabía con qué estaba de acuerdo y con qué no) y, en fin, se presentaba como el *cambio responsable*.

La candidata del fujimorismo es la pieza complicada de ubicar. Chávez era heredera de las percepciones del gobierno de Fujimori, y éste era uno de amplio asistencialismo hacia abajo

y percibido como de libre mercado en los sectores altos. En todo caso, me parece que la vertiente asistencialista no la convierte en una candidata que desafíe el modelo económico y por eso la he mantenido del lado del mercado, aunque más cercana de la división con el intervencionismo.



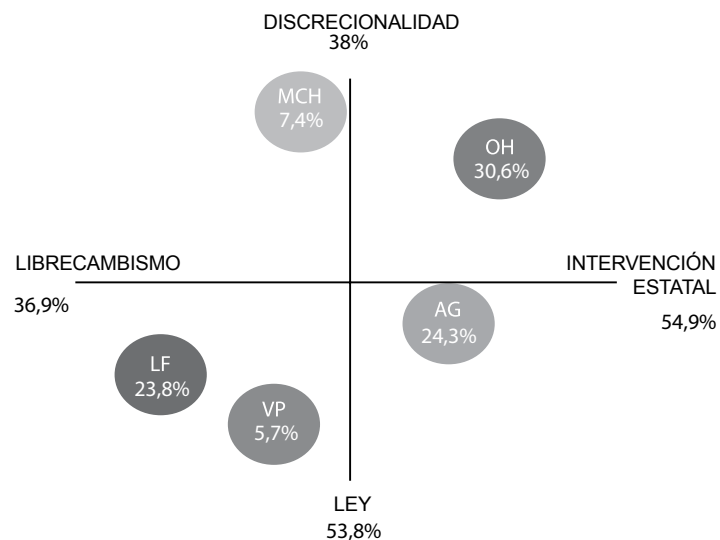
El gráfico anterior muestra los resultados de cada uno de los candidatos en el eje económico. Conclusiones principales:

1. La mayor parte del electorado se manifestó por el intervencionismo. La suma de los dos candidatos de este sector fue de 54,9%.
2. García, al igual que en la gráfica anterior, fue el candidato más cercano del centro del eje.
3. Uno de los candidatos extremos (Flores), que obtuvo una votación importante, no consiguió pasar a la segunda vuelta y esto determinó el resultado final de la elección.

Los ejes combinados

La presentación por separado de estos dos ejes permite observar las demandas de la población respecto de dos temas

concretos, el económico y el institucional. Sin embargo, un elector no es unidimensional, posee varios criterios de elección que debe amalgamar y ponderar para hacer un balance de las distintas problemáticas que toma en consideración cuando vota. Así, podemos encontrar electores que son *intervencionistas* y *discrecionales* tanto como otros *intervencionistas* y *legales*, por tanto, los electores están obligados a articular sus diferentes intereses y encontrar al candidato que los combine mejor. De esta manera, si los electores no son unidimensionales, los análisis en términos unidimensionales no serán los mejores para comprender los resultados de una elección. Por lo tanto, luego de haber visto por separado lo dos temas más importantes de la elección, ahora los analizaré de manera combinada (no entreverada), con lo cual nos alejaremos de esta unidimensionalidad analítica. Entonces, si combinamos ambos ejes obtenemos una matriz⁶ como la que sigue:



⁶ Alguna vez vi a Alfredo Torres, de *Apostro*, presentar una matriz similar a ésta para el análisis de las elecciones de 2001. Como se verá luego, el reto es pasar de esta dimensión estática a una más dinámica.

Con este gráfico los resultados electorales adquieren mayor sentido. Tenemos una herramienta de análisis que replica las dos temáticas principales que el elector enfrenta en cada elección. Como lo he dicho desde el inicio, esto no implica que las dos dimensiones sean las únicas. Para algunos electores, quizás sea central, por ejemplo, un eje respecto de la descentralización, cuyas opciones irían de los candidatos más centralistas hasta los más proclives a la descentralización. O, tal vez, podría tomarse en consideración un eje religioso o moral que iría desde los candidatos más libertinos hasta los más beatos. O, finalmente, podríamos construir uno de tipo étnico, que iría desde la *choledad* más nacional hasta lo más *ario* de nuestra política. En todo caso, en esta matriz he escogido articular lo económico con lo político porque son las dos dimensiones que más importancia tuvieron durante la campaña (y, por lo tanto, para los electores, que es lo que interesa aquí) y aquéllas sobre las cuales se basaron los análisis posteriores a las elecciones.

La primera conclusión que esta visión articulada nos ofrece es que García no fue elegido por causa de la mala memoria de los peruanos ni por una suerte de irracionalidad embriagadora. Este tipo de opinión tan común en cierta prensa suele expresar, en realidad, un profundo desprecio por el electorado nacional. *Votan así porque son irracionales, locos y/o desmemoriados*. Más que un argumento es un insulto. Alan García ganó la presidencia de la República por factores políticos —de estrategia e institucionales— y no por la irracionalidad de los electores o por una severa amnesia. La primera y fundamental razón por la que García ganó es que se ubicó como el *único* candidato que representaba las dos preferencias fundamentales del electorado en la primera vuelta: la legalista y la intervencionista. Cuando García consiguió pasar a la segunda vuelta (por tanto, debido a un hecho institucional, de regla electoral) y al quedar la contienda restringida

a dos candidatos, el electorado eligió al único que se había ubicado en ese cuadrante de la matriz. Es pura racionalidad política de los electores, combinada con reglas electorales. Alan García ha ganado *a pesar* del ciudadano memorioso y *debido* a que es racional⁷. A través de todo el ensayo demostraré que los electores siempre acuden a la memoria para elegir a sus candidatos. Nada más lejos de la realidad que creerlos amnésicos o irracionales.

Estratégicamente, García logró ubicarse en ambos ejes como la alternativa moderada. La aparición de Humala le permitió no ser ya el personaje incendiario de 2001 sino encarnar el *cambio responsable*. Simbolizó aquello de la virtud aristotélica: ubicada en el exacto punto medio entre dos vicios. El elector de las sociedades democráticas es básicamente un sujeto que cree en Aristóteles, aunque es más probable que, en realidad, comulgue con aquello de *ni tan lejos que no caliente al santo ni tan cerca que lo queme*. Ubicado en el exacto punto medio entre el santo y la vela, y jugando en pared con la regla de la segunda vuelta, García se ganó el derecho a volver a Palacio de Gobierno⁸.

Ahora bien, aunque el análisis hecho a partir de esta matriz ordena nuestras conclusiones y resulta bastante más eficiente que las interpretaciones unidimensionales, ésta sigue siendo una manera temporalmente reduccionista e incompleta de observar la elección. Refleja las tendencias ideológicas de la población en un momento determinado y únicamente a partir de dos variables. Sin embargo, como afirmaba Paul Pierson (2004: 2) en el epígrafe que da inicio a este ensayo, el reto es pasar de una comprensión fotográfica a una de *moving picture*.

⁷ En la segunda parte del ensayo incido en el peso del partido para esta victoria.

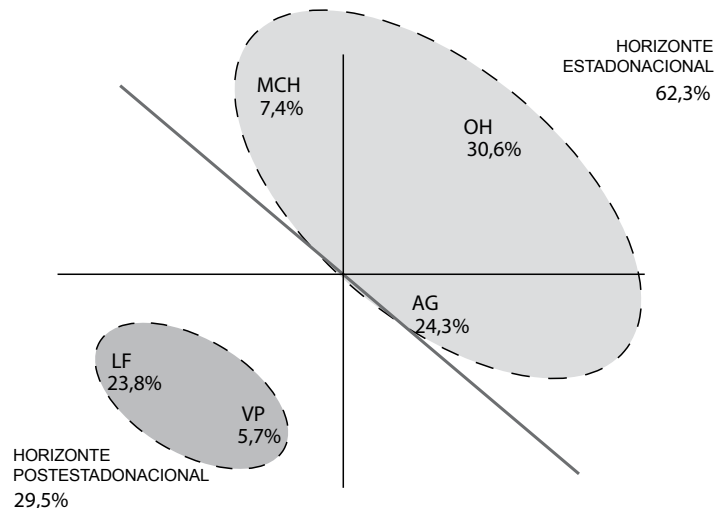
⁸ Es importante recordar la influencia que las normas ejercen en los resultados electorales. A estas alturas ya nadie parece caer en la cuenta de que en un régimen parlamentario Humala habría sido nuestro Primer Ministro o que, en un régimen presidencial sin segunda vuelta (como en México), éste habría sido presidente.

Trataré de mostrar que —tal vez— existe otro eje menos perceptible pero tan decisivo como el político y el económico. Un eje que incluye a los otros dos y que podría ser la clave para entender lo que el electorado está diciendo sin verbalizar. Además, la lectura a través de este nuevo eje servirá para poner la elección en la perspectiva histórica y teórica que fue lo prometido en las primeras páginas de este ensayo.

Eje estadonacional / postestadonacional

Si nos mantenemos en una bidimensionalidad analítica que niega —o, al menos, no toma en cuenta— las variables culturales e históricas, los análisis serán irremediamente incompletos. Por tanto, voy a presentar una interpretación de los resultados electorales de 2006 bajo una formulación que incluye los dos ejes principales (económico e institucional), pero que también articula una dimensión histórico-cultural.

Primero, quisiera que el lector observe la misma matriz que mostré en la sección anterior pero dividida en dos. De un lado, el horizonte estadonacional y, del otro, un horizonte postestadonacional.



Este ensayo tiene como objetivo principal mostrar que detrás de las elecciones de los ciudadanos entre determinadas alternativas económicas e institucionales, se esconde una división más profunda, que persevera en el tiempo y que, en definitiva, tiene un poder explicativo mucho más agudo respecto de los resultados electorales de 2006, que si los tomamos como elecciones puramente ideológicas, vinculadas con un momento determinado y sin ponerlas en perspectiva histórica. Además, esta perspectiva permite observar con las mismas ventajas las elecciones de los últimos años y, con toda seguridad, las que vendrán.

Sostengo que las votaciones de Alan García, Ollanta Humala y Martha Chávez movilizan a la población que exige su inclusión definitiva en el proyecto peruano de Estado-Nación. En otras palabras, buscan una ciudadanía efectiva respecto del Estado peruano. Sin embargo, cada uno lo exige desde una

dimensión diferente. No es lo mismo exigir una ciudadanía social que una política. Por lo tanto, no afirmo que estos votantes sean iguales —ni siquiera similares—; lo que enfatizo es que cada uno de esos votantes espera que alguna dimensión de la ciudadanía por fin lo alcance y, en tal medida, inicie, mejore o incluya definitivamente su participación en el proyecto *estadonacional* peruano. Las inclusiones inconclusas.

Del otro lado del eje, encontramos a la población que goza de cada una de las dimensiones de la ciudadanía. En lo político, lo social o lo cultural, quienes votaron por Valentín Paniagua o Lourdes Flores se sienten parte del proyecto estadonacional peruano. Es la población que ha conseguido beneficiarse de cada una de las dimensiones que articulan la ciudadanía moderna. Es necesario precisar que, tanto para esta parte del eje, como para la *estadonacional*, no afirmo que *todos* los votantes respondan a estas caracterizaciones. Asumo tendencias que creo perceptibles, no realidades infalibles.

La reflexión que quiero introducir con este ensayo es, pues, la de los requisitos estatales y nacionales para el buen funcionamiento de una democracia. La democracia es una forma de gobernar el Estado, lo que supone la necesidad previa de contar con un Estado efectivo. Asimismo, una democracia también se enfrenta a problemas de nacionalidad. Las ciencias sociales en el Perú (y más concretamente la ciencia política) no se han ocupado de poner en relación estas tres esferas. Los estudios políticos en el Perú han tenido como eje a los movimientos sociales, los partidos políticos y, en los últimos tiempos, las innovaciones institucionales (sobre todo de reglas electorales) para el fortalecimiento de la democracia. Este trabajo intenta, entonces, acercar la problemática de la capacidad del Estado y de la nacionalidad a la de la democracia⁹.

⁹ Para una aproximación clásica a las relaciones entre democracia, capacidad estatal y nacionalidad, véase Linz & Stepan 1996. Especialmente el capítulo 2.

En este ensayo desarrollaré una serie de argumentos que provienen de la lectura de la matriz mostrada, de la disposición de los candidatos en ella, de sus votaciones y de la historia. Creo que debemos ser conscientes de la convivencia en el país de poblaciones separadas dramáticamente respecto de sus necesidades frente al Estado y la Nación: existen segmentos de la población que viven en el mundo más globalizado, donde las fronteras estatales se diluyen; y otros que, más bien, esperan que las fronteras estatales empiecen a dibujarse junto con sus básicas atribuciones. Además, aparece la obligación de pensar el significado del 60% que se ubica en el horizonte estadonacional y su relación con el populismo. De otro lado, debemos observar que los partidos políticos no están hablando el lenguaje estadonacional. La población no considera que los partidos políticos (con la relativa excepción del APRA) vayan a resolver sus problemas de inclusión al proyecto estadonacional. Tanaka (1998) afirmaba que los partidos en el Perú de los ochenta no sufrieron de un problema de *representatividad* sino de *governabilidad*. Creo que esto es absolutamente acertado y permite aún entender el descrédito de los partidos. Otra idea importante es que la forma de votación del horizonte *estadonacional* ya es recurrente en el Perú. Hay una composición *postoligárquica* del voto que se repite bajo distintas formas. Sin embargo, paralela a esta continuidad, aparecen rupturas que desarticulan radicalmente el sistema político.

Nada de lo enunciado aquí es susceptible de analizar desde los linderos cerrados y estrechos de la economía y la política, hace falta otra mirada. Ahora bien, antes de poner las elecciones en perspectiva histórica y teórica como he ofrecido, habrá que dar una vuelta por la historia, la teoría del Estado y la Nación (y de su vástago inesperado: el Estado-Nación). La lectura detallada de estos procesos históricos y sus contrastes con América Latina serán nuestra herramienta de lectura.

Primera parte:

Estado y Nación: de la maduración al apuro

1. Primero fue el Estado

But who's the king of all these folks?
Tom Waits

La modernidad política se fraguó alrededor del Estado. La carátula de 1651 del *Leviatán* de Thomas Hobbes lo describía como un ser mitológico bíblico, enorme y con voluntad de más enormidad. Aquella clásica portada era la mejor imagen de la naturaleza del nuevo Estado. Nada quedaba fuera de su alcance; coronas, iglesias, personas y cañones pasaban a ser dominio del nuevo soberano¹⁰. En el libro, Hobbes explicó y pregonó la naturaleza racional e inevitable de este nuevo objeto político nacido de la voluntad humana para terminar con el sufrimiento de los individuos en el mundo prepolítico. Gracias al Leviatán, los hombres ya no deberían llevar unas vidas cortas y asustadizas; el Estado sería el tercero que garantizaría la seguridad y el orden.

Sin embargo, Thomas Hobbes, más que inventar un nuevo objeto político, estaba reconociendo y dando bases filosóficas a la existencia concreta del Estado. Sólo tres años antes de la publicación de *Leviatán*, los reinos de Europa habían puesto punto final a la Guerra de los Treinta Años con el tratado de Westfalia. A partir de Westfalia, se aceptó, principalmente, dos hechos relacionados: que cada Estado podría adoptar una religión oficial y que ninguno podría intervenir en otro Estado a causa de esta decisión. Al menos una primera dimensión de la soberanía estatal había nacido: la soberanía territorial.

¹⁰ La carátula puede verse en Internet fácilmente.

Hobbes y Westfalia son, pues, la constatación del Estado moderno; dos bautizos diferentes del mismo objeto, uno especulativo y el otro concreto como las bayonetas. Sin embargo, todo bautizo presupone la concepción y formación previa de lo bautizado, y el Estado moderno europeo venía formándose desde la Baja Edad Media.

El Estado se impuso como nuevo centro de la vida política en un largo proceso comenzado en el siglo XIV, constituido a partir de dos tipos de enfrentamiento¹¹. Por un lado, debió sobreponerse a fuerzas infraestatales, dominios al interior del nuevo Estado que se negaban a renunciar al control ejercido sobre las poblaciones. Condados o ducados resistieron ante las arremetidas del nuevo soberano, quien deseaba imponer un vínculo directo con los habitantes del territorio. El Estado, armado de un nuevo tipo de trabajador (el burócrata), se acercó a estas poblaciones para recaudar directamente los impuestos. Las poblaciones ya no le entregarían los tributos a un señor local, sino a un funcionario que representaba a un señor más lejano y abstracto: el Estado. Sin embargo, claro está, estos poderes locales no aceptarían estas nuevas disposiciones con la mejor sonrisa. Y entonces el Estado debió echar mano a otro nuevo tipo de trabajador, un flamante guerrero que ya no era un asalariado dispuesto a defender a quien mejor lo remunerase, ya no un mercenario sin dios ni patria, sino un militar *quasi* moderno: un burócrata de las armas. Así, con burócratas y soldados, el nuevo Estado deshizo la resistencia de monasterios o marquesados e implantó un nuevo sistema político, donde el poder último residía en el nuevo soberano.

¹¹ Esto ha llevado a algunos a decir que “alrededor de 1300 era evidente que la forma política dominante en Europa occidental sería el Estado soberano”. Joseph Strayer. Citado en Tilly (1975: 25). Todas las traducciones que aparecen en este ensayo han sido hechas libremente por el autor.

De otro lado, en este largo proceso el nuevo Estado debió hacer frente a una fuerza supraestatal: la Iglesia. Luego de la caída del orden romano, la Iglesia fue el único poder que tuvo algún grado de centralización sobre el continente europeo. Cuando los Estados comenzaron a desarrollar burocracias e incipientes ejércitos y pudieron controlar largos territorios, debieron hacer frente a un obstáculo menos concreto pero igual o más difícil de reducir en el camino de construcción de un Estado centralizado y soberano: Roma.

Así, durante los siglos XIV y XV, las luchas entre el incipiente Estado y estas fuerzas supra e infraestatales prepararon el carácter del nuevo actor. Durante el siglo XVI, se erigió el Estado estamental (donde el Estado central compartía responsabilidades con unidades a su interior, pero donde éstas ya no discutían su primacía, había ya una legalidad entre los dos niveles). De otro lado, muchos estados (Inglaterra, Países Bajos, Suiza y algunos territorios de lo que luego sería Alemania), a raíz de la Reforma religiosa, se independizaron de Roma estableciendo Iglesias nacionales. De esta manera, en un largo proceso histórico, “la noción de Estado [...] designa algo totalmente nuevo. La atomización incoherente, el poder flojo y discontinuo, se convierten en unidades continuas y organizadas” (Heller 1985: 141-154).

El nuevo Estado, entonces, desarrolló atribuciones que en el Medioevo no existían o eran cumplidas por alguna otra instancia (infra o supraestatal). El nuevo Estado saqueó funciones del ámbito privado –no sería ya la familia, un párroco o un duque, quien eduque, resuelva litigios o recaude impuestos– y las convirtió en públicas. En dos palabras: las estatizó. El fin primordial de este nuevo Estado fue, hacia el exterior, el ejercicio de la fuerza y la protección de la paz y, hacia el interior, la administración del Derecho (Naef 1973). El Estado descansaba en la burocracia y en la armada profesional

(ésta garantizaba el trabajo de aquélla). “La esencia de la estatalidad reside en la aplicación de las leyes: la capacidad última de enviar a alguien con uniforme para que imponga el cumplimiento de las leyes.” (Oakeshott 2001)

Conforme el peso del Estado fue acrecentándose y desaparecieron las unidades de poder que desafiaban su hegemonía, la relación entre el Estado y las poblaciones se volvió directa y sencilla. Con el paso del tiempo, el Estado se hizo cargo de otras tareas y dimensiones de la vida colectiva. Se apoderó de la economía, dispuso racionalmente de la manera en que se gastaría el dinero público mediante los presupuestos públicos (donde ya no se confundía el patrimonio personal con el del gobernante [Heller 1985]), se hizo cargo de las comunicaciones, extendió una amplia administración de justicia, instaló representantes del Estado entre las poblaciones para que hagan cumplir las normas, comenzó a pensar en la educación de los pobladores, en reclutarlos y darles un salario por el servicio militar que prestaban. Estaba naciendo un vínculo de derechos y deberes entre el Estado y el ciudadano. Estaba naciendo la ciudadanía.

En un texto clásico, T. H. Marshall (1992) describió el desarrollo de la ciudadanía como el proceso por el cual los individuos habían conseguido de parte del Estado el derecho a obtener una serie de beneficios. Para Marshall, los derechos ciudadanos garantizan la igualdad de los ciudadanos. No se es *igual* en el vacío sino ante el Estado. Y los derechos, que encarnan y garantizan la igualdad, según Marshall, fueron ganándose por etapas. En el siglo XVIII, se consiguió la igualdad legal. En el contexto de las grandes revoluciones, las poblaciones le arrancaron al Estado derechos civiles, estrictamente individuales, que podían ser protegidos por los tribunales. En el siglo XIX, el Estado concedió derechos políticos vinculados con la participación (el derecho a parti-

cipar en la formulación de leyes y del gobierno en general). Y en el siglo XX, finalizaba el trayecto de la ciudadanía con la aparición del Estado de bienestar, que instauró los derechos de igualdad de oportunidades, amplios servicios básicos que limitaban las desigualdades sociales y garantizaban materialmente la igualdad. Para T. H. Marshall, una ciudadanía completa está formada por los tres tipos de derechos y, por lo tanto, por un Estado fuerte y amplio¹².

Es importante resaltar aquí que —más allá de si la historia narrada por él se ajusta con exactitud a los procesos de cada país— T. H. Marshall da cuenta de un proceso muy largo, un proceso compuesto de otros procesos entroncados a lo largo de los siglos, que se legisla a partir del siglo XVIII pero que se gestaba desde la Baja Edad Media. El enriquecimiento del contenido de la ciudadanía es un proceso de largo alcance. Es el proceso del Estado domesticando al mercado y que asegura las condiciones mínimas de vida del ciudadano. Este tríptico de derechos constituía, para Marshall, las funciones mínimas que un Estado debía llevar a cabo.

Desde luego, estas funciones mínimas varían según el cristal con que se mira y la época desde la que se observa. El progreso de las etapas de la ciudadanía en Marshall (o las generaciones de derechos en otros autores) es acumulativo y pareciera no poder conquistarse un grupo de derechos si no se obtuvo el grupo de derechos previo. Los anteriores prevalecen sobre los posteriores. Y esto se ha mantenido hasta la actualidad, los Estados poseen unas funciones mínimas a las que no pueden renunciar y otras que, según el cristal ideológico con que se las mire, serían adjetivas. Las básicas siguen y seguirán siendo aquellas primeras dimensiones que aparecían en el horizonte

¹² La narración de Marshall concuerda con los datos. En los primeros años del siglo XX, los Estados occidentales absorbían el 10% del PBI nacional; en los años ochenta, consumían el 50% del PBI (Fukuyama 2004).

de los siglos XV y XVI y que Max Weber (1977: 97) identificaba con el monopolio legítimo de la violencia; y, las menos relevantes, aquéllas adquiridas mucho después por el Estado. Francis Fukuyama (2004), pensando en el Estado contemporáneo, divide las funciones de la siguiente manera:

Funciones mínimas	Funciones intermedias	Funciones dinámicas
Defensa, Ley, Orden	Educación	Política industrial
Derechos de propiedad	Medio Ambiente	Riqueza
Gestión macroeconómica	Regular los monopolios	
Salud pública	Seguros	
Protección de los pobres	Seguridad social	

Durante los años noventa, los estados liberalizaron sus economías, deshaciéndose de las funciones dinámicas e intermedias. Sin embargo, no podía privatizarse todo, pues algunas funciones son consustanciales al Estado y privatizarlas equivaldría a su desaparición.

2. Y luego fue la Nación

Hemos creado Italia, ahora hay que crear italianos.
Mássimo d'Azeglio, 1865

Mitología

La Nación es el segundo artefacto político moderno por excelencia. La mayor parte de las veces, empujados por las connotaciones ancestrales del término, nuestra reacción primera es caracterizarlo como algo anterior al Estado. El Estado sería el producto de una Nación. Una Nación, asumimos, es una comunión iniciada en un punto muy distante, los vivos y los muertos unidos por la nacionalidad, una inmanencia que perdura en el tiempo. Esta idea se ha construido a partir de dos tradiciones de pensamiento distintas. Aunque divergentes, tanto el contractualismo liberal como las distintas versiones del holismo cultural han abonado este sentido común donde una Nación “es una comunidad de sentimiento que normalmente tiende a producir un Estado” (Weber 1995: 21).

De un lado, la tradición contractualista teorizó el Estado como el producto de un pacto político entre individuos racionales. Aquello que fundaba una sociedad política era la voluntad de los asociados. En Hobbes –lo vimos arriba–, los individuos cedían sus derechos a un tercero, a fin de ya no vivir la interminable guerra de todos contra todos que implicaba el Estado de naturaleza. En Locke, los individuos pactaban para poder vivir en libertad, esto es, bajo una misma Ley administrada con neutralidad para proteger, antes que nada, la propiedad privada. En Rousseau, el pacto debía dar lugar a algo nuevo, la voluntad general, una nueva entidad donde desaparecen las voluntades individuales para fundirse en un solo cuerpo.

Cada uno de estos contratos sociales entre individuos era la base del Estado, aquello que se llamaría luego la Nación. Notemos que cada pacto produce un cuerpo estatal distinto, de connotaciones autoritarias en Hobbes, de tintes liberales en Locke y anclado al ideal democrático en Rousseau. Por tanto, lo que es común a estos autores no es el tipo de Estado que produce el pacto sino las condiciones para sellarlo¹³.

Ahora bien, esta idea contractualista de la sociedad no quedó almacenada en libros y tratados sin influencia. Por el contrario, llegado el momento revolucionario las ideas producidas durante los siglos XVII y XVIII se convirtieron en bases donde asentar los nuevos proyectos políticos. Durante la revolución francesa, el abate Siéyes arguyó en favor de una base nacional puramente contractual. La Nación era un colectivo de ciudadanos iguales ante la Ley, emancipado de ataduras gregarias y guiado por la razón. En definitiva, la primera Constitución francesa de 1790 adoptó estas visiones *voluntaristas* de la ciudadanía y la Nación, y buena parte de la modernidad ha convivido con ellas, reproduciéndolas en distintas partes del globo. Por ejemplo, en el Perú, hasta hoy tenemos una disposición constitucional que permite acceder a la nacionalidad peruana. Ella no está restringida por algún vínculo histórico, comunitario o sanguíneo, sino que está abierta en caso alguien quiera o necesite formar parte de la Nación peruana.

A la idea ilustrada y cosmopolita de la Nación sucedió una romántica y comunitaria. Tradicionalmente identificada con el movimiento cultural y filosófico de aquello que luego sería Alemania, esta idea de Nación se reivindicaba de tipo cultural (Berlín 1979). Una Nación estaba unida por una cultura, era producto de sus poetas, religiosos y artistas. No era el legalismo contractual lo que podría dotar a un país de base social.

¹³ Desde luego, John Rawls (1971) también formaría parte de esta tradición, lo que demuestra la fuerza y vigencia del pensamiento contractualista.

La Nación era una esencia de continuidad histórica que se lleva en la piel, a la que uno no adhiere como una decisión más de la vida. Nada encarnaba con tanto vigor esta continuidad histórica de la Nación como la lengua. El idioma transportaba los anhelos de la nacionalidad y los rigores de la historia. Uno nunca podría devenir alemán; ser alemán es una marca comunitaria, no una opción como creen del otro lado del Rhin. En este tipo de pensamiento el individuo no puede aislarse de la comunidad, tiene unos *vínculos constitutivos*, para decirlo con el vocabulario de Michael Sandel (1982).

Al igual que las ideas *contractualistas*, estas ideas comunitarias de la Nación también dieron lugar a legislaciones precisas. Por lo pronto, con el advenimiento tardío del Estado alemán durante la segunda mitad del XIX, todas estas ideas románticas encontraron el suelo perfecto para germinar. Solamente la lengua unía a esos más de tres mil condados, ducados, municipios, monasterios y demás unidades políticas que fueron conglomerados bajo el paraguas de la *Pequeña Prusia*. Millones de personas que hablaban alemán pasaban a constituirse en alemanes. Así, las leyes alemanas estipularon que la ciudadanía alemana sólo podría recibirse por sangre. Padre y madre deberían ser alemanes para que el hijo también lo fuera. Esta disposición, por lo demás, se mantuvo en Alemania originando problemas en varios momentos de la historia. De otro lado, la idea sanguínea ancló en la mayor parte de naciones que reconocen la nacionalidad por esta vía. En el Perú, por ejemplo, la constitución recoge este precepto: se es peruano, también, hereditariamente.

Ahora bien, más importante aun que su influencia sobre las disposiciones legales, esta tradición romántica de la idea nacional impuso una percepción moderna de lo que debe ser la Nación. Una Nación debe ser una comunión “de pasado y futuro”. La idea del individuo que adhiere a la Nación como

a otra asociación cualquiera sabe a poco. La idea nacional requiere entonces para estar completa de los colores y sabores que otorga el patriotismo. Así, con el paso del tiempo, estas dos formas de entender la Nación se han instalado tanto en constituciones como en el ánimo popular. Los atributos de lo que debería ser y es la Nación se han construido a partir de estas dos tradiciones filosóficas, ambas modernas aunque se desafíen, irremediabilmente distintas aunque se intente hasta la saciedad limarles contornos y hacerlas encajar en un solo ideal¹⁴. Lo relevante para mi exposición es que tanto en la vertiente *sentimental* de la Nación como en la *racional*, el Estado aparece como algo posterior a la Nación: la base social precede al cuerpo administrativo. Las razones son distintas pero el orden es el mismo

Historia

Desde la Historia, nada parece ser como especularon siglos de filosofía. El Estado siempre precedió a la Nación y jamás a la inversa. La historiografía clásica respecto de la Nación es casi unánime al respecto: son los estados quienes crearon las naciones. El mito de la Nación liberal pactada entre individuos racionales o el mito de la Nación como comunidad cultural histórica son eso, mitos. Mitos muy útiles, pero absolutamente inexactos respecto de la formación de estados y naciones. Para el historiador, los esfuerzos del filósofo por colocar la Nación antes del Estado son como aquello de poner la carreta delante de los caballos.

“El nacionalismo engendra las naciones y no a la inversa” (Gellner 1983). La frase de Ernest Gellner implica que antes de construir una Nación alguien debe tener idea de qué cosa quiere que esa Nación sea. La Nación no es un producto espontáneo, sino el resultado de una necesidad estatal en la era

¹⁴ El debate entre liberales y comunitaristas que tanto ha animado la filosofía política en los últimos veinticinco años es, sin duda, un capítulo reciente de estas mismas disputas entre *Kultur* y *Civilization* como las llamó Norbert Elias (2003).

industrial. Los Estados se veían apremiados por la modernización, la competencia capitalista con los otros Estados y la necesidad de tener ejércitos bien preparados para una siempre posible guerra. Todos estos factores combinados obligaban a tener poblaciones homogéneas sobre las cuales poder imponerse y generar lealtades. Por tanto, el Estado concibió la necesidad de tener Nación, vale decir, una población homogénea y vinculada al Estado por necesidad. El vehículo para lograr tal homogeneidad fue la educación.

Como afirmaba Gellner, mucho se ha insistido en el Estado como aquel que posee el monopolio legítimo de la violencia y menos atención se le ha prestado al monopolio legítimo de la educación, verdadero mecanismo de reproducción nacional. Lo fundamental de esta educación estatal destinada a generar una Nación está dado por un primer hecho básico, dice Gellner: *la lengua*. Antes de educar a una población hay que elegir aquella lengua en la que la educaremos. Así, el proyecto nacional se propuso la desaparición de las lenguas y dialectos históricos para encuadrar a toda la población bajo una misma y única lengua y generar adhesiones¹⁵. La Nación, entonces, fueron aquellos alfabetizados en su mismo idioma; los no nacionales fueron los alfabetizados en otra lengua. Con lo cual aparece un elemento central en la construcción de las naciones: nosotros y ellos. La homogenización lingüística solidifica las fronteras que antes eran permeables y difíciles de percibir. En resumen:

“[...] Sólo un sistema educativo a escala nacional puede producir ciudadanos en el real sentido de la palabra. [...] Hubo un tiempo en que podía ser conseguido por precondiciones de defensa o economía: ahora es determinado por precondiciones de educación” (Gellner 1995: 56).

¹⁵ En palabras de Tom Nairn (1995), un historiador de los nacionalismos más clásicamente marxista: “La *intelligentsia* de clase media del nacionalismo debía invitar a las masas a entrar en la historia; y la carta de invitación debía estar escrita en una lengua que entendiera.” Por lo demás, esto se verifica, por ejemplo, en el caso francés a finales del siglo XIX (Weber 1977) y hasta en los esfuerzos más recientes en el País Vasco por “reflotar” el euskera (Juaristi 2001).

Al sistema educativo siguió otro tipo de medida también destinada a generar una conciencia nacional entre los habitantes de un Estado. Eric Hobsbawm (1992) lo ha detallado para los casos francés y alemán tan frecuentemente contrapuestos por la creación tardía del Estado en el caso alemán y la creación alejada en el tiempo del Estado francés. En ambos casos se inventó la tradición nacional en el siglo XIX. En Francia se levantaron monumentos y plazas a la *Nation* y a la *République*; el hombre de a pie de pronto estaba rodeado de espacios públicos cargados de una simbología nacional. Incluso el histórico 14 de julio, día nacional por excelencia, sólo fue decretado en 1880 (un siglo después de la toma de la Bastilla). Y en Alemania, prosigue Hobsbawm, la historia no fue diferente. A partir de 1860, el Estado inundó ciudades y comarcas con monumentos ya no al Estado o a la Nación sino al *Pueblo*; la unificación era la única experiencia nacional que los habitantes tenían en común.

Otro factor que dio origen a las naciones fueron las interminables guerras entre estados. Las guerras los crearon pues el nuevo Estado se imponía como el único protector eficaz ante el invasor foráneo; a su vez, este Estado recaudaba más impuestos y con estos tributos ensanchaba sus competencias y desarrollaba más sus capacidades (Tilly 1985). Tanto en tiempo de paz (durante el cual se prepara la siguiente guerra) como durante las guerras a través de la materialización certera de las fronteras por defender o violar, la carrera competitiva entre países, las movilizaciones colosales de población necesarias para enfrentar batallas cuerpo a cuerpo, la masiva propaganda estatal para generar una conciencia nacional en tiempos de conflicto y, desde luego, legitimar la extracción mayor de tributos, hicieron de la guerra la gran creadora de estados en Europa. Esto terminó por construir una idea nacional anclada a un territorio, y redujo a su mínima expresión las lealtades más locales¹⁶.

¹⁶ Buena parte de la vigencia de todo esto puede apreciarse en la reciente película de Clint Eastwood *Flags of our fathers* (2006).

Los medios de comunicación han sido los otros grandes creadores de naciones. Ya es conocida la tesis de Benedict Anderson (1993): las naciones fueron, en primer lugar, comunidades de lectores. Durante los siglos XV y XVI, a través de la imprenta —masificada por formas de producción capitalista—, las ideas de pertenencia germinaron desde una lengua intermedia que no era ni el latín ni los dialectos regionales, sino lenguas romances que configuraron lo que luego serían las lenguas nacionales. Así, fueron libros y periódicos, fundamentalmente, los que sentaron las bases de las futuras naciones. Desde entonces, la importancia de los medios de comunicación para la creación de naciones no ha disminuido: “las naciones se sostienen unidas a causa de creencias, pero tales creencias no pueden ser difundidas sin artefactos culturales que sean accesibles a todos” (Miller 1995: 32). El caso de la postguerra italiana es paradigmático. Fue la televisión de ese país la que logró, un siglo después, los propósitos de Máximo d’Azeglio cuando luego de la unificación italiana afirmaba: “Hemos creado Italia, ahora hace falta crear italianos.” Muchos de los dialectos que pueblan la bota han sobrevivido (a diferencia de Francia donde fueron eliminados sin más), pero el número de personas monolingües, vale decir, personas que sólo conocen el dialecto de su zona, se ha reducido casi hasta la extinción. La educación primero y la televisión luego han hecho de cada habitante un *italianoparlante* y, por tanto, un nacional.

Como vemos, más allá de la discusión sobre la base a partir de la cual se construye la Nación, toda la historiografía clásica y reciente sobre la Nación subraya el hecho central de ser una construcción creada, en lo fundamental, desde el Estado. Es él quien asume un papel homogenizador desde una opción cultural determinada. La construcción de las naciones se hizo desde una serie de opciones arbitrarias donde escribir la nueva historia nacional significaba, en buena cuenta, olvidarla, y donde el *nation-building* significaba también el *nation-destroying* (Walker 1972).

Para terminar con el Estado y la Nación, quisiera resaltar las dos ideas principales presentadas hasta aquí. En primer lugar, más allá de las convicciones filosóficas de cada quien, la Nación no parece haber precedido nunca al Estado. Por el contrario, es el Estado el que a partir de políticas públicas reconocibles fue el encargado de generar una Nación. En segundo lugar, ser conscientes de que la Nación y/o la nacionalidad están definidas a partir de dos compuestos disímiles pero inseparables, uno contractual y otro sentimental. Uno puede elegir ser peruano pero esperamos de esta persona que comparta *de corazón* la experiencia comunitaria. Me apresuraré a decir que no hago aquí un juicio de valor respecto de estas constataciones. No sostengo que “el Estado democrático necesita un fuerte sentido de patriotismo” (Taylor 1998: 201) ni defiendo que lo central para una comunidad sea una legalidad compartida (Habermas 1999). En este ensayo, me conformaré con constatar que ambas perspectivas conviven y han convivido en el mundo moderno respecto de nuestras visiones de la nacionalidad, que los individuos cuando piensan en *Nación* piensan en una *cosa* que contiene ambas dimensiones.

3. Y por último apareció el Estado-Nación

“El principio por el cual cada Estado habla una lengua determinada no está en su naturaleza ni es determinado históricamente” (Mac Adam *et al*, 2001: 231). En realidad, podríamos ampliar la idea: el principio por el cual a cada Estado le corresponde una Nación y que cada Nación tiene derecho a un Estado (realización final de la autodeterminación) es una arbitrariedad notoria que el lenguaje del siglo XX nos ha hecho olvidar. Nadie parece reconocer que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no está compuesta de Naciones sino de Estados. De tanto que ambas entidades se han imbricado ya no distinguimos su naturaleza distinta. Como he mostrado hasta aquí, el Estado y la Nación son dos artefactos modernos pero que nacieron separados en el tiempo, que fueron abonados por distintas tradiciones de pensamiento y que, empujados por el azar, las decisiones de las élites y las circunstancias de la modernización de los países, fueron convergiendo hasta confundirse en una sola unidad: el Estado-Nación. Pero nada había en sus orígenes que determinara tal unión.

El Estado-Nación ha sido el paradigma político del siglo XX. En términos teóricos, el Estado-Nación es la conjunción de varias soberanías que habían nacido en distintos momentos. En primer lugar, la territorial —aceptada por los Estados cuando la Paz de Westfalia en 1648—. A ésta se sumó la soberanía popular —Rousseau y la voluntad general—. Y finalmente la soberanía nacional —la conjunción de pasado y futuro de la comunidad¹⁷—. De otro lado, en términos históricos, durante la segunda mitad del siglo XIX comenzó a cuajar en Europa occidental la idea del Estado-Nación y Woodrow Wilson y el pensamiento liberal lo impusieron como norma a la salida de

¹⁷ La idea de las tres soberanías superpuestas es de Ferry (2004), quien postula que el futuro de la Unión Europea reside en separarlas y articularlas nuevamente bajo una nueva fórmula.

La Primera Guerra Mundial. A partir de entonces, cada Estado construyó o reafirmó su Nación y toda comunidad se autoproclamó Nación y, por tanto, con el derecho inobjetable a constituir un Estado.

Ahora bien, ¿cuál es la relación del Estado-Nación con sus habitantes? Aunque ambos objetos —Estado y Nación— se han fundido en uno solo, ya hemos visto que no lo son. Así, para el Estado los habitantes son ciudadanos y para la Nación, nacionales. La diferencia no es menor, la relación con el Estado se funda en términos de derechos y deberes objetivos, mientras que la otra exige lealtades afectivas. Por tanto, las demandas de los individuos y grupos hacia el Estado-Nación pueden articularse en el lenguaje de *derechos* o en el de *pertenencia*. Pero ambos, aunque diferentes, se dirigen hacia el Estado a través de reivindicaciones de distinta índole. Incluso, algunos estudiosos de la ciudadanía han integrado a su esfera las reivindicaciones de identidad o nacionales¹⁸.

¿Cuál es la importancia de esto? Saber que en el mundo contemporáneo conviven grupos e individuos en distinta situación respecto de este paradigma del Estado-Nación. Hay naciones que esperan la construcción del anhelado Estado y hay Estados que siguen pugnando por consolidar una Nación. Hay naciones reconocidas al interior de un Estado democrático que esperan concretar instituciones estatales nacionales (por ejemplo, las esperanzas del nacionalismo catalán) y hay estados menos democráticos respecto de alguna Nación al interior de sus fronteras (Rusia y los chechenos).

¹⁸ El concepto de “régimen de ciudadanía” de Jenson (2006) recoge las dimensiones tradicionales de ciudadanía como derechos y deberes (así como la participación política) y agrega una dimensión identitaria o afectiva que completaría la ciudadanía contemporánea. Me parece central rescatar que ambas reivindicaciones, las objetivas y las afectivas, son integradas en esta noción de “régimen de ciudadanía”. Entonces, de nuevo, más allá de lo que la ciudadanía en realidad sea, lo que me interesa es mostrar que las reivindicaciones de las poblaciones pueden ser articuladas a partir de cualquiera de las dimensiones del “régimen de ciudadanía”.

Pero, de otro lado, los individuos también tienen situaciones distintas respecto del Estado-Nación. Hay, por ejemplo, i) los que aspiran a terminar su inclusión en este Estado-Nación. Algunos porque no han conseguido los distintos derechos que otorga la ciudadanía moderna, otros porque no se sienten del todo integrados en el proyecto nacional y, desde luego, otros que, sin contar con los beneficios de los derechos ni de la nacionalidad esperan, ya no la consolidación de su inclusión, sino el inicio de este proceso. Pero también ii) existen los ciudadanos plenos que son, al mismo tiempo, nacionales plenos, se sienten nacionales de un país y pueden hacer valer sus derechos. Y luego; iii) existe otro grupo de personas que ya ve más allá del Estado-Nación. En ninguna parte como Europa se constata la presencia de estos ciudadanos que, habiendo culminado su inclusión en el marco estadonacional, observan ya el horizonte postestadonacional a través de una unión que desafía todas las certidumbres del paradigma que ha regido la política del siglo XX. Europa ha devenido un continente donde la libre circulación de personas, bienes y servicios ha reducido drásticamente la importancia de las fronteras y ha reordenado la superposición de soberanías. Esto es tan radical que aparece la noción *efectiva* de ciudadanía europea. Si el ciudadano de un país de la Unión se encuentra en el extranjero (fuera de la UE) en un Estado donde su país de origen no tiene embajada, podrá pedir protección en cualquier embajada europea y será tratado como nacional. Esto es un paso magnífico hacia la superación del ideal del Estado-Nación.

En ningún lugar como en América Latina se percibe con tanta fuerza esta convivencia de distintos tiempos y condiciones. Individuos integrados plenamente al Estado nacional, comunidades que lo desafían desde abajo con proyectos autonómicos al interior del Estado, individuos y comunidades que esperan su definitiva inclusión al proyecto y hasta

clases que, modernas como las que más, viven ya un tiempo de globalización con identidades mucho más flexibles e integradas a una vida económica mundial donde Nueva York o Madrid han pasado a ser otras estaciones, además de las nacionales, de la cotidianidad.

4. América Latina y el llamado populista

En Europa, Estado y Nación se desarrollaron en distintas épocas y en procesos independientes. Sólo alrededor del XIX, a raíz de factores materiales (vinculados con la industrialización) y filosóficos (la soberanía de la Nación como fundamento del Estado), ambas instituciones se acercaron generando un nuevo producto, el Estado-Nación, que luego ha pasado a ser algo casi natural. Ahora bien, cuando América Latina llegó a la vida independiente sólo tenía repúblicas sin Estado ni Nación... y necesitaba ambos. Nacida de un contexto liberal (la invasión de Napoleón, las Cortes de Cádiz, conocemos la historia), la independencia se construyó con una gramática europea y un vocabulario donde Estado y Nación ya eran una necesidad. Sin tiempo ni condiciones para madurar a alguno de ellos —y menos aún a ambos— las nuevas repúblicas independientes fueron antes que nada un territorio poblado sin Ley ni Nación efectiva. Todo aquello que Europa había conseguido en siglos de evolución aquí habría de conseguirse tan rápido como fuera posible. Si del otro lado del Atlántico, Estado y Nación podían rastrear en el pasado, aquí habría que arrancárselos al futuro.

La historia de vida de América Latina se resume en las ansias por alcanzar la modernidad con la conciencia de haber carecido del tiempo para construirla. Nuestra historia es la interminable búsqueda del atajo que nos lleve a la modernidad. Que sea la modernidad política (un Estado legítimo y efectivo), social (una Nación comúnmente comprometida con el país) o económica (insertarse en el sistema mundial), nada ha marcado más la voluntad de los proyectos estadonacionales que el de apurar el recorrido hacia la modernidad. Sin embargo, al terminar las guerras de independencia, los países no contaban con burócratas, ciudadanos o militares profesionales. En lugar de ellos, abundaron señores, siervos y mercenarios. Los

primeros treinta años de vida independiente se esfumaron en una guerra sin más sentido que el de encontrar al guerrero más fuerte, quien impondría las primeras piedras de un Estado moderno en el continente. Así, en los años cincuenta del siglo XIX, la mayor parte de países pudo terminar con el periodo caótico postcolonial donde los militares que habían forjado la independencia creían ser también los encargados de gobernarla. Juan Manuel Rosas en Argentina, Diego Portales en Chile o Ramón Castilla en Perú consiguieron, en distinta medida y según los países, algunas condiciones mínimas para tener un Estado moderno. Primeros presupuestos, ejércitos profesionalizados, recaudación de impuestos, todas atribuciones tan básicas del Estado que cabe preguntarse por su real existencia si estos requisitos no estaban presentes.

Si del lado del Estado las primeras bases lograron asentarse, por el lado del proyecto nacional las cosas no avanzaron mucho. La población indígena algunas veces eligió con quién pelear (al lado de Hidalgo en México, por ejemplo), pero la más de las veces terminó embarcada en cada guerra engrosando las filas de todos los bandos. Además, en Perú, El Salvador y algunas zonas de México, los dueños de tierras dispusieron de los indígenas como mano de obra. Esa convivencia, competencia y cercanía entre blancos e indígenas, entre hacienda y comunidad, tendió a crear un clima de hostilidad étnica y de clase “claramente incompatible con sociedades consensuales o liberal-demócratas” (Knight 2005). Con la independencia, en fin, las masas indígenas quedaron más aisladas y pobres que en tiempos coloniales (Skidmore 2001).

El siglo XIX, en resumen, fue la historia de unas repúblicas sin Estado ni Nación intentando crearlos al mismo tiempo, y acercarse, así, al puerto ideado de la modernidad. Asentadas sobre un discurso liberal e ilustrado, las nuevas repúblicas jamás se los tomaron en serio. Los procedimientos que encarnan la de-

mocracia liberal siempre fueron vistos como trabas en el camino hacia la modernidad. El atajo que había de llevarnos al progreso no estaba sembrado de legalidad sino de eficacia. Lo ha dicho Aljovín (2000) con elegancia: “Washington era alabado en público y Napoleón en privado.” Nuestros liberales se encontraron frente a una encrucijada: ¿otorgar el voto universal a masas que terminarían *clientelizadas* por caciques y caudillos, o resignarse a una ciudadanía restringida? (Demelas 1992). En nombre del orden, se optó por lo segundo, y el proyecto nacional siguió siendo una quimera entrado el siglo XX.

Durante las elecciones peruanas de 1895 sólo votaron 4.310 peruanos de una población total de 2 686.000 (Cotler 1995). Bajo estas condiciones, las esperanzas de formar un Estado-Nación moderno no eran las mejores. Aun así, durante la llamada República Aristocrática (1895-1919), el Estado construyó nuevas capacidades que habían colapsado durante la guerra con Chile, se redujo la aparición de caudillos armados y un sistema económico fortalecido por un buen ciclo internacional generó cierta prosperidad. Nada muestra mejor las ilusiones de la época que *El Perú Contemporáneo* de Francisco García Calderón (2000). Publicado en francés en 1907, el libro es de un optimismo desbordante, el Parlamento y el libre comercio (en suma, las dos grandes instituciones del pensamiento liberal) estaban encargándose, a paso lento pero seguro, de llevarnos hacia la modernidad.

Sin embargo, las masas que habían comenzado a migrar hacia las ciudades atraídas por las nuevas industrias y el *boom* exportador bajo el gobierno de Leguía no compartían la misma esperanza en aquellos procedimientos lentos y seguros que entusiasmaban a García Calderón desde París. El orden social que sostenía la República Aristocrática había sido subvertido con la urbanización paulatina, y lo mejor del pensamiento surgido de las familias “aristocráticas” parecía envejecer aceleradamente

y sin piedad: los jóvenes del novecientos, sin haber llegado a la cuarentena fueron suplantados por otros jóvenes, y la vida intelectual fue campo libre para Haya y Mariátegui. Entonces, cuando empiezan los años treinta *hay una Lima que se nos va* y hay un país que va llegando.

Y los países iban llegando en toda América. Los *caipiras* brasileños atraídos por Sao Paulo, los *cabecitas negras* que luego serían los *descamisados* acechaban Buenos Aires. Las ciudades tomaban un nuevo rostro. En el Perú, durante el gobierno de Leguía la población de Lima pasó de 224.000 habitantes a 376.000, y el sector de construcción civil se convirtió en el más importante empleador de aquella migración. Masas de personas arrancadas de la vida rural —con sus certezas y miserias— pasaban a vivir en la gran ciudad, plagada de incertidumbres y otras miserias más bien industriales. Ahora bien, una cosa es carecer de derechos ciudadanos en el campo y otra en la ciudad. Aquella migración pedía su incorporación a la vida pública y constataba que, tal como el sistema político había sido diseñado, la incorporación no llegaría pronto. Las masas pobres y urbanizadas deseaban que el Estado las reconociese como sujetos de derecho y deberes, y que la Nación las aceptase como compatriotas. Necesidades materiales y simbólicas que construyen la ciudadanía nacional.

El populismo fue la respuesta a esta nueva época. Apareció como demandas de inclusión rápida y como modelo de desarrollo independiente de los mercados extranjeros. El populismo fue, en una palabra, el atajo siempre deseado para alcanzar la modernidad; como derechos y sentido de pertenencia “por abajo” y como modelo de desarrollo “por arriba” Pero aquí nos interesa el populismo político y en menor medida el económico¹⁹.

¹⁹ Kurt Weyland (1996) ha separado muy bien estas dos vertientes del populismo. Si bien siempre fue asociado con un gasto irresponsable, inflación y la industrialización por sustitución de importaciones, lo cierto es que el populismo político ha sobrevivido a la muerte de estas políticas económicas centradas en la demanda. De otro lado, el populismo político ha demostrado poder asociarse sin problemas con el neoliberalismo.

El populismo político fue y ha sido la democracia sin el liberalismo, la legitimidad descreída de la legalidad. Un atajo lo es en la medida en que burla lo convencional; el atajo hacia la modernidad debía esquivar los procedimientos farragosos. Un atajo no se delibera en un parlamento, se adopta en el ejecutivo. Los grandes líderes populistas latinoamericanos conocían este camino secreto hacia la modernidad que las masas deseaban. Haya de la Torre, por ejemplo, interpretaba “los deseos imprecisos de las masas” (Stein 1999: 104). Los populistas llevaron a la vida pública lo popular. Todo aquello antes confinado a las clases bajas ganó una legitimidad visible, se volvió una forma de dominación anti-elitista (Touraine 1988: 165), aparecía el pueblo como actor mayor a través de un líder. El populismo debía crear o regenerar la comunidad nacional.

Me parece central entender esta fuerza cargada de pragmatismo y al mismo tiempo de deseos simbólicos. Perón, Getúlio Vargas, Haya y Cárdenas venían a suplir para las masas urbanas los códigos y afectos que otorga el medio rural. Desprovistas de certezas locales, las nuevas clases urbanas encontraron en estas figuras políticas la dimensión concreta de una comunidad demasiado abstracta: la Nación. Los regímenes populistas en cualquiera de sus etapas fueron fundamentalmente regímenes de inclusión a partir de políticas redistributivas. Para el pueblo es bastante menos importante si tales regímenes fueron efectivos para el desarrollo económico de los países (de hecho, muchos fueron desastrosos), pero en todos los países latinoamericanos se guarda un recuerdo agradecido de aquellos líderes. La educación, la salud o el orden muchas veces llegaron de la mano de estos caudillos populares, huachafosos, ridiculizados por la intelectualidad pero adorados por la masa. Y toda esta inserción ciudadana y nacional sólo pudo hacerse desde el Estado. Éste nunca fue un árbitro imparcial como quería la teoría liberal; en América Latina, el Estado debió ser un actor más (Touraine 1988: 169).

Desde luego, estos líderes populistas coquetearon abiertamente con el autoritarismo, pero las nuevas masas querían inclusión más que libertades... no serían ellas quienes castigaran los exabruptos.

En resumen, el populismo político fue el pacto entre la nueva sociedad política y los nuevos dirigentes para acelerar el acceso a la modernidad. Ésta significaba contar con un Estado-Nación, vale decir, como ya se ha enfatizado, con derechos y deberes que vinculan al Estado con sus ciudadanos y una relación entre la Nación y sus compatriotas (en esta medida, fueron nacionalistas y nunca comunistas o socialistas). Había que tomar el atajo que construyera estas relaciones. Ahora bien, aunque no tengamos una definición certera del populismo no deberíamos negar la validez del concepto. Como afirma Alan Knight (1998) en un ensayo brillante, el populismo es más un estilo de hacer política que una categoría política. Lo importante del populismo no es conseguir una definición certera de lo que significa, sino entender los procesos históricos y sociales que corrieron junto a su emergencia.

En definitiva, salvo las excepciones de Costa Rica, Uruguay y Chile, América Latina se acercó a la modernidad política que sus poblaciones deseaban a través de este tipo de régimen, de líder y de acción. Como piensa Alain Touraine, en América Latina existe una forma dominante de intervención social por parte del Estado (que él llama “la política nacional popular”). Creo que esto es cierto, hay una forma de entender el manejo del Estado que se ha forjado durante décadas en esta relación entre demandas impacientes y estados que, más que instituciones, son empresas individuales a cargo de un gran líder. Hay, entonces, una forma de tradición adquirida en gobernantes y electorados por este tipo de gestión basada en la legitimidad del gobernante antes que en la autoridad de las leyes. Ahora bien, según Touraine, esto reside en la naturaleza

política de un continente dependiente económicamente. Aquí creo que el francés exagera. De un lado, Europa (y Francia en particular) ha tenido una tradición larga de populismo sin tener una economía dependiente. De los Napoleones a de Gaulle, los franceses siempre tuvieron alguna forma de populismo caudillista²⁰. En segundo lugar, la tentación populista es más una forma de hacer política en un universo urgido de reformas que una *cultura política*²¹. Nada nos determina al populismo pero décadas de gestión populista influyen y dan forma a una permanente tentación populista.

Los gobiernos populistas, con esto termino, debieron intentar conseguir en pocos años todo aquello que los países europeos habían construido en siglos y todo lo que la independencia había prometido un siglo antes con pocos resultados. Si T. H. Marshall nos contó una historia donde lentamente se incorporaron grupos de derechos, los populismos debieron hacerlo en pocos años. Apurados por la urbanización y las demandas locales por inclusión, urgidos por competir en el sistema económico internacional, el populismo fue la manera en que pueblos y gobernantes pactaron para concluir el proyecto del Estado-Nación. Aquellos derechos judiciales que Marshall veía aparecer en el XVIII, los civiles del siglo XIX, los sociales del siglo XX, todos ellos debieron ser otorgados en apenas unos años por estos regímenes populistas. No hago aquí un elogio del modelo populista, menos aun de los autoritarismos crecidos a su sombra, pero sí constato que fueron ellos quienes otorgaron a las poblaciones muchos de los derechos de cualquier tipo que hoy disfrutan y que generaron un sentimiento de pertenencia a la Nación.

²⁰ A ver dónde termina Sarkozy...

²¹ Para un examen brillante y crítico de la noción “cultura política”, Knight 2005.

Segunda parte:

Elecciones 2006 y el peso de la Historia

En esta segunda parte, interpreto los resultados de la elección general de 2006 desde la perspectiva anunciada en la introducción y a la luz de los procesos señalados en la primera parte. Mi intención es demostrar que los resultados se originan en una doble percepción de parte del electorado. De un lado —el más importante—, por su situación respecto del Estado-Nación peruano y una relación histórica entre sociedad y formas de hacer política que aparecen como “eficaces” a la hora de extender este Estado-Nación (o de incluir a los ciudadanos, según el ángulo). En segundo lugar, los resultados son influidos por la crisis de gobernabilidad de los partidos originada por los años ochenta que permanece en el imaginario electoral a contraluz de los “estables” noventa. Entonces, el voto está determinado por la experiencia reciente (el desastre de los ochenta) y la experiencia de largo alcance (el Perú moderno posterior a 1930). En dos palabras, la votación final resulta de una combinación de estrategia del elector (opción) con condicionamientos históricos menos conscientes (peso de la Historia).

En primer lugar, explico la relación de la elección de 2006 con la historia política peruana posterior a 1930. La historia de América Latina es la historia de un continente buscando el atajo hacia la modernidad, uno que permita cerrar la brecha que la separa de los países occidentales e industrializados. Y alcanzarlos implica construir el Estado-Nación prometido, con las atribuciones que vienen de las ramas estatal y nacional. Nuestro país no escapa a esta dinámica. Las votaciones del Perú moderno han siempre manifestado las ansias de la gente por poner unos cuantos ladrillos más en el edificio estado-nacional²².

²² “Cada vez que aparecieron cambios políticos mayores durante el siglo (1930, 1956, 1968 y 1980), segmentos determinados de la sociedad emergieron buscando acceso a la vida pública a través de sus propias organizaciones. Cada una de éstas reclamaba al Estado que respondiera a sus intereses particulares...”³⁵ (Cotler 1995: 323).

A trompicones, con avances y retrocesos, se ha ido en esa dirección, hacia el Estado-Nación. Algunas porciones de nuestro electorado han conseguido insertarse en el proyecto estadonacional y otras no. Sin embargo, más que una distinción entre integrados y no integrados, hace falta observar la gama de situaciones intermedias entre los dos extremos: las inclusiones inconclusas. El problema en el Perú ya no es, principalmente, el de incluir individuos al proyecto estadonacional, sino el de *concluir* estas inclusiones. Y el elector, sostengo, decide a su candidato favorito según el grado de mayor o menor inclusión en este proyecto. A partir de sus necesidades materiales y simbólicas, elige apoyándose en la historia del Perú moderno, acudiendo a la memoria. Hay quien cree que conseguirá sus necesidades con un candidato democrático y otro con uno dictatorial. Esta elección se hace desde una condición precisa del individuo respecto de aquello que le falta para formar parte del proyecto estadonacional y, una vez que sabe esto, desde una evaluación de la historia moderna que le ilustra quién podría resolver mejor sus carencias.

En segundo lugar, explico el otro componente para la formación de la votación de 2006 (y en definitiva, por su parecido, también de la de 2001). Durante los años ochenta, el Perú conoció el más orgánico y articulado de todos los sistemas de partidos de su vida republicana. Uno nacido al mismo tiempo que la Constitución de 1979, lo cual establecía un sistema político democrático más que saludable luego de doce años de dictadura. Sin embargo, ese mismo periodo vio crecer simultáneamente una guerra interna e inflación devastadora: Weimar y Pol Pot en la misma trágica postal. En dos palabras, el Estado quedó al borde del colapso sin poder cumplir sus más básicas funciones y la población sufrió una sórdida pauperización de sus condiciones de vida. Triste coincidencia. Todos los partidos jugaron algún papel en esos años y no es casualidad que la población los haya castigado con severidad. Así, lo diré con Tanaka (1998) una vez más, la crisis de partidos en el Perú fue más una de gobernabilidad que de representatividad. Y esta crisis de gobernabilidad todavía se deja sentir.

1. Proceso de creación del Estado-Nación

No estaría mal eso de ir a Tiabuanaco, y además a Troya.
Edgardo Rivera Martínez, *País de Janja*

En un célebre ensayo sobre el nacionalismo, Isaiah Berlin (1979) se preguntó por qué el siglo XIX (abarroado de teóricos que aspiraban a predecir el futuro) no había generado uno solo que advirtiera la fuerza futura del nacionalismo como ideología de lo particular. Nadie, entre tanto futurólogo de cualquier signo, predijo el poder que tendría hacia el fin del XIX y, sobre todo, durante el XX. Según Berlin, esto se debía a un cierto desdén de parte de los intelectuales —liberales o marxistas— que veían al nacionalismo como una fuerza irracional y, por lo tanto, destinada a fracasar. Sin embargo, concluía el ensayista, no hay una sola transformación política importante durante el siglo XX que se haya conseguido sin el apoyo de alguna forma de nacionalismo.

Barrington Moore (1966), en su famoso texto sobre los orígenes sociales de la democracia y la dictadura, analizó los tipos de trayectoria que llevaron a distintos países hacia la modernización. Las trayectorias estaban determinadas por diferentes alianzas de clases. En Inglaterra, por ejemplo, una alianza entre burguesía y aristocracia había generado un régimen parlamentario; en Alemania la primacía de la aristocracia terrateniente había llevado hacia el nazismo y la unión de campesinos y obreros había dado lugar a la revolución comunista en Rusia. Ahora bien, Moore también trató de observar países fuera de la esfera occidental, con procesos de modernización más recientes que todavía contaban con una población mayoritariamente campesina como China e India. Su hipótesis para el futuro indio (y que, afirmaba, podría ampliarse a América

Latina y África) era que estos países no adoptarían vías democráticas liberales ni comunistas pero que podrían dar un giro a la derecha. Y cuando Moore piensa en la derecha, está pensando en modelos de desarrollo con un fuerte componente ideológico nacional, como en Italia o Alemania.

Berlin y Moore no compartían gran cosa, salvo la heterodoxia. Aquél un liberal heterodoxo y éste un marxista heterodoxo. Uno estudió las ideas que modelaron el siglo XX y el otro, las condiciones sociales que lo prepararon. Sin embargo, cada uno desde una perspectiva opuesta (o acaso complementaria) percibió la importancia de la fuerza nacionalista en la política del siglo XX. Sobre todo en los países que iban camino de la modernización, el factor nacional sería central para la cohesión social. Incluso las revoluciones en China y Rusia —comunistas e internacionales— debieron echar mano de artificios nacionales para legitimar sus proyectos en principio internacionalistas.

Entonces, lo nacional se convirtió durante el siglo XX en la gran fuente de legitimidad de los proyectos políticos. Ya no simplemente como legitimidad del poder instituido —del Estado, como al momento de la Revolución Francesa— sino, además, como legitimidad de formas particulares de gobernar. Para ser legítimo, hace falta siempre enarbolar la necesidad nacional. América Latina ha comulgado con esta dinámica. Los principios ilustrados desde los cuales fueron fundadas sus repúblicas (a menudo vaciados de contenido y/o traicionados una y otra vez) instauraban la necesidad de contar con un Estado asentado en una Nación y la necesidad de contar con un Estado que fuera emanación directa de esa Nación. Pero tal Estado y Nación había que construirlos. Y se comenzó por el Estado, como en todas partes, cuyas manifestaciones son materiales. La construcción de la Nación, cuyas manifestaciones son más etéreas, se dejó para luego.

El primer imperativo de las nuevas repúblicas latinoamericanas fue erigir un Estado. Trazar fronteras, instaurar armadas y recaudar impuestos. Pero las fronteras no eran claras, se intentó fusiones (Perú-Bolivia), se inventaron estados (Uruguay) y se deshicieron varios (Nueva Granada y secuelas). Las fuerzas armadas eran inexistentes o tan débiles que fueron incapaces de imponer el orden sobre el territorio nacional donde caudillos regionales eran las verdaderas autoridades. Y, por último, el Estado era un actor tratando de recaudar impuestos. En suma, las atribuciones estatales que en Europa podíamos advertir hacia el siglo XVI no estaban presentes en nuestro continente bien entrado el siglo XIX.

Con el correr del siglo XIX, se consiguió cierta estabilidad en las repúblicas latinoamericanas, se trazaron fronteras más o menos definitivas, los caudillos regionales no dejaron de existir pero pasaron a apoyarse en votos y clientelas antes que en los fusiles, y el Estado pudo recolectar impuestos (siempre con dificultades), ideando programas que acercaran a sus burócratas con la población²³. Las fuerzas armadas se burocratizaron y fueron adquiriendo el uso legítimo de la fuerza. Así, con las fronteras trazadas, con los estados aceptando la soberanía de los vecinos y con burócratas y militares, el Estado tomó cuerpo y fue por fin una realidad. Nada de esto constituye una alabanza de aquellos primeros estados, permisivos con el abuso y herramientas de fines personales, estados que dejaron en muchos casos a la población autóctona más abandonada y pobre que la Colonia. Pero el objetivo aquí no es demostrar sus virtudes éticas, sino la presencia efectiva de sus atribuciones, y ésta se construyó durante el siglo XIX (López-Alves 2000).

²³ Para las dificultades del Estado peruano en su esencial función de recaudar impuestos, véase Contreras 2005.

Si la prioridad estuvo centrada en la construcción de un Estado, también apareció el problema de la Nación. ¿Cuál Nación? ¿Quiénes la integran o integrarían? ¿Qué hacer con los millones de indígenas? Siendo las élites independentistas en su mayoría hispánicas —en la lengua, en la religión y en la cultura— la apuesta independentista *vis à vis* de la Nación se convirtió, según François Xavier Guerra (2003), en el desafío “de cómo construir Estados-naciones separados a partir de una nacionalidad en gran parte común a todos.” Esta comunidad nacional se fue construyendo desde distintos paradigmas inclusivos: desde la ciudadanía *cívica* de los primeros días, desde la ciudadanía *civilizada* inspirada en Sarmiento a mediados del XIX, hasta llegar la Nación *homogeneizada* de fines del XIX, que determinaría los proyectos nacionales durante el siglo XX (Quijada 2003).

La construcción de esta Nación no se ha hecho en lo sustancial de manera distinta de como se forjó en Europa. La afirmación de una burocracia sobre un territorio y el vínculo directo con sus pobladores fue desarrollando un sentido de pertenencia. La aparición de las fuerzas armadas y partidos políticos solidificaron la existencia de un espacio político nacional y la recurrencia de elecciones apuntaron en la misma dirección (Aljovín 2005). El posterior desarrollo durante el siglo XX del monopolio legítimo de la educación (para utilizar la formulación de Gellner) hizo también lo suyo y los grandes programas educativos jugaron un papel central en la edificación de la idea nacional. Así, lo que aquí postulo no es la existencia de alguna inmanencia nacional, un sustrato metafísico que da unidad a lo “peruano”; defiendo que una cierta idea de pertenencia se ha construido al incorporar a grandes masas bajo la administración efectiva del Estado. Que sea desde las FF AA, las recurrentes elecciones en el país, las guerras externas o la educación expandida, se ha construido una idea de pertenencia al Perú. Mi punto central es que la población ha incorporado la voluntad de *querer ser* nacional del Perú. Tal voluntad implica que la Nación no está cons-

truida definitivamente, que no incluye a toda la población, pero que ésta reclama sentirse parte. Es posible que durante el XIX y buena parte del XX ni siquiera supiera de su no inclusión pero hoy, gracias al desarrollo de los distintos mecanismos mencionados (sumado al de los medios de comunicación masivos), la población continúa un “proceso incontenible de fusión” (Méndez 1996) y es consciente de su pertenencia.

Lo que trato de explicar aquí es que el Estado ha sido eficaz, como lo fue en Europa, en crear la imagen de lo nacional, en inventar la idea de la existencia de una Nación peruana distinta de la ecuatoriana y de la chilena. Y crear esa idea nacional es básicamente destruir la posibilidad de identidades que desafíen la lealtad nacional. En términos de Thurner (2006), la misión colonizadora logró convertir al indio en un cristiano republicano, consiguió transformarlo en un hombre político con alma católica. Esta eficacia se encuentra en una secuencia larga de acontecimientos históricos de muy distinta naturaleza pero que parecen haber apuntado en la misma dirección. Luego de la derrota de la rebelión de Túpac Amaru, el poder español tuvo “éxito” en reprimir todo tipo de articulación de una conciencia “indígena” en el sur del país a través de una represión brutal (Walker 1999: 16-54). Luego de la guerra con Chile, se afianzó la necesidad de “nacionalizar” rudamente a todas las poblaciones aún no incorporadas al proyecto nacional, pues se asumió que tal era la causa de la derrota. Finalmente, durante el siglo XX, el lenguaje de clases antes que el étnico continuó con el debilitamiento de cualquier otro tipo de nacionalidad al interior del territorio peruano y afianzó la idea nacional única peruana²⁴. Como concluyen Rosemary Thorp *et al* (2006: 468) en un reciente artículo:

24 Deborah Yashar (1999: 79-84) defiende una idea contraria. Según ella, la debilidad del Estado corporatista latinoamericano para imponerse sobre estas poblaciones indígenas terminó fortaleciendo la politización de las identidades locales indígenas. Al menos para el caso peruano, el diagnóstico me parece inexacto. Los movimientos indígenas parecieran ser, más bien, como piensa Henri Favre (2002: 72-73), “de origen rural e indio, pero urbanizados por la migración y occidentalizados por la escuela, sus dirigentes responden al perfil típico del individuo que, surgido desde abajo en la escala social, ha visto frustradas sus esperanzas de ascensión por la trombosis que afecta repentinamente a la sociedad. La reconstrucción o la invención de una cultura india expresa una disidencia causada por el sentimiento del fracaso”.

“Tal control y contradicciones llevó al debilitamiento de las comunidades. Después de todo, el legado histórico de estos dos siglos fue uno de ausencia de liderazgo. En el norte, especialmente, también hubo la pérdida del idioma: la población indígena hoy es hispano-parlante. [...] El resultado de la historia fue el fracaso de indígenas y comunidades campesinas para construir una identidad común; las diferencias eran muchas y las distancias y barreras físicas enormes. Era más rentable suprimir el propio origen y trabajar en la asimilación, particularmente si uno se había mudado a una zona urbana, como ya lo habían hecho casi diez millones al final el siglo XX. Es importante notar que esta migración no se dirigió hacia las ciudades de la sierra cercanas y relacionadas culturalmente con las comunidades de origen (*hinterland*), como en Bolivia y Ecuador, sino principalmente hacia lejanas ciudades costeras, un ambiente hostil y extraño donde una cultura diferente prevalecía.”

A estos procesos hay que agregar la aparición de Sendero Luminoso y la represión de las FF AA. Ambas fuerzas, movidas por distintas ideas e intereses, impidieron también que alguna idea de nacionalidad no peruana germinara en los últimos tiempos y afianzó la idea de lo peruano hasta en los puntos más alejados del país. De igual manera, debemos tener en cuenta algunos datos sobre los cambios políticos y sociales profundos del país en los últimos años, que han extendido la ciudadanía drásticamente. En 1956 votó el 14,9% de la población y en 2001 el 45,3%. En 1960 la tasa de inscripción en la escuela secundaria era de 18% y en 1996 de 73%. Por tanto, la crisis del Perú oligárquico y su camino hacia la desaparición desde el gobierno de Velasco, junto a

la legitimación de manifestaciones culturales populares de todo tipo en los medios, han abierto una nueva forma de Nación.

Las naciones no son hechos de la naturaleza ni comunidades sentimentales que anhelan un Estado. Por el contrario, son, generalmente, comunidades construidas desde la fuerza de un Estado que difunde la impresión de una unidad históricamente entrelazada y donde una élite oriunda de una región particular articula un discurso nacional que alcanza las periferias. Mi postura es que este ejercicio de construcción del imaginario nacional desde el Estado ha dado frutos en el Perú. No postulo como algunos que la Nación peruana ya existía al momento de la Independencia ni que ésta sea algo tangible, mensurable, independiente en el espacio y en el tiempo²⁵. Y menos aun que represente una construcción inteligente, virtuosa, simbiosis exacta y constructiva de lo nuestro y de lo ajeno (de Troya y Tiahuanaco, en la fórmula de Rivera Martínez), ni una Nación crítica respecto del poder y solidaria con el prójimo. Desde luego que no, una página al azar del informe de la Comisión de la Verdad lo desmentiría. Por el contrario, constato una idea de Nación destruida desde las clases de Educación Cívica, a partir de héroes militares, desde el resentimiento hacia Chile y la mofa hacia Ecuador o Bolivia, más vinculada al patriotismo y a los desfiles que a la existencia de un sustrato público común²⁶.

Un excelente artículo de Stepputat (2004) lo ha demostrado al describir los festejos del aniversario de creación de un distrito de las alturas de Huancavelica. Los festejos replican las celebraciones nacionales: izamiento de banderas, homenajes a

²⁵ Me parece que esta es la postura, por ejemplo, de Karen Sanders (1997), quien no cree en la idea de “inventar” una Nación y defiende la existencia de un sustrato común y tangible entre los peruanos.

²⁶ Drinot (2006) lo ha dicho certeramente. En el Perú el estudio de la historia en la escuela se ha centrado en establecer una memoria colectiva y en actuar como vector para la identidad nacional. No se ha centrado en preparar al estudiante para que entienda el mundo en el que va a vivir ni en desarrollar su espíritu crítico.

los héroes, himnos y paradas. Y el papel central en los festejos es atribuido a las instituciones estatales: escuelas, concejos, hospitales y postas o a organizaciones con reconocimiento estatal (clubes de vaso de leche o comunidades campesinas). De otro lado, Steputtat también apunta en nuestra dirección cuando constata que la Escuela y la Fuerzas Armadas son las dos instituciones que han difundido con más éxito las ideas de pertenencia a un Estado nacional y que han hecho visible la acción de éste. Todo ello, además, emparentado con la *mission civilisatrice* del Estado.

Ahora bien, si somos honestos, no hemos llevado a cabo una senda muy distinta del resto de países en el mundo. Los estados se asientan en la fuerza y la idea de pertenencia se ha construido desde las guerras. Charles Tilly lo trabajó para Europa y López-Alves para cinco casos en América del Sur. El gran desafío es transformar esa idea de pertenencia primera en una inclusión crítica y democrática. En alguna medida hace falta domesticar los sentimientos de pertenencia, ya que no son positivos *per se*. Tener Nación no nos acerca necesariamente a la Democracia²⁷. La Nación también puede actuar despótica y cruelmente. La Nación serbia eligió a Milosevic y apoyó sus barbaridades, y la Nación alemana tuvo un grado alto de complicidad con el régimen nazi. Si creemos que la existencia de una Nación supone la presencia de instituciones democráticas estamos mezclando dos esferas distintas y poniendo en demasiada estima a la Nación.

Entonces, lo que he dicho hasta aquí es que el Estado, a grandes rasgos, se erigió y desplegó sus principales atribuciones durante el XIX. Una vez que estuvo en pie, se pudo tratar la gran cuestión de la incorporación nacional. Y se hizo como en Europa: desde arriba (desde luego en esta idea de Nación

²⁷ Ésta era la tesis clásica de Cotler (2006). La ausencia de Nación ha impedido el desarrollo de instituciones democráticas.

peruana hay elementos centrales que provienen de “abajo”, pero me parece que las ideas de Gellner sobre el factor de la educación al imponer un imaginario nacional dan pie a creer que la gran articulación de esto se hace desde arriba²⁸). No se trata de la existencia de una Nación peruana como comunidad espontánea y sentimental, se creó una Nación peruana como producto de la fuerza del Estado. El Estado consiguió ser percibido como algo de lo que se *puede y debe* ser parte. Desde el propio Estado, paradójicamente, se genera voluntad de más Estado. Como afirma López-Alves (2000), durante el siglo XIX la debilidad del Estado hizo que la fuerza residiera en la sociedad civil. Por el contrario, durante el XX la fortaleza estuvo en el Estado. Por mi parte, agregaré que *justamente* porque el Estado fue fuerte en el XX, los sentimientos de pertenencia pudieron aparecer y cuajar pues se derivan de su fuerza.

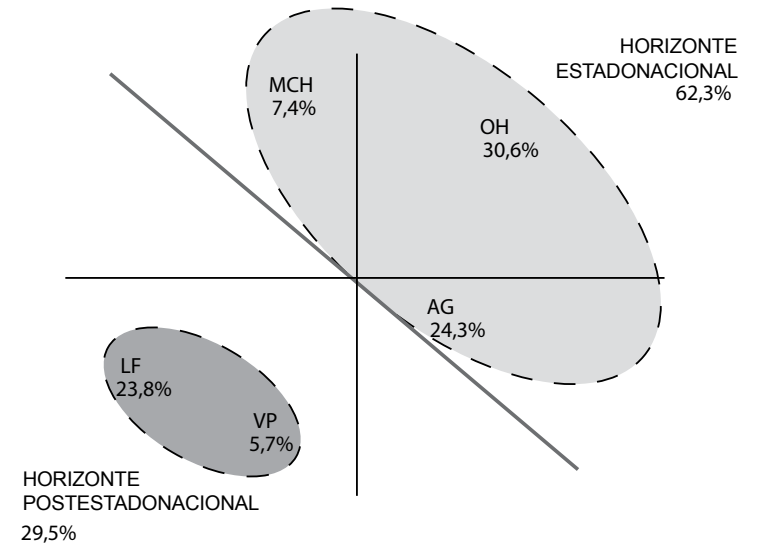
Ahora bien, no afirmo que Estado y Nación hayan llegado a su desarrollo final (¿qué podría significar eso?), sino que ambos han impuesto su fuerza y legitimidad. Pienso que la población, los electores, están en una posición determinada respecto del desarrollo del Estado y la Nación. No caigo en el error de creer que Estado y Nación conforman una unidad natural. Sin embargo, los electores necesitan de ambos. Y hay electores que desean algo del Estado y hay otros que desean algo de la Nación. A veces necesitas un juez, a veces necesitas que no te discriminen en tu propio país. Aquella necesidad es estatal, ésta es nacional. Lo importante es que cada elector se encuentra en un punto (difícil de determinar) de su relación con el Estado y con la Nación, y mi hipótesis principal es que *según en qué situación se encuentre un elector respecto de cada uno de ellos elegirá a un candidato*.

²⁸ Para el papel jugado por los de “abajo” en la elaboración de proyectos políticos nacionales (centrado en el Cuzco, véase Walker [1999]).

2. El peso de la Historia

Y me digo que hay un lazo secreto entre las luchas antiguas y las presentes, que éstas no son sino la continuación de las pretéritas, bajo diferentes nombres, ideales y pretextos.
Julio Ramón Ribeyro, *Prosas Apátridas*

Para demostrar la idea con que cerré el capítulo precedente (los electores deciden un candidato según la situación en que se encuentran frente al Estado y la Nación), reproduciré la matriz que da origen a este ensayo en la introducción.



Sostengo que la población del lado superior derecho de la matriz (el sector estadonacional) es aquella que tiene necesidades aún pendientes con el Estado nacional. Estas necesidades pueden ir desde derechos muy básicos hasta sociales, pero pasa también por necesidades simbólicas de inclusión que no son fáciles de concretar a través de políticas públicas, sino que están relacionadas con patrones de conducta igualitarios, formas de cotidianidad sin discriminación. Esto quiere decir que la población quiere ser incluida en este proyecto de Estado nacional; vale decir, que la jurisdicción del Estado sea efectiva y que la Nación la reconozca como compatriota. Dos conclusiones de esto: Primero, el imaginario estadonacional peruano ha logrado anclar en la población que no espera formar parte de otro Estado-Nación (Chile, Ecuador o Venezuela) ni espera generar uno propio en una dinámica particularista al interior del país²⁹. En segundo lugar, el anclaje de este imaginario no supone la existencia completa y eficaz del Estado-Nación en cada uno de los habitantes pero sí el deseo de pertenecer plenamente. Por lo tanto, dependiendo de dónde se encuentre uno respecto del binomio estadonacional podrá elegir el candidato que más lo acerque al Estado-Nación. Ahora bien, el elector del ángulo inferior izquierdo es uno que ya está integrado al Estado-Nación y, por tanto, forma parte ya del horizonte postestadonacional.

29 Según Montoya (2006) en una reciente entrevista, esto no sería el caso en el Perú. Las naciones indígenas estarían esperando un buen liderazgo para emprender un movimiento de reivindicación nacional alejado del Estado nacional peruano. Discrepo con estas visiones *voluntaristas* que, desde hace ochenta años, esperan al Lenin de los Andes.

Más allá de la discrepancia, Montoya utiliza como equivalencias “cultura andina”, “pueblo quechua” “ciudadanía étnica” sin que uno entienda bien a qué hace referencia. En algunos pasajes dice (celebra) que los indígenas “no quieren saber nada con este Estado” y en otro pasaje dice (celebra) que los aguarunas afirman “somos peruanos pero también déjenos ser aguarunas.” “¿Por qué tiene que haber contradicción entre ambas ciudadanías?”, se pregunta Montoya y concluye que ahí “hay una crítica extraordinaria a la noción de ciudadanía única occidental.” Primero, ¿no quieren saber nada con este Estado o quieren la doble ciudadanía? En segundo lugar, lamentablemente, hay contradicción porque, a menos que vaciemos de contenido la noción de ciudadanía, ésta es la relación entre un Estado y unos ciudadanos. En la medida que no existe Estado aguaruna, no habrá ciudadanía aguaruna. Ahora bien, tal vez Montoya quería decir que ambas *nacionalidades* no son excluyentes (con lo cual yo estaría plenamente de acuerdo) pero es el problema de utilizar categorías distintas como equivalentes.

Este elector tiene necesidades distintas de las del sector estadonacional y vota para satisfacer estas necesidades. Además, geográficamente, este votante está asentado en regiones que se vienen beneficiando del comercio internacional de productos manufacturados o de la agroindustria. Quiero recalcar que no es sólo el contacto con el mundo internacional económico lo que determina este carácter, sino el *tipo* de contacto con el mundo comercial. Las zonas donde simplemente se está extrayendo mineral para compañías extranjeras no se benefician de una lógica postestadonacional, de aranceles reducidos y fronteras más permeables. Simplemente son zonas de extracción de materias primas como se hizo tantas veces en la historia del Perú (el gigante con pies de salitre de Contreras [2002: 19]) sin que esto vaya a generar, necesariamente, una mejor calidad de vida en dichas zonas, ni una presencia más efectiva del Estado.

Ahora bien, esta elección se hace también en función de la historia política del país. La historia importa. Según Stein (1999), el Perú habría pasado por tres etapas de populismo. La primera, en los años treinta, con Haya y Sánchez Cerro; luego, hacia la mitad del siglo, con Odría, Belaúnde y Velasco; y, en sus postrimerías, con Alan García y Fujimori. El problema con esta apreciación es que si todos estos nombres son populistas, ¿quién no lo es?³⁰.

La noción de populismo contiene una gran dificultad (que es al mismo tiempo su gran virtud): significa lo que queremos que signifique. Como vimos en el apartado precedente, el populismo en América Latina fue una fuerza política inclusiva construida desde líderes carismáticos. En general, los populismos fueron democráticos y poco liberales. Los grandes líderes populistas llegaron al poder a través de elecciones.

30 Un problema similar aparece en los textos de Weyland (2006) cuando afirma que, por ejemplo, la segunda vuelta de 2001 enfrentó a dos populistas (García y Toledo) y cuando concluye que la única forma de hacer política en el Perú es de manera populista.

Y una vez entronizados desarrollaron políticas populistas de distinto orden, algunos con mucho gasto y otros prudentes con la caja.

El Perú presenta algunas dificultades. Primero, a diferencia de Getúlio Vargas, Juan Domingo Perón o Lázaro Cárdenas, nuestros populistas no fueron demócratas de “baja intensidad” sino dictadores. Odría y Velasco llegaron al poder con golpes de Estado. En segundo lugar, también a diferencia de aquéllos, los nuestros no fueron líderes carismáticos (es la razón por la cual Hugo Neira (1996) se resiste a llamar populista a Velasco) y sus imágenes no son mitos para la población. En tercer lugar, nuestro gran populista, Haya de la Torre, jamás llegó al poder con lo cual —si el populismo es una forma de ejercer el poder— no se puede decir que lo ejerciera de manera populista. Finalmente, el único de nuestros populistas que encaja en la categoría sin mucho esfuerzo es Fujimori. Elegido a través de elecciones, devenido en carismático y haciendo un uso del poder quintaesencialmente populista ha sido nuestro mejor exponente de aquella tendencia política de mediados del siglo XX. Entonces ¿vale la pena utilizar una categoría que se aplica mal al Perú simplemente por costumbre? Responderé con Alan Knight (1998) que vale la pena a condición de que veamos el populismo únicamente como un *estilo* de hacer política.

El Perú, entonces, más que *etapas* de populismo, como sostiene Stein, lo que tuvo (y tiene) son *vertientes o partes* del populismo clásico. Vertientes que todas juntas parecen formar el cuerpo del populismo clásico.

En el Perú no tuvimos el representante paradigmático del populismo. Sin embargo, sí hemos vivido ese estilo populista al que refiere Alan Knight; lo hemos tenido por partes, de manera *desmembrada*. No tuvimos *un* populista pero sí varios

líderes que recogían algunas de las características del populismo, no todas³¹. Si el populismo latinoamericano prometía el desarrollo del Estado como puntal productivo, la comunión nacional y una democracia directa y no liberal de aires populacheros, nadie podrá decir que no hayamos tenido todo eso. Pero no lo tuvimos aglomerado en un solo personaje y en un solo periodo. Hemos conocido este estilo confiado en la legitimidad y descreído de la legalidad, fundado en el desempeño, en las encuestas como plebiscito cotidiano. Este estilo es recurrente, aunque los líderes que lo encarnen sean pasajeros. El estilo sobrevive a sus manifestaciones temporales con su vocación primariamente democrática y su aversión a los controles institucionales. Este estilo es, lamentablemente, una oferta política y una demanda social —¿el huevo o la gallina?—, una dinámica infinita sin paciencia hacia las instituciones y una voluntad desmedida por solucionar los problemas con un golpe de puño sobre la mesa³². Nuestro populismo estuvo desmembrado en tres tradiciones, tres vertientes que reflejan formas particulares del estilo descrito, pero sin que ninguna fuera enteramente populista (vale decir, con todas las características mencionadas en la definición de Knight).

En primer lugar, el modelo *conservador*. Sánchez Cerro, Odría y Fujimori son tres expresiones conservadoras de nuestro populismo autoritario y con expansión de servicios estatales básicos. Aliados del capital extranjero, héroes del orden, queridos por la plebe y adulados por la oligarquía, se encargaron de perseguir a los revoltosos de sus respectivas épocas con voz

31 Si tuviera que elegir una definición de populismo escogeré la de Alan Knight porque, justamente, este autor no tiene confianza en que se le pueda definir certeramente y elabora una casi “probabilística”. Así, en términos generales, el populismo sería “una etiqueta para movimientos/ regímenes que combinan a) movilización de masas; b) una poderosa convocatoria popular eventualmente focalizada sobre; c) un líder carismático; d) ostensibles políticas de redistribución; e) nacionalismo pero que f) no son socialistas ni comunistas, ni tampoco (generalmente) demócratas a cabalidad.” (Knight 2001: 165).

32 A algo similar apuntan Aljovín y Jacobsen (2005: 17) cuando afirman: “Por mucho tiempo, los ciudadanos de las repúblicas andinas no vieron a los militares o caudillos civiles, automáticamente, como antidemocráticos”.

marcial. El recuerdo de Sánchez Cerro se ha diluido, pero la admiración que el pueblo pobre sentía por él parece haber sido similar a la que gozaron Odría y Fujimori, admiración sostenida por obras e identificación primaria (sobre todo en el caso de Sánchez Cerro y Fujimori, dos exponentes de los estratos tradicionalmente excluidos de la vida pública nacional).

En segundo lugar, la vertiente *nacionalista* de nuestro populismo desmembrado. Con menos espacio en la historia pero con un impacto enorme, el representante fundamental es Velasco Alvarado. La fuerza principal de este modelo radica en que llevó a cabo la gran reforma que el país político había prometido durante cuarenta años: la Reforma Agraria. Desde los años treinta se coincidía en que debía ponerse fin al sistema oligárquico de dominación (Cotler 2006) pero sin conseguirse jamás. Como dicen Cueto y Contreras (2004):

“A final de los años sesenta, barriadas marginales, millares de vendedores ambulantes pululando por las calles del centro y protestas cada vez más agresivas de los campesinos y trabajadores organizados, tocaban cotidianamente la puerta de Palacio de Gobierno, sin que desde adentro hubiera una respuesta a la altura de estas demandas. Hasta que un día fue un viejo tanque Sherman de la Segunda Guerra Mundial, con cañón de 75 mm, quien, ya no tocó, sino que literalmente derribó las rejas de palacio de Gobierno”. (2004: 323-324)

Entonces, si el modelo conservador implica la obtención del orden por decreto, el estilo nacionalista es el modelo de redistribución por decreto. Es menos importante para la población si los resultados finales de estas reformas fueron exitosos o no, lo importante es que se hicieron. De otro lado, la reforma

agraria ha quedado en el imaginario nacional como un paso importante para la consecución de un país más igualitario. En 1980, al volver la democracia, ya nadie discutió la legitimidad del voto para los analfabetos (para decirlo sin medias tintas, el voto para los indígenas). Que los resultados económicos fueran un desastre, no opacará la medida entre los beneficiarios de aquella reforma.

La tercera vertiente de nuestro populismo desmembrado es la *institucional*. El APRA y Acción Popular son sus representantes. Lamentablemente, el talante inclusivo y la retórica nacionalista de sus líderes jamás encarnaron un gobierno con las mismas características. Haya jamás llegó al poder a causa de una eterna alianza entre militares y oligarquía (a la que sorprendentemente luego él mismo se sumó) y cuando, por fin, el APRA llegó a Palacio de la mano de García, generó la crisis más severa desde la guerra con Chile. Acción Popular, por su parte, dejó dos gobiernos ineficientes para el recuerdo nacional. Aun así, el APRA y Acción Popular son nuestras dos expresiones de partidos con un estilo populista. Su objetivo era fortalecer al Estado y regenerar la Nación pero, a diferencia de las otras dos vertientes, dentro de los cauces institucionales.

El populismo desmembrado en sus tres vertientes ha dominado la política peruana desde los años treinta. Cada una cumple con satisfacer —a su modo y con matices— las necesidades estadonacionales de la población. Vale decir, han sido eficaces desde la retórica y/o la práctica en anclar la idea por la cual son éstas las opciones que podrán eficazmente cumplir con los propósitos de realizar el Estado-Nación. Tienen en común ser percibidos como las opciones que permitirán la construcción de un Estado nacional. Como se ve, la vertiente *conservadora* satisface las necesidades básicas de la estatalidad. La nacionalista, evidentemente, las

de Nación; y la institucional, trata de articular ambas pero desde una forma democrática. Estas tres vertientes que juntas conformarían nuestro populismo son tipos ideales apoyados en la experiencia histórica. En la práctica las necesidades de los votantes de uno se mezclan con las de otro. Tales categorizaciones, pues, no buscan ser reflejo de cómo es *en verdad* nuestro votante sino un instrumento para entender cómo responde nuestro votante³³.

Según los distintos momentos de la historia nacional, el país terminó inclinándose por una u otra vertiente de nuestro populismo. Sostengo que las elecciones de 2006 no se llevaron a cabo de distinta forma. La elección tuvo representantes de cada vertiente de nuestro populismo. Fue una elección donde el actor principal fue el populismo desmembrado en sus tres vertientes, el único que aparece frente al elector del horizonte estadonacional como aquél capaz de satisfacer sus necesidades. Si el elector precisa de más Nación, elegirá al candidato que se parezca a Velasco; si precisa de más Estado, a aquél que se acerque al modelo conservador; si precisa de las dos cosas, pero con conciencia institucional, se acercará a alguien más parecido a nuestros partidos tradicionales. Ahora sostendremos esto a partir de cada uno de los candidatos en la elección general de 2006, comenzando por aquéllos que representan el horizonte estadonacional³⁴.

33 De la misma manera en que estas tres vertientes lograron anclar la idea de ser aquéllas que podían satisfacer las necesidades del Estado-Nación, hay otras posiciones que no lo lograron. La Democracia Cristiana, luego el Partido Popular Cristiano o las izquierdas en cualquiera de sus formas no lo consiguieron. Esto no quiere decir que sus propuestas o políticas fueran erradas, simplemente que no consiguieron ser identificadas como eficaces en la tarea de construcción estadonacional. Éste es un ensayo que se preocupa por las percepciones y tradiciones en el electorado más que por *políticas*.

34 El lector debe tener siempre presente la matriz principal de todo el ensayo pues es esa gráfica la que permite entender las distintas aristas de la argumentación.

El horizonte estadonacional

Martha Chávez o la vertiente conservadora

¿Qué busca el votante de Martha Chávez? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus temores? Ninguna de estas preguntas puede ser respondida si no se hace un examen de los diez años en el poder de Alberto Fujimori. Martha Chávez aceptó sacrificarse en nombre del fujimorismo aun sabiendo que no conseguiría una victoria. Sin embargo, los resultados en la elección presidencial así como los del Congreso de la República demostraron que el peso del prófugo expresidente todavía se hacía sentir. ¿Qué sobrevive del gobierno de Fujimori?

En un artículo que ya hemos citado aquí, Cotler (1995: 353) termina apuntando sobre Fujimori que “sus éxitos relativos en la lucha contra la inflación y la subversión responden a una necesidad de orden que la sociedad peruana ansía.” De otro lado, en un ensayo sobre las relaciones entre neopopulismo y neoliberalismo en América Latina, Weyland (1999: 190) concluye que en “el corto plazo los neopopulistas neoliberales también consiguieron algunos notables éxitos. Sin sacrificar permanentemente la democracia, lograron revertir las penurias económicas, llevando a cabo reestructuraciones debidas a la crisis de la deuda y a las nuevas circunstancias globales [...] Tal vez la popularidad de estos populistas no fuera absolutamente inmerecida.”

Para entender la presencia de Fujimori en nuestra política es indispensable detenerse en sus “éxitos”. Weyland y Cotler reconocen el papel desempeñado al satisfacer demandas claras de amplios sectores de la población. Pero esto no es común entre los científicos sociales: nos cuesta distinguir la criminalidad del régimen de sus logros materiales para sectores enormes de la población.

Fujimori heredó un país quebrado, sin reservas y en guerra. Este punto inicial no puede perderse de vista al analizar la popularidad que amasó durante la década. No es menester aquí recoger infinidad de datos para comprobar una situación conocida, sólo citaré algunos puntuales que iluminarán nuestras ideas del periodo fujimorista. Por ejemplo, habiendo recibido un país sin reservas internacionales, en 1995 el Perú contaba ya con seis mil millones de dólares en reservas de ese tipo. Después de años sin crecimiento económico alguno, en 1994 el Perú creció 12% (sólo China creció un porcentaje similar aquel año). Luego de haber tenido en 1990 una inflación de casi 7.500%, en 1994 ésta ya se reducía a menos de 10%. Sin embargo, más importante que esto fue su éxito en la lucha contra el terrorismo. Luego de una guerra que costó casi setenta mil muertos al país, en 1994 “sólo” se contaron 297 muertos debido a la guerra interna y los atentados terroristas se redujeron hasta desaparecer. Recuperar el control del Estado era una necesidad primaria, de supervivencia. El país no habría podido sobrevivir mucho tiempo más con un Estado en guerra, incapaz de recaudar impuestos y sin reservas. Por tanto, no hay que dejar de pensar que el punto de partida de la valoración popular de los diez años se hace desde esta perspectiva. Esto no quiere decir que Fujimori fuera un iluminado que sabía cómo solucionar los problemas del país. Se trata de un intento por comprender su presencia política.

Según Roberts y Arce (1998), Fujimori mantuvo el apoyo de las clases bajas gracias al crecimiento económico entre 1993 y 1995 y por sus programas contra la pobreza. A esto se agregó su victoria sobre el terrorismo. Por mi parte, invertiré el orden explicativo: a la solución de la guerra interna se sumaron los éxitos económicos. Imponer el orden sobre un territorio es el primer mandamiento de un Estado. Los problemas económicos, aunque sean agudos hasta la miseria, pueden ser paliados sin presencia del Estado. Que sea a través de comedores po-

pulares o de formas de autoabastecimiento, la penuria económica es una prioridad posterior en las demandas de una población respecto del Estado. La primera exigencia es la de acabar con la guerra. No sólo la teoría lo confirma (Hobbes y sus hombres asustadizos) sino que, como vimos en el capítulo anterior, en la historia de la formación de los Estados, su primera atribución fue arrancar la violencia de manos particulares y establecerla en manos estatales, las únicas legítimas para utilizarla. Esta necesidad primaria en la creación de los Estados (acaso relacionada con la Baja Edad Media para los casos europeos occidentales) era palpable en el Perú durante los años ochenta conforme la guerra interna se expandía y se hacía cada vez más violenta. Entonces, por orden teórico e histórico, la reapropiación del monopolio legítimo de la violencia por parte de un Estado es la primera demanda social y, por tanto, aquella que será más abiertamente reconocida por la población. Y en un país donde la guerra interna fue aun más terrible para los sectores pobres, ya podemos darnos cuenta de quiénes agradecerían más su fin.

En 1995, Apoyo realizó una encuesta en la que sondeaba las razones para votar por Fujimori. La respuesta más obtenida, 37% (promedio de todas las clases sociales), fue “porque ha creado un buen gobierno.” Esta respuesta, lamentablemente, no sirve de mucho ya que seguramente contiene los factores que permiten el buen gobierno. Así que veamos la segunda y tercera respuesta más obtenida, “ha derrotado al terrorismo” y “ha mejorado la economía”, respectivamente. En el sector A, ambas respuestas obtienen 28%. Sin embargo, en el sector D (el más bajo por entonces), aquélla recibe el 24% y la económica, 14%. Diez puntos de diferencia que inducirían a pensar que en los sectores pobres el éxito económico era menos importante que la derrota ante el terrorismo. Otro sector donde la diferencia es muy marcada entre A y D es respecto a la respuesta “ha mejorado las obras públicas.” Mientras que

un 12% de A lo precisa como razón para votar por Fujimori, en el sector D lo hace el 24%. Entonces, la razón fundamental del apoyo a Fujimori se debía a la victoria sobre los grupos terroristas. Y es lo que ha quedado en la memoria colectiva respecto de Fujimori, puesto que a partir de 1996 ya no hubo crecimiento económico importante, las condiciones de pobreza no mejoraron y, sin embargo, la gratitud en grandes sectores de la población ha perdurado.

En una entrevista antes de las elecciones de 2006, el periodista Rafo León soltó una intuitiva y triste respuesta, pero acaso cierta: “la gente del interior siente rabia porque les quitaron a su chino.” Ay. ¿Qué significa *su* chino? Fujimori, como los populistas *incontornables*, gobernó con estilo populachero y reflejó las miserias y esperanzas populares. Se ha repetido hasta la saciedad el eslogan que llevó a Fujimori a la victoria en 1990: “Honradez, Tecnología y Trabajo.” Importante, claro. Pero no podemos olvidar el utilizado durante la segunda vuelta, el más audaz de todos y, sin duda, el más impactante: “Un peruano como tú.” La identificación, claro está, no residía en esos ojos chinitos. Carlos Iván Degregori (1991) ha escrito un ensayo memorable —y ya clásico— sobre las identificaciones de Fujimori con el pueblo peruano. El Perú, que desde los años treinta había comenzado a modernizarse, eligió al representante de *su* modernidad y no a Vargas Llosa, representante de otra modernidad y que, acompañado de quien sabemos, terminó representando ya no la otra modernidad, sino la tradición más rancia.

Esta identificación entre el pueblo y Fujimori se fortaleció durante su gobierno. Una relación directa que se asentó a través de los medios de comunicación y que era indispensable ante la ausencia de un partido político fujimorista. No sólo Fujimori generó una identificación popular sino que, durante su mandato, una serie de manifestaciones culturales —y no tan culturales— ganaron legitimidad y abandonaron los socavones de la vida na-

cional. La música chicha que en los años setenta sólo se oía en los pueblos jóvenes y en los ochenta a las cinco de la mañana en la televisión, en los noventa inundó las televisoras y radios incluso en horarios estelares, y los ídolos de la canción popular fueron reconocidos por todos. Los famosos y vilipendiados *talk shows* también sacaron a luz una parte de la sociedad peruana que nunca había sido mostrada. El *pueblo* de pronto apareció con mucho más fuerza en la escena oficial. Los medios se democratizaron vía el *achoramiento*, con la anuencia y promoción del régimen *achorado*. En un notable ensayo, Gonzalo Portocarrero (2006) ha dicho que los caudillismos aportaron calor popular y apertura a la participación en la vida política. Desde luego, ese ha sido su papel en América Latina.

La figura de Fujimori, en su mimetización cotidiana con los sectores más pobres y excluidos del país (usando todo tipo de traje folclórico y exponiéndolo en los medios de comunicación), generó cierta legitimidad de aquellos sectores, volvió públicos a sectores escondidos. Aunque vueltos mercancía, aparecieron. A eso debemos agregar las luchas políticas que Fujimori ganó. Primero a Vargas Llosa y la sociedad tradicional. Luego volvió a imponerse a esta sociedad tradicional en 1995. Es cierto, las clases altas lo apoyaron, pero las caras visibles de la oposición a Fujimori siempre fueron señorones muy decentes y muy blancos, pero nada representativos del nuevo Perú. Así, Fujimori en sus diez años terminó asentando, publicitando y, en algún sentido, legitimando el rostro de este nuevo Perú. Como afirman Roberts y Arce (1998), los nuevos sectores populares de los noventa no estaban divididos en términos ideológicos, estaban más inclinados a confiar en el mercado que en el Estado y organizacionalmente no se fundaban en ninguna acción colectiva sino que deseaban una relación directa con el líder. Luego, si en 1983 Izquierda Unida había ganado la alcaldía de los 12 distritos más pobres en Lima, en 1990 Fujimori obtuvo más del 50% de la votación en cada uno de esos mismos doce distritos.

Ahora bien, esta forma fujimorista de gobernar fundada en el llamado directo al pueblo y legitimada a través de la acción agresiva del Estado hacia los sectores pobres no era una novedad en el Perú. Sánchez Cerro y Odría ya habían probado con éxito este modelo conservador de gobierno. Sánchez Cerro, además, utilizó su *choledad* como identificación política con la población. Durante su breve gobierno luego del golpe de Estado contra Leguía (setiembre 1930-febrero 1931) y luego durante su mandato legítimo de 16 meses (diciembre 1931-abril de 1933), movilizó las nuevas masas urbanas que habían llegado a la capital durante el siglo XX y prosperado durante el oncenio de Leguía. Desarrolló una política de asistencialismo que consolidó su popularidad pero al mismo tiempo permitió una vuelta de la élite civilista de la antigua República Aristocrática (Klarén 2005: 331). Sin embargo, la popularidad duró poco y fue víctima de un atentado que precipitó un nuevo golpe de Estado. En todo caso, tenemos aquí un primer ejemplo de este modelo conservador de populismo. Identificación y asistencialismo autoritario hacia abajo y, al mismo tiempo, cooptación del personaje inclusivo por parte de las élites.

Manuel Odría es otro eslabón en esta cadena de nuestra vertiente conservadora del populismo. Bajo el lema: “salud, educación y trabajo” e inspirado por lo que Perón venía realizando en Argentina, Odría instauró un gobierno dictatorial pero con importante apoyo popular. Desarrolló grandes obras públicas, como las Grandes Unidades Escolares, construyó edificios monumentales (los ministerios de Educación, Hacienda y Trabajo) y el magnífico Hospital del Empleado en la avenida Salaverry (Contreras y Cueto 2004: 299). Elevó los salarios de maestros, policías y oficiales del ejército, y firmó un decreto que ampliaba el seguro social a los trabajadores. Y si Perón tenía a Evita, doña María Delgado de Odría no quiso ser menos y dedicó sus esfuerzos a la asistencia social. El objetivo de Odría fue capitalizar su popularidad entre las

capas urbanas menos favorecidas, sobre todo en los nuevos asentamientos humanos o barriadas que no estaban amparadas por el Estado y podían devenir fácilmente en una clientela a través de relaciones autoritarias y paternalistas (Collier 1978: capítulo 4). Del otro lado del tablero, Odría reestableció una política económica liberal, con Pedro Beltrán jugando un papel importante, y fundada una vez más en un modelo basado en exportaciones. Disciplinado fiscalmente, a diferencia de aquellos tradicionales populistas latinoamericanos, no cayó en un gasto excesivo ni generó una inflación importante.

Para resumir, Sánchez Cerro, Odría y Fujimori establecieron un patrón de conducta anclado fuertemente al horizonte estacional pero llevado a cabo de una manera conservadora. Se centraron, fundamentalmente, en la ampliación de las funciones estatales hacia sectores excluidos y con ello desarrollaron también un sentido de pertenencia entre aquellos sectores. Pero al mismo tiempo, el asistencialismo fue acompañado de políticas económicas ortodoxas y, por tanto, las élites los vieron como buenos híbridos para mantener tranquilos a “los de abajo” y priorizar el equilibrio económico.

Martha Chávez fue en 2006 la representante pura de esta vertiente conservadora. Sus votantes provienen de sectores de la población que no conocen la presencia del Estado o que siguen agradecidos por su aparición para poner fin a la guerra en 1990. Sería insensato pensar que el 7,4% que apoyó a Chávez celebra la corrupción o las violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Fujimori³⁵. Más probable es que todo esto sea menos importante que lo que consiguieron durante el gobierno de Fujimori. El gran problema de Martha Chávez es que Fujimori no es reemplazable, y si lo fuera, debería serlo por alguien muy cercano a su figura. Max

³⁵ Si he comprendido bien, esto es lo que sostiene Ubillús (2006). El fujimorismo sería un tipo de régimen acorde con la perversidad del capitalismo contemporáneo y donde los habitantes, cínica y perversamente, terminan identificándose con la corrupción más que rechazarla.

Weber (1977) lo afirma para las figuras carismáticas, el carisma se *rutiniza* y entonces hay que heredarlo a alguien cercano al ex carismático, un hijo o una esposa. Así, la lejanía carnal del hombre *providencial* parece condenarla a no poder heredar su caudal de votos. Esto, además, queda corroborado por la enorme votación de Keiko Fujimori en la elección parlamentaria³⁶. El fujimorismo pasa, entonces, por el síndrome *Kagemusha*. Como en la película de Akira Kurosawa, el gran Emperador necesita de un doble (un Kagemusha) que engañe al pueblo y le haga creer que su gran líder no ha desaparecido. Y aunque lo consigue, al final se descubre la impostura³⁷.

Entonces, el gran problema del modelo estadonacional conservador en esta elección se debió a que nadie encarnó con fuerza esta tradición, cuyo representante más importante no era un recuerdo lejano, sino una presencia impedida de participar en las elecciones. Sin embargo, el otro gran peso que impidió que este modelo conservador emprendiera el vuelo fue la aparición de Ollanta Humala que, aunque ligado al modelo nacionalista de lo estadonacional, también recogía simpatías entre los exvotantes de Fujimori.

Ollanta Humala o la vertiente nacionalista

A diferencia de Martha Chávez, candidata de una vertiente populista cuyo representante más importante estaba en la memoria reciente de los electores y detenido en Santiago de Chile durante las elecciones, Ollanta Humala representaba un modelo cuyo símbolo, el general Velasco Alvarado, se lucía

³⁶ Me parece difícil que Keiko Fujimori pueda darle continuidad al fujimorismo desde el Congreso. El desprestigio de dicha institución carcome a cualquiera que se le acerque. Y, además, será muy difícil darle continuidad a las “virtudes” ejecutivas del padre desde el legislativo. ³⁷ Cuando este ensayo ya había sido terminado apareció el libro de Yusuke Murakami sobre Fujimori. Aquí se cuenta que Fujimori rogó insistentemente a un familiar con su mismo apellido para que fuera candidato a la elección presidencial de 2006 (Murakami 2007: 19). Esto confirma la idea del *kagemusha*. Santiago Fujimori (Murakami no dice el nombre pero podemos asumir que se trata de él) debiera haber sido el doble que hubiera permitido usar el eslogan: “Fujimori Presidente”; y tratar, así, de engañar a la población.

desde un punto más lejano de la historia. Aun así, el recuerdo de Velasco es plausible y este expresidente siempre figura como uno de los mejores de la historia del Perú en las encuestas.

Ollanta Humala encarnó de manera paradigmática el viejo populismo latinoamericano que tantas veces se ha emparentado a Velasco. No quería ser el candidato de una clase sino de la Nación: era el líder del Partido Nacionalista Peruano. Y el nacionalismo en boca de Humala —como en el de los buenos tiempos— significaba nacionalizar recursos y darle prioridad al Estado en el esquema productivo. Como en tiempos de Velasco, Humala prometía una alianza nacional versus la oligarquía y modernizar el país desde una industrialización nacional en contra de las fuerzas económicas foráneas que impiden su desarrollo. Un clásico de la política económica latinoamericana. Desarrollo nacional contrapuesto a dominación económica extranjera. En un contexto en el que los precios de los minerales son muy altos y que distintos yacimientos habían sido descubiertos y/o se explotaban con éxito, las propuestas podían calar en el electorado.

De otro lado, como en tiempos de Velasco se movilizó símbolos y mensajes de inspiración andina. Ahora bien, al igual que en el pasado, todas estas expresiones no estaban al servicio de un proyecto andino fuera del ideal de Estado-Nación, por el contrario, aparecen para consolidar el proyecto estadonacional. Las frases en quechua, las imágenes de Túpac Amaru o la bandera del Tawantinsuyo son meros instrumentos, casi adornos que buscan legitimar el proyecto estadonacional peruano y en ningún momento desafiarlo. Así, Ollanta Humala, como el gobierno de Velasco, entraba claramente en una dinámica nacionalista (peruana) y no en algún molde indigenista que estuviera emparentado con un proyecto político al margen de este Estado.

Además, también como en la Era Velasco, tal iniciativa se hacía con la impronta que dejan los cuarteles. Como ya se dijo, nada como la escuela y la armada para cobijar a las multitudes no cubiertas por el manto nacional. Velasco es la referencia histórica de la gran reforma política en el Perú. Hizo lo que tantos habían discutido y prometido. Con ayuda de tanques y tropas decretó la reforma. En el imaginario nacional no es un punto cualquiera y las familias beneficiadas de tierras y *quasi* emancipación siguen guardando a buen recaudo en su memoria al general que lo hizo posible. Desde luego que tal reforma fue un gran desastre económico y los objetivos últimos no se cumplieron, pero eso no deslegitima el peso de la medida frente a los beneficiados. Si para el elector de Fujimori la corrupción y el autoritarismo no son sombras suficientes para empañar su éxito ante el terrorismo, para los beneficiarios de la reforma agraria el desastre económico no ensombrece la redistribución por decreto de Velasco. La ineficiencia estatal pareciera ser un precio justo a pagar a cambio de la *quasi* emancipación³⁸.

Ollanta Humala movilizó una retórica y simbología de promesa nacional, de redención comunal desde la figura de un comandante (él, aseguró, no gobernaría el país, lo *comandaría*).

38 Para Klarén (2005: 432-433), por ejemplo, las reformas desde arriba de Velasco fueron un fracaso, ya que no lograron lo que se habían propuesto. Primero, la brecha de distribución de la riqueza entre los sectores tradicionales y modernos se mantuvo. En segundo lugar, la reforma agraria sólo tuvo un impacto redistributivo en el sector moderno del país, repartiendo sólo un tercio de la tierra cultivable. En tercer lugar, los resultados también fueron decepcionantes en cuanto a crecimiento económico. Desde otra posición, Lowenthal (1983) reconoce que la revolución de Velasco no logró las metas que se había propuesto pero, afirma, ninguna otra las hubiera logrado. Por tanto, no hay que juzgarla por no haber realizado “al nuevo hombre peruano” ni sus demás estrambóticos eslóganes. Hay que evaluarla en comparación con otros periodos reformistas en América Latina y con otros periodos en la historia peruana. Así, dice Lowenthal, la revolución desde arriba fue exitosa. Según Lowenthal, Velasco realizó en sólo cinco años lo que, por ejemplo, Chile o Brasil habían venido haciendo durante décadas de políticas inclusivas y la reforma agraria peruana fue más lejos que cualquier otro proceso similar en América Latina. De otro lado, el poder de la oligarquía ya no pudo reponerse, aparecieron nuevos ricos, el Estado llegó de alguna manera a los campesinos, hubo cambios en el nivel de los valores y dignidad que, aunque difíciles de medir, tienen consecuencias importantes. Finalmente, concluía, “el experimento peruano no ha sido un simple interludio sino una importante transición en la historia del país”.

Por mi parte agregaré a los aspectos positivos del gobierno de Velasco algo que ya se ha constatado en otros lugares pero que aún no se acepta fácilmente: Sendero Luminoso pudo crecer allí donde la reforma agraria había sido débil. ¿Cuál hubiera sido el impacto de SL en 1980 si la costa del Perú hubiese tenido el mismo grado de concentración de tierras y gamonalismo que Ayacucho?

En relación con esto, se benefició de la ausencia de un buen candidato de la vertiente conservadora del populismo nacional. Ante la ausencia de Fujimori, pudo recoger los votos pertenecientes a la tradición nacionalista y también los de la conservadora. Aquellos que deseaban un gobierno autoritario vieron en él a un comandante mientras que los que deseaban una preocupación nacional distinguieron su uniforme heredado del velasquismo. Sin embargo, esto es más o menos simple de delimitar en términos teórico-históricos, pero en términos prácticos no lo es. Lo cierto es que la necesidad nacional se confunde con la necesidad estatal, pues sólo se es nacional desde la sombra estatal.

De esta ambigüedad también proviene que muchos analistas se hayan preguntado por cuán “de izquierda” era la candidatura de Humala. Carrión y Zárate (2007: 174-175), en un vasto estudio estadístico, han encontrado una correlación importante entre la autopercepción de izquierda y el voto por Humala. Ahora bien, queda por saber qué cosa entienden los encuestados por “izquierda”. Si por izquierda entendemos la apuesta por otro tipo de orden económico, no es seguro que el votante de Humala responda, exclusivamente, a este tipo de demanda. El “izquierdismo” de Humala me parece reflejar, más bien, una posición rebelde frente a todo el sistema político (lo que incluye aspectos económicos pero también la relativización de garantías democráticas). Después de todo, la votación de Humala ha sido la expresión nacional de la izquierda contemporánea en la región andina... izquierda que parece ser tan autoritaria como izquierdista.

Resumiendo, Humala fue un candidato de aspecto y retórica clásicamente nacionalista con un talante autoritario: un fiel heredero de Velasco y del buen recuerdo que éste tiene en algunos sectores de la sociedad. La ausencia de Fujimori hizo que se beneficiara de su lado “autoritario” además del nacionalista.

Respondió a una demanda de integración nacional que tiene mayor trascendencia entre los más pobres. Toda la parafernalia reseñada por Steputtat (2004), lo local en ropas nacionales como forma de sentirse peruano, tuvo en Humala un personaje central. Un eslabón más en la larga nacionalización desde las FF AA y desde la escuela. Ofreció una tradicional dimensión simbólica de la Nación. Con otros matices, Toledo también parece haber prometido lo mismo al Perú no costero cinco años antes: terminar de construir una Nación.

Alan García o la vertiente institucional

En 1928, Mariátegui y Haya de la Torre polemizaron sobre el destino del movimiento popular en el Perú. Aquél sostenía que el Estado ni siquiera había conseguido ejercer efectivamente su dominio sobre el territorio nacional y que la oligarquía era dependiente del capital extranjero, por lo cual, el ideal de un Estado-Nación era quimérico. Para construirlo, hacía falta un proceso revolucionario “protagonizado por las fuerzas populares contra el bloque dominante oligárquico-imperialista y que debería resultar en la constitución de un régimen socialista” (Cotler 2006: 206). Ni la burguesía ni las clases medias podían generar un Estado socialista, éste debía ser producto de la acción de obreros y campesinos. Por su parte, Haya de la Torre defendió la formación de un partido policlasista. A partir de un campesinado sin conciencia nacional y un proletariado débil, eran las clases medias emergentes quienes podían comandar la consecución del ideal de Estado-Nación. Más que una aspiración socialista, Haya dio organicidad a un proyecto nacionalista de masas. “El Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales constituido por la tres clases sojuzgadas por el imperialismo, orgánicamente enlazadas por el Partido Aprista, deberían encarar la transformación del país, erradicando la dominación imperialista y feudal que traba su realización, cumpliendo las tareas que en Europa desempeñó la burguesía” (Cotler 2006: 200).

Desde sus inicios y por contraposición al comunismo, el APRA se concibió como un partido nacionalista. Estaba menos interesado en el socialismo que en la construcción del Estado nacional. Este quiebre inicial entre las dos tendencias populares más importantes del Perú moderno me parece definitivo sobre el futuro del país. La izquierda, al tomar la opción ortodoxamente marxista y clasista, quedó al margen de la política grande en el Perú. Habrá que recordar a Isaiah Berlin una vez más: todo acontecimiento político importante en el siglo XX se hizo apoyándose en algún tipo de nacionalismo. En un país sin mayores identidades de clase y donde la construcción nacional había tenido algún éxito (fundamentalmente en la *destrucción* de otras nacionalidades que pudieran desafiar su hegemonía), era de esperarse que un partido político de retórica inclusiva y nacionalista tuviera mucho más éxito que los llamados en términos de clases. Esto fue definitivo para la formación política del país.

El APRA estuvo identificado con la oleada de derechos sociales que fueron reivindicados y conseguidos durante la primera mitad del siglo pasado. En América Latina, ninguna constitución fue más emblemática al respecto que la mexicana de 1917. El APRA adhirió a aquellos principios del Estado benefactor y responsable del desarrollo y bienestar de su población. El APRA fue un PRI sin suerte y el Perú un México sin Lázaro Cárdenas. Como sea, reforzado por su adhesión a la Internacional Socialista, el APRA fue el movimiento que encarnó la voluntad popular por reformas sociales y un Estado protector. El APRA era, entonces, un clásico partido de masas del siglo XX a la búsqueda de la tercera generación de derechos humanos que T. H. Marshall consideraba como el punto final de la construcción de una ciudadanía plena. Así, Haya y el APRA fueron el rostro nacional del movimiento por los derechos sociales. Asentando sus votaciones en las zonas urbanas y en las nuevas clases medias de la primera mitad del siglo XX, enfatizó

la protección de estas clases a través de derechos sociales pero nunca llegó a cuajar, por ejemplo, en el sur andino del Perú donde, obviamente, las necesidades no eran las mismas que en las zonas urbanas. Ahí todavía hacía falta un Estado que garantizara los primeros derechos que T. H. Marshall observaba en el siglo XVIII europeo y no unos consustanciales al siglo XX.

Ya se sabe que Haya y el APRA no fueron en sentido estricto siempre un partido reformista, que al envejecer el partido se fue volviendo conservador y llegó a trabajar codo a codo con quienes los habían reprimido con más encono. Tanto que para 1968 hasta los militares “progresistas” estaban convencidos de que el viejo Haya, de ser presidente, ya no haría ninguna reforma importante en el Perú. Y así, paradójicamente, una vez más, los militares impidieron que Haya fuera presidente pero ya no por el temor a las reformas que realizaría contra los intereses de la oligarquía, sino por el convencimiento de que no realizaría ninguna (Klarén 2005: 409). Aun así, en la percepción popular, la figura del APRA es la de un partido reformista y nacional.

Esta impronta histórica del aprismo no ha desaparecido. Ha sufrido ciertas metamorfosis, algunas debidas a su propio discurso, otras a causa de un país diferente de aquel que Haya pensó y, finalmente, a que García sucedió a Haya y que su primer gobierno fue la catástrofe que todos conocemos. Pero sus votantes siguen reconociendo en sus propuestas, a grandes rasgos, las mismas virtudes que en el siglo pasado reconocieron en Haya. La geografía del voto aprista en la primera vuelta de 2006 es similar a las del APRA histórico: sólido en el Norte, peleándola en Lima, esquivo en el Oriente, rechazado en el Sur. Esto evidencia una continuidad en el arraigo aprista. Alan García no es una locomotora que jala al APRA como han sugerido algunos analistas (Roberts 2006: 91). Fue, más bien, un buen candidato que contaba con un

partido en forma. Ambos son necesarios para explicar su victoria: partido y líder. Si García hubiese intentado participar en las elecciones sin el APRA (como tantos líderes latinoamericanos han hecho respecto de su partido de origen, Uribe en Colombia o Caldera en Venezuela, por ejemplo), es improbable que su candidatura obtuviera la fuerza que alcanzó.

Lo importante para mi argumentación es que García encarnó el discurso histórico de un partido democrático y reformista en un momento en que las demandas populares apuntaban a reformas económicas en democracia. Como se dijo en la introducción, García fue el único candidato en la primera vuelta que se ubicó en el cuadrante que combina las opciones de Ley e Intervención Económica. Luego, cuando el resto de candidatos desapareció, fue el vencedor natural de la segunda vuelta. O, como ha escrito McClintock (2006), “García consiguió la victoria porque prometió lo que la mayoría de peruanos quería: democracia y justicia social, pero también respetar el mercado.” Vale decir, como se explicó al inicio, García ganó al encarnar la moderación en todos los ejes de discusión. Fue el gran beneficiado de la aparición de Ollanta Humala, ya no el chico malo de antes sino un moderado hombre de Estado entre Humala y Lourdes Flores. En suma, García fue la expresión de la tercera variante del populismo, aquel que representa a quienes deseando reformas no quieren renunciar a la democracia para hacerlas. Habló de derechos para los agricultores, de defender a los consumidores y anunció que “hay que levantar banderas claras como el concepto de patria”³⁹. Entonces, tuvo un discurso inclusivo —estadonacional— que caló en la población y contó con un partido organizado y tradicionalmente vinculado con la consecución del Estado-Nación anhelado. En un país donde los derechos sociales todavía son una esperanza, el APRA tenía un bolsón de votantes cautivos.

³⁹ Diario Perú 21, 18 de abril de 2006.

Resumiré lo que significa esta explicación respecto del discurso estadonacional. Los votantes de este sector se encuentran aún bajo el paradigma del Estado-Nación. Quieren que éste se cumpla. Esto puede explicarse porque no tienen ninguna relación con él o porque la que tienen es insuficiente. Entonces, elegirán a candidatos que sean percibidos como quienes podrían satisfacer sus demandas, que no son nuevas en el país. Mal que bien, el Estado- Nación se ha ido construyendo poco a poco y esta construcción se ha hecho desde algunos personajes representativos que hemos agrupado en tradiciones. Una primera tradición reconocida como eficiente a la hora de desplegar el Estado es la conservadora. La eficiente para incluir y fortalecer la idea nacional es la nacionalista. Finalmente, el APRA y Acción Popular representan a la vertiente institucional de estas demandas. Así, los votantes que están en el horizonte estadonacional escogen a su candidato entre estas tres opciones históricas pues son las que aparecen como eficaces. He explicado qué candidato correspondió a cada tradición. Por tanto, el 60% de los electores que votó por estos candidatos todavía espera recibir las funciones de un Estado nacional. Hay poblaciones que aguardan el cumplimiento de las atribuciones más básicas y otras más desarrolladas, pero ambos extremos forman parte de poblaciones aún en el horizonte estadonacional. En las elecciones de 2006, tres candidatos se repartieron esta votación pero, hay que decirlo, podría suceder que uno solo acapare los votantes provenientes de los tres tipos ideales. De hecho, es lo que ocurrió en 1995 cuando Fujimori consiguió el 64% de la votación, una cifra similar a la suma de todos los candidatos del sector estadonacional en 2006.

El horizonte postestadonacional

Valentín Paniagua o el heredero desheredado

Valentín Paniagua no pudo ser lo que Alan García fue para el APRA, vale decir, no consiguió reinventar a Belaúnde como García lo hizo con Haya. La herencia de Belaúnde podía ser explotada pero una serie de factores lo impidieron. Belaúnde fue en la historia política del país una figura crucial de renovación. Cuando Haya de la Torre había moderado sus ansias reformistas, cuando había hecho ya pactos *contranatura* (que podrían ser éticamente justificados o no, eso es otro tema), apareció la figura de Belaúnde Terry para llenar ese vacío de ímpetu de reforma. Belaúnde encarnó el discurso estadonacional como nadie y fue, junto a Haya de la Torre, miembro de la vertiente partidaria de nuestro populismo desmembrado.

“La conquista del Perú por los peruanos”. Aunque es un lema que suscitaba carcajadas entre los intelectuales, excitaba, sobre todo, la imaginación de los poblados de todo el Perú, en especial de los alejados. Y la devoción de Belaúnde por los mapas (que auspició la creación de tantas caricaturas), era una expresión del Estado como territorio y como Nación a integrar. Y la retórica incaica y el uso de simbología prehispánica brindaban un sentido de unidad nacional, trayendo al presente ese lejano tiempo del cual los peruanos suelen sentirse tan orgullosos. El ideario del joven arquitecto no era una doctrina organizada, como la que había dado inicio al APRA, era más bien una suma de referentes comunes, casi un aliento que apuntaba a (re)generar la comunidad. En un país con un grado de exclusión material y afectiva tan grande, el discurso tuvo gran impacto, llevando dos veces a Belaúnde a la presidencia. La fortaleza de Belaúnde fue su *estilo* reformista, no

una administración reformista⁴⁰. Y obtuvo el voto del Perú que no se había beneficiado del crecimiento durante la primera mitad del siglo XX y de aquel que estaba decepcionado por las reformas que no llegaban nunca. En suma, Belaúnde fue un prototipo de candidato del horizonte estadonacional.

Ahora bien, Paniagua no recibió el apoyo de ese sector de la población. Por el contrario, su candidatura quedó claramente relegada al sector postestadonacional. Ello se debe a varios factores. De un lado, hay cuestiones estructurales. El elector de Fernando Belaúnde de 1963 ó 1980, especialmente en su sector urbano, ya no está compuesto por inmigrantes recientes, sin derechos políticos ni Estado que los haga efectivos. Por el contrario, la apertura del mundo político a los analfabetos y la disminución de éstos, el desarrollo de la presencia efectiva del Estado en las ciudades y en el interior, y el aumento del ingreso *per capita* en las ciudades han hecho que estos individuos antes carentes de Estado-Nación se hayan integrado. Parte de lo que eran las bases acciopopulistas no tiene ya necesidades estadonacionales sino que ha desarrollado unas postestadonacionales. Así, parte de los votantes históricos de Acción Popular se ha desplazado del sector estadonacional al postestadonacional, con lo cual la candidatura ha perdido fuerza frente a un país que tiene todavía, mayoritariamente, necesidades estadonacionales.

Y este país no iba a buscar sus ansias de reforma en un señor mayor y dedicado no a reinventar el incario sino a hablar de constituciones y otras instituciones, más liberales que democráticas. Valentín Paniagua terminó siendo identificado con dos tradiciones que nunca han conseguido tener la imagen de ser eficaces para construir Estado-Nación. Primero fue identificado con la izquierda. Sus asesores principales y

⁴⁰ A este respecto, como en otros, Alejandro Toledo parece ser la versión contemporánea de Fernando Belaúnde.

aquellos que soñaban con una “gran candidatura de centro” provenían de la izquierda limeña (también señorona). Cuando Acción Popular ya no los quiso, convenció a Paniagua de abandonarlos. Sin embargo, en lugar de apuntar a una candidatura de tintes estadonacionales, se acercó a otra tradición que tampoco ha generado nunca en la población una idea de eficiencia en la construcción del Estado-Nación: la social cristiana. Valentín Paniagua terminó encabezando una plancha donde lo acompañaban Alberto Andrade y Drago Kisic, dos limeños y dos ex miembros de Unidad Nacional. Así, ya no era una candidatura estadonacional sino de derecha tradicional. Una derecha a la que el propio Paniagua, como Acción Popular, nunca perteneció⁴¹. Pero esta alianza vino a traicionar una historia acciopopulista y los resultados saltan a la vista. Más que un candidato de Acción Popular fue un candidato social cristiano.

En todo caso, los votos que Valentín Paniagua terminó recibiendo fueron los de la clase media urbana, aquella que apreciaba su gobierno transitorio y cuyo voto era menos una apuesta por Paniagua que un rechazo contra la política chicha. Sin embargo, ese 5% final no es el que necesita la expansión del Estado o la integración a la comunidad nacional. Por el contrario, es aquel que ha logrado ambas cosas.

Lourdes Flores o la candidata de los ricos

En una encuesta de Apoyo posterior a la primera vuelta de abril de 2006, se preguntó a la gente las razones por las cuales no votaron por Lourdes Flores. Si sumamos los que respondieron “porque me di cuenta de que era la candidata de los ricos” con los que respondieron “porque me di cuenta de

⁴¹ Me parece que a esto hizo referencia Mirko Lauer (2006) cuando escribió luego del fallecimiento de Valentín Paniagua: “Una derecha a la que Paniagua nunca perteneció le reprochó no haber declinado a favor de Lourdes Flores. Un reclamo impertinente que ni siquiera se tomó la molestia de responder”.

que era la candidata de la derecha” obtenemos el 56%. Hay algo de asombroso en estos resultados. En primer lugar, que la gente establece que la candidata de los ricos no podrá traer beneficios para los pobres. Aunque una lectura de lucha de clases lo encontraría normal, a mí no me lo parece tanto. Fujimori fue en algún momento el candidato de los ricos y, sin embargo, los pobres no encontraban que esto fuera un impedimento para votar por él. ¿Por qué? Porque el problema no es contar con el agrado de los ricos, lo importante es que quienes necesitan de más Estado y Nación consideren que un candidato se los brindará, aunque esté apoyado por los ricos (y eso es la vertiente conservadora de nuestro populismo desmembrado).

Entonces, Lourdes Flores sólo pareció capaz de satisfacer las necesidades de los electores postestadonacionales. Son los ya vinculados a la globalización, quienes habiéndose beneficiado del crecimiento económico de los últimos tiempos en las ciudades de la costa ya tienen un pie puesto en otro momento de la historia. Es una población que ya no necesita los favores del Estado-Nación para mejorar su situación material o simbólica; por el contrario, las fuerzas del mercado libre y la institucionalidad podrían continuar beneficiándola e integrándola al mundo global. No es casualidad que la composición del voto de Lourdes Flores sea directamente proporcional al grado de lejanía del Perú “profundo”. Enorme en el extranjero, dominante en Lima y aguachento en el interior. En una encuesta de Apoyo realizada antes de la primera vuelta, queda de manifiesto la condición postestadonacional del votante de Lourdes Flores. El 65% de los votos de las clases altas y el 19% de las clases bajas. Más del 60% entre los peruanos del extranjero. Sólo el 18% de los encuestados con estudios escolares incompletos la prefiere como candidata y el 38% con estudios superiores manifiesta lo mismo. Es evidente que aquéllos que tienen educación superior ya no están interesa-

dos en que el Estado les soluciones ese problema; por tanto, buscarán que su candidato satisfaga otras necesidades. Y “los de abajo” perciben que tal candidato, por lógica, promoverá una desestatización de servicios o que, al menos, no les dará prioridad y entonces le retira su apoyo. Es importante notar también que en la misma encuesta Flores recibe el apoyo mayoritario de los jóvenes (31%) y, en cambio, sólo el 23% entre los mayores de 40 años. Esto también se condice con la división entre el horizonte estadonacional y postestadonacional. Es evidente que son los jóvenes quienes pueden estar acercándose al nuevo escenario sociopolítico en tanto que los mayores siguen en el horizonte sociopolítico en el cual crecieron. Son los jóvenes urbanos quienes pueden empezar a pensar y demandar cuestiones mucho más “globalizadas” y ya no ancladas al paradigma estadonacional⁴².

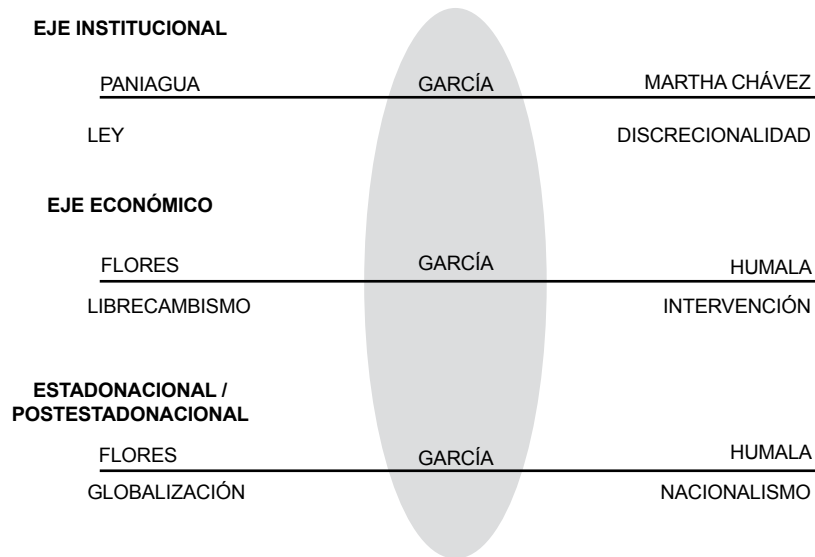
Una vez más creo que la historia es buena consejera. Lourdes Flores ha seguido siendo una candidata del PPC (un partido de subgerentes, afirmaba José Ignacio López Soria) y que no pertenece a ninguna de las tres tradiciones consideradas como capaces de generar Estado y Nación. Si la composición del voto aprista repetía a grandes rasgos la geografía clásica del voto aprista, Lourdes Flores también repite (aunque mejore sustantivamente) las de Luis Bedoya Reyes, el líder histórico del PPC.

Algunas conclusiones

Nuestra matriz divide dos grandes bloques que incluyen las posiciones respecto de la democracia y el mercado. Luego de conjugadas, nos hemos quedado con una sola gran dicotomía entre los candidatos que representan a la población que está en el horizonte estadonacional y los que representan a

42 Sería interesante tener en el Perú investigaciones en la línea de los trabajos de Inglehart, que exploren estas hipótesis preliminares respecto de un cambio en los valores políticos según el contexto de socialización. Véase Inglehart 1971.

los peruanos instalados en el sector postestadonacional. Por tanto, sostengo que esas dos divisiones primarias, en realidad, esconden una sola gran diferencia en el electorado nacional, un solo gran *cleavage*. Lo importante para mi argumentación es que en esta nueva gran división García siguió siendo un candidato moderado y el más cercano a la línea que divide ambos horizontes. Vale decir, fue el candidato que parecía más capaz de conseguir los deseos de aquellos peruanos que viven aún esperando las básicas atribuciones de derechos que T. H. Marshall reconocía para el siglo XVIII, pero también como aquel que podría satisfacer las necesidades de las poblaciones ya plenamente integradas al Estado-Nación y, por lo tanto, a la espera de continuar con un proceso de globalización. Si lo graficamos, obtenemos lo siguiente:



El grado de fiabilidad de la matriz que da inicio al texto (página 26) está dado porque, aun cuando se construyó a partir de dos ejes que no involucran directamente las cuestiones del Estado-Nación, al asumir la perspectiva que aquí hemos adoptado, el resultado se condice con la forma de votar en las elecciones generales de 2006. La matriz recoge gráficamente como polos opuestos a Lourdes Flores y a Ollanta Humala, vale decir, a aquella que obtuvo más votos en el extranjero y a aquél que consiguió los votos del Perú “profundo”. Votos que parecieran ser de dos eras distintas. Asimismo, se confirma puesto que la matriz arroja a Alan García muy cerca de la línea que divide ambos horizontes (lo que se condice con su retórica, con su tradición partidaria y con la caracterización de su electorado). Finalmente, también me parece importante destacar que Valentín Paniagua aparece más cercano a la línea divisoria que Lourdes Flores. En suma, el Perú votó de una manera proporcional a la forma en que la población está dispuesta en relación con los beneficios materiales y simbólicos que debe proveer un Estado-Nación. Un porcentaje de nuestra población vive ya en el siglo XXI (acaso en la postmodernidad⁴³), pero un sector aun más grande espera que el paradigma moderno estatal clásico, fundado en 1648 en Westfalia, se materialice.

43 Al menos en términos puramente filosóficos, el deceso de los tiempos modernos en el Perú y el paso a un estadio postmoderno ya han sido anunciados por López Soñá (2001). También puede apreciarse la respuesta crítica de Vergara (2002).

3. Los partidos y el peso de los ochenta

En el apartado anterior desarrollé el papel que la historia política jugó en la elección de 2006. Ahora bien, aunque creo que es el factor más importante para intentar explicar la composición del voto (como concluiré luego), no hago una lectura determinista de las elecciones. La historia es un factor *explicativo* y no uno *determinante*. Este ensayo alumbra la influencia tantas veces desdeñada de la Historia en la política, pero no afirma que los resultados electorales sean producto exclusivo de aquélla. Pesan también los actores y sus estrategias (como se desarrolló en la introducción), existen aspectos institucionales (las reglas electorales, por ejemplo); y, finalmente, hay variables contextuales que, aunque históricas, no subrayan la historia *larga* sino la reciente. A esto último hace referencia el presente apartado.

En 1978 apareció un sistema político completo en el país. Bajo tres dimensiones, se estableció unas condiciones inéditas para el establecimiento de una democracia saludable. De un lado, la ciudadanía política quedaba garantizada para todos los hombres y mujeres mayores de 18 años. El analfabetismo dejaba de ser una limitación al derecho de participación política. En términos legales, una nueva Constitución reemplazaría a la caduca de 1931, tantas veces violada y tantas otras madre de entuertos entre Congreso y Ejecutivo. Finalmente, aparecía también un sistema de partidos moderno, de base nacional y que respondía a las demandas de distintos sectores de la población: se trataba de un sistema de partidos con *representatividad*. Así, el nuevo sistema político articulaba (como nunca en nuestra historia) la sociedad universalmente representada, el Estado —con una nueva y legítima Constitución— y unos partidos políticos representativos que serían el canal de comunicación entre aquélla y el Estado.

El sistema funcionó para transitar hacia la democracia a fines de los setenta y los años ochenta aparecieron como una oportunidad dorada para remendar viejas taras nacionales. Un grupo de partidos de izquierda daba voz a un país que hasta antes de Velasco no la había tenido y el APRA y Acción Popular aparecían como los partidos fuertes y centrales de la vida política. La muerte de Haya de la Torre también obligaba a pensar en otra vida política. Su presencia —providencial para unos y demoníaca para otros— no era ya un elemento de desestabilización para el país como lo había sido durante cincuenta años. En 1980, la justicia pareció reasignar a Fernando Belaúnde la presidencia que le habían arrebatado los militares doce años antes. Las elecciones municipales de aquel mismo año confirmaron la buena salud de aquel sistema político.

En 1983, al mismo tiempo que la gestión de Acción Popular daba muestras de ineficacia, la izquierda se impuso en el escenario político. La alcaldía de Lima y los distritos populosos, así como los departamentos más pobres del país abrazaron esta nueva fuerza política. Alfonso Barrantes, provinciano y aguerrido, fue la locomotora de aquella alianza. Y en 1985, con Acción Popular ya devorada por la inflación y la “ineficacia brutal” de su política antisubversiva⁴⁴, el APRA llegó al poder por primera vez en la historia. Con una votación algo inferior al 50% en la elección presidencial, mayoría en ambas cámaras del Congreso y un Presidente joven e impetuoso, el escenario parecía el indicado para que el APRA realizara la gran gestión que le habían impedido hacer durante cincuenta años⁴⁵. En aquellas elecciones generales, la segunda fuerza política estuvo representada por la Izquierda Unida, con algo menos del 30%.⁴⁶

44 Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 1984 fue el año que produjo más muertes en la guerra interna.

45 Barnechea (1995: 45) afirma que en 1985 se dio una situación extraordinaria en la historia política: García encarnó tres formas de legitimidad del poder: la legal, la popular y la carismática “coincidían” en un solo hombre. Aunque creo que Barnechea fuerza las categorías weberianas, la imagen es adecuada para percibir la importancia de la oportunidad que García tuvo y desperdició.

46 Los resultados electorales utilizados en este ensayo provienen de: Tanaka (1998) para varios consolidados, Tuesta 2001, y www.onpe.gob.pe

En 1986 el ciclo político continuó con las elecciones municipales. La popularidad del primer año de García logró que el APRA le arrebatara a Izquierda Unida la alcaldía de Lima y que consiguiera el 47,6% de las alcaldías nacionales. Aunque IU perdió la simbólica Lima, su participación fue más que exitosa al conseguir el 30,8% de las alcaldías nacionales (seis puntos más que lo que había conseguido en 1983). La derecha, por su parte, pagaba las culpas de su gestión 80-85: el PPC recibió el 14% de las alcaldías en el país mientras que Acción Popular ni siquiera participó en las elecciones. Aun así, es importante notar que en 1986 los partidos políticos “tradicionales” seguían recogiendo casi el 90% de las preferencias electorales. Vale decir, eran representativos de manera efectiva.

Las elecciones de 1989 marcan un punto de inflexión de esta dinámica a causa, una vez más, de la simbólica Lima. Ricardo Belmont y su movimiento Obras inauguraron un tiempo de *outsiders* y mediatización de la política⁴⁷. Sin embargo, si dejamos el peso simbólico de Lima, el APRA e IU todavía recibieron el apoyo del 40% del electorado. El Fredemo obtuvo el 31% (esta alianza incluía a Acción Popular, al PPC y al movimiento Libertad, por lo cual es difícil atribuir un peso a los partidos y otro a la figura independiente de Vargas Llosa, aun cuando éste no hubiera sido candidato). Los independientes recibieron 28,2%. Esta tendencia se agudizaría en 1990 cuando la segunda vuelta presidencial fue disputada por dos *outsiders*. En esta elección, la suma del APRA e IU sólo alcanzó el 35%. Los noventa se encargarían del entierro final de los partidos y 1995 sonó como una marcha fúnebre cuando ninguno (ni siquiera el APRA) superó el 5% requerido por el Jurado Nacional de Elecciones para mantener la vida jurídica.

47 Es la tesis fundamental de Tanaka (1998). Los partidos estaban acostumbrados a hacer política de una manera “movimientista”, teniendo como arenas las calles o las instituciones establecidas. La nueva generación de políticos vino a dominar en otra arena más relevante para los nuevos tiempos: la mediática.

Lo que trato de mostrar aquí —apoyado en Tanaka (1998)— es que los partidos políticos tuvieron representatividad durante los años ochenta, y que, incluso hacia el final de la década mantuvieron altas dosis de popularidad. Su desgracia no fue el vínculo de representación sino su incapacidad para gobernar. Debemos tomar en cuenta que todos los partidos políticos jugaron papeles destacados durante la década. Desde la Presidencia de la República (AP y APRA); desde el peso en el Congreso (PPC durante 1980-1985; IU entre 1985-1990); o desde la gestión masiva de alcaldías (IU), todos los partidos políticos participaron del poder durante aquellos años.

Lamentablemente, el resultado de la gestión del “prometedor” sistema político que había emergido en 1978 fue calamitoso y diseminó, uno a uno, a sus responsables visibles. En 1980 “sólo” se contaron algunas víctimas a causa de la guerra interna. Ya en 1983 el número de muertos se había elevado exponencialmente, alcanzando casi los tres mil (apenas más bajo que el de 1984, pico del periodo de violencia política). Y el conflicto ubicado durante 1980 en un solo departamento, para 1983 se había expandido a un tercio del país⁴⁸. Del lado económico, también íbamos cuesta abajo. En 1980, el PBI *per capita* era de 5.215 nuevos soles; en 1983 sólo 4.621⁴⁹. Así, con tal desempeño en sus tres años de gobierno, en 1983 Acción Popular obtuvo el 17,5% de las alcaldías nacionales, menos de la mitad de lo que había recibido en 1980.

En sus dos años finales de gobierno, Acción Popular no mejoró su *performance*. En 1980 la inflación anual había sido de 60%. En 1985 era 158,3%, y la acumulada, más de 3.000%. Con la economía en caída libre y la guerra expandiéndose, Acción Popular obtuvo en las elecciones generales de 1985 apenas un 7,3% de los resultados. Y ni siquiera participó en las elecciones municipales de 1986. Fue, entonces, la primera víctima del gobierno de los ochenta.

48 Todos los índices de violencia provienen del informe de la CVR.

49 *Memoria del Banco Central de Reserva*, 2005. El PBI está calculado en nuevos soles de 1994.

Durante la segunda mitad de esa década, la dinámica no varió mucho. Salvo por el periodo de “prosperidad falaz” del 1985 a 1986 (que permitió al APRA mantener sus fuerzas en las elecciones municipales de 1986), su credibilidad como partido se fue difuminando mientras los números de víctimas y atentados crecían y la economía perdía todo control. En 1986 —la época dorada de García— la inflación fue de 62,9%. Para 1989 se había empujado hasta 2.775%. El PBI *per capita*, que en 1986 era 5.124 nuevos soles, en 1990 se había reducido a 3.771 y las reservas internacionales habían pasado a ser un recuerdo. Así, el APRA fue también víctima de su incapacidad para gobernar, como ocurrió con Acción Popular en el quinquenio anterior.

Izquierda Unida fue víctima de múltiples proyectiles. De un lado, de sus propias divisiones y contradicciones frente a Sendero Luminoso⁵⁰; de otro, de la crisis mundial a partir de la caída del Muro de Berlín; y, finalmente, fue víctima por haber participado como miembro conspicuo del sistema de partidos y apoyado algunas medidas de gobierno disparatadas del APRA (por ejemplo, la estatización de la Banca de 1987). En suma, el sistema político nacido en 1978, y sus partidos, desaparecieron de la escena política debido a su incapacidad para gobernar.

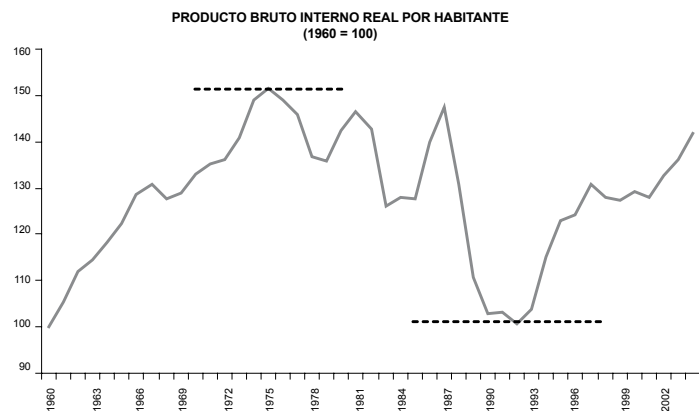
Ya he desarrollado en este capítulo el “éxito” que Fujimori tuvo al estabilizar un país en crisis generalizada y, por tanto, no repetiré los argumentos. Sólo espero que el lector tome conciencia de la dimensión de la crisis y que la compare con los años noventa. Luego, se entiende por qué la ciudadanía ha castigado tan severamente a los partidos políticos. La crisis dejada por éstos no ha sido fácil de asimilar y, menos aun, de perdonar por la población, que desató sus iras electorales contra ellos, encumbrando aquí y allá “independientes” para todos los gustos.

50 Indispensable: Hinojosa (1999).

Estos “independientes” no *representan* mejor a la ciudadanía. Únicamente generan menos pánico que los partidos políticos identificados con la más grande crisis de la historia del país. Para terminar, presentaré dos cuadros donde se aprecia la contraposición de los años ochenta con los noventa, de donde, sostengo, proviene la desconfianza y, por tanto, la crisis de los partidos nacionales.



Fuente: CVR.



Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

4. Conclusiones de la segunda parte

En este capítulo he analizado los resultados electorales desde una perspectiva histórica. He desarrollado la idea de *qué* representan las votaciones obtenidas por los candidatos. En un primer momento, describí el desarrollo del Estado-Nación en el Perú. Tanto el Estado, a través de sus manifestaciones materiales, como la Nación y sus expresiones más afectivas, han ido desplegándose durante el siglo XX. La principal demanda popular en el país (como en todo Latinoamérica) ha sido la de ser incluido a la vida pública nacional. Y esto se ha ido realizando con idas y venidas, virtudes y defectos, más rápido o más despacio, según las temporadas. Este desarrollo asimétrico de derechos ciudadanos e ideas de pertenencia ha conllevado que la población peruana se encuentre en situaciones dispares respecto del Estado-Nación. Pero lo esencial por retener es que la población tiene voluntad de formar parte de esto. Entonces, la principal demanda es la de ser incluido al proyecto estadonacional.

Si ésta es la principal demanda, la población buscará a los candidatos que puedan satisfacer este deseo de inclusión de manera eficaz. Si en mi poblado no hay un juez que dé soluciones a nuestros problemas, necesito que aparezca el Estado más básico; en cambio, si a mi provincia le hace falta un gran hospital, tengo necesidad de un Estado social acorde con el siglo XX. Por tanto, el Perú contiene poblaciones que se encuentran separadas por la geografía, pero también en el tiempo: poblaciones en el horizonte estadonacional y otras en el postestadonacional. Y el ciudadano elige al candidato que percibe como el más susceptible de conseguir que su poblado reciba el juez o el hospital ansiado.

En América Latina los grandes periodos de inclusión están vinculados al populismo. Como se mencionó, la categoría es difícil de utilizar en el Perú, pues los representantes del populismo local son muy diferentes entre sí y también en relación con sus pares latinoamericanos. Utilizar el término populismo —sin más— en el Perú sería poco riguroso. Así, en el Perú ha habido un populismo partido en tres tradiciones. Las tres juntas conformarían un populismo clásico... pero esto no lo hemos conocido. De tal manera, tenemos tres tradiciones que desde la percepción del electorado son históricamente las que incluyen parcial pero eficazmente: la conservadora, la nacionalista y la partidaria. Ya que éstas son las tradiciones de nuestro populismo desmembrado, el elector busca, según el contexto en que se realizan las elecciones, a los representantes de estas tradiciones que podrían con más éxito continuar la inclusión.

He explicado el papel de los tres candidatos que representaron al sector estadonacional del país y a los dos que fueron preferidos por el horizonte postestadonacional. El 62% del sector estadonacional se dividió en tres candidatos. Esto se debió a la ausencia de uno suficientemente fuerte para aunar a toda esta votación. Fue lo que hizo Fujimori en 1995 cuando obtuvo el 64% de la votación. Fujimori es, después de todo, quien más se acercaría al populista clásico. Pero las condiciones de los noventa no se repetirán en el corto plazo. Por tanto, lo que se dio en 2006 fue la competencia de nuestros tres populismos incompletos (o de nuestro populismo desmembrado).

Ahora bien, este tríptico de candidatos también resulta determinado por el legado de los años ochenta. En la medida que los partidos políticos fueron las piezas principales del desgobierno y colapso estatal de los ochenta, y los “independientes”, los encargados de rescatarlo, la desconfianza en los partidos políticos no ha desaparecido. Esto influye para que un gran

porcentaje de la población prefiera candidatos independientes aunque no esté segura de si serán buenos gobernantes.

Finalmente, si la población prefiere mayoritariamente opciones electorales que cumplan con: i) tener un lenguaje estadonacional y ii) que no sean partidos políticos (pues todavía padecen la crisis de gobernabilidad de los ochenta), entonces, el primer factor (el del peso de la historia) tiene más importancia, lo cual queda demostrado por la elección del APRA que desde su fundación tuvo un discurso en términos de Estado-Nación (por tanto, que cumple con la primera condición pero no con la segunda). Un hecho determinante, entonces, residiría en su prédica históricamente enraizada con la apuesta por un Estado nacional que desarrolle derechos sociales. Esa prédica moderada, de justicia social y mercado, de libertades pero autoridad, no es una novedad de García. Forma parte de la relación histórica del APRA y el país. Ella pudo más que su descrédito como personaje político y que la desconfianza que generan los partidos.

Tercera parte
Continuidades y rupturas

1. El Perú postoligárquico

Fujimori no es el primer sino el tercer tsunami postoligárquico.
Carlos Iván Degregori

El juez Monteagudo era la voz de la autoridad en Rancas. Manuel Scorza (1983) lo retrató omnipotente, haciendo justicia desde sus propias manos a punta de cachetadas o castigando con su desprecio a los pobladores que temblaban de sólo oír su nombre. Cada día, a las seis de la tarde, cuando el juez salía a dar su paseo cotidiano, Rancas entera se inmovilizaba, nadie osaba perturbar la caminata y “hasta los perros sabían que de seis a siete no se ladraba ahí”. La justicia y la autoridad en aquella comarca de la serranía se encarnaba en el juez Monteagudo: más que boca de la Ley, Monteagudo era la Ley misma.

El fiscal Chacaltana confía en los códigos legales. Santiago Roncagliolo (2006) lo ha retratado en medio de Ayacucho, tratando de imponer la Ley frente al abuso de las autoridades. Chacaltana suele perder estas batallas por la legalidad, pero a veces las gana y consigue, por ejemplo, que un alto mando militar cumpla con una diligencia o firme una de sus exhortaciones. Sin embargo, nunca es Chacaltana quien se impone: quien se impone es la Ley; la victoria le corresponde a un abstracto procedimiento enunciado en un texto legal. Jamás al trágico Chacaltita.

Estos dos personajes literarios representan los cambios de fondo en el Perú contemporáneo. Chacaltana anuncia la llegada del frío burócrata a las provincias de la serranía peruana. Su legitimidad no reposa ya —como aquélla de Monteagudo— en sus calidades personales, en su apellido o en su alianza con gamonales y párrocos. Su legitimidad estriba en que es el representante del Estado, de unas leyes que hay que respetar por igual, le pese a

quien le pese. Su lucha no es otra que la del Estado *postmedieval* europeo intentando que la ley estatal sea continua, que distintos estamentos no puedan fintearla al reivindicar otras jurisdicciones no estatales. Cada vez que Chacaltana consigue arrancarles algo a los militares, erosiona sus poderes y ensancha los del Estado moderno. En el Perú contemporáneo, aquel juez Monteagudo de Scorza (magistral representación del país de los gamonales) ya no es verosímil: en las últimas décadas fue reemplazado por un batallón de chacaltanas.

El Perú contemporáneo, entonces, ha cambiado radicalmente su fisonomía. Incluso en el mundo rural, el Estado (entidad abstracta por naturaleza) ha pasado a ser una presencia en alguna de sus formas o, al menos, una demanda. Pero, a diferencia del pasado, el Estado ya no es una ausencia que ni siquiera se constata (como cuando sus atribuciones estaban en manos de estamentos —el gamonal, el cura o el juez... la trinidad embrutecedora que decía González Prada—). El Perú, con un Estado poco efectivo pero con una población que aspira a que éste la alcance, es radicalmente distinto del Perú anterior a Velasco. Asistimos a la consolidación del Perú postoligárquico... y acaso debiéramos decir antioligárquico.

El Perú electoral postoligárquico

En los últimos treinta años, el país viene votando de una manera similar. Vale decir, la composición social del voto es parecida aunque las opciones ideológicas sean distintas. Sin embargo, si debiéramos enunciar el hilo que da continuidad al periodo, habría que hacerlo por negación: las candidaturas que en cada elección representaron a los grupos de poder no pudieron imponerse y, a lo largo del periodo, estas candidaturas fueron perdiendo importancia. El carácter universal de la votación adquirido en 1980 imprimió un sello distintivo al periodo posterior a 1978.

La Asamblea Constituyente de 1978 fue integrada por todos los partidos políticos con excepción de Acción Popular. Esto benefició largamente al Partido Popular Cristiano, el cual tuvo a su disposición todo el sector de centro-derecha del país. El PPC obtuvo el 23,8% de los votos. Ahora bien, más importante es lo obtenido por las fuerzas reñidas tradicionalmente con el poder económico en el Perú. El APRA, líder histórico del movimiento antioligárquico (aunque, como ya lo dijimos, con el tiempo terminara acercándose a estos predios), consiguió la más alta votación: 35,3%. Haya de la Torre fue presidente de la Constituyente y el Perú parecía reconocer una nueva era política. De otro lado, una gran cantidad de grupos de izquierda aparecieron en la escena. Por primera vez en la historia peruana grupos, ya no progresistas, sino abiertamente marxistas, leninistas, maoístas y hasta proalbanos contaron con la legitimidad del voto popular. Entre todos consiguieron el 29,4% de los resultados. Así, entre la votación del APRA y las izquierdas de toda tendencia sumaban el 64,7% de los votos para la Asamblea. Nunca antes en el Perú se había tenido una votación tan abiertamente contraria a los intereses de las clases dominantes. Con justicia Degregori (1991) lo llamó el primer tsunami postoligárquico.

El segundo tsunami postoligárquico de Degregori tuvo lugar en las elecciones municipales de 1983, cuando la Izquierda Unida, bajo el liderazgo de Alfonso Barrantes, se hizo de la alcaldía de Lima y parecía ser la nueva fuerza que agruparía a los marginales y que se haría de la presidencia en las elecciones de 1985. Finalmente, Carlos Iván Degregori sitúa en 1990 un nuevo tsunami postoligárquico en el triunfo de Alberto Fujimori sobre Mario Vargas Llosa. No pretendo discutir la teoría de los tres tsunamis sino reformularla en la forma, manteniendo el fondo.

En primer lugar, creo que la idea de *tsunami*, con el paso del tiempo, se aviene mal al Perú político. Un tsunami lo es tanto por su tamaño como por su capacidad de sorprender. En la medida en que uno aparece a cada elección, ya no es una sorpresa enviada por algún Poseidón político. Se acerca más a una condición permanente de la marea electoral. Así, de 1978 en adelante encontramos una morfología permanente del voto nacional con este carácter postoligárquico. En 1985, la votación del APRA e IU sumó el 67,8% y por primera vez el Perú tuvo un gobierno de centro izquierda (García hizo un mandato bastante más populista en términos económicos de lo que el viejo Haya anunciaba veinte años antes). En 1986, aunque Izquierda Unida perdió la alcaldía de Lima, obtuvo el 30,8% de la votación nacional (por lo cual esta elección podría merecerse con igual justicia el calificativo de tsunami que Degregori asigna a la de 1983, cuando IU obtuvo 29%). Por lo demás, si en estas elecciones municipales de 1986 sumamos nuevamente el caudal obtenido por el APRA e IU, llegamos a la cifra de 78,4%. ¡El gran tsunami postoligárquico!

En 1990, apareció la candidatura fujimorista. El tsunami parecía tener otras características pero la morfología era la misma. El Perú postoligárquico seguiría dándole la espalda a los partidos cercanos al poder tradicional u oligárquico. En 1995, Fujimori confirmó esta tendencia al obtener el 64,42% de los votos y siendo, por mucho, el candidato favorito entre los sectores bajos de la población. El gobierno de Fujimori contó con un apoyo importante de todas las clases sociales durante sus diez años de gobierno. Sin embargo, una constante es indudable: siempre tuvo el favor de los más pobres. En 1990 contó con ellos; en 1995, acrecentó el apoyo de aquel sector; y, en 2000, cuando parte de la clase media y alta lo había abandonado debido a la corrupción y autoritarismo, los sectores pobres siguieron con él (Carrión 2006).

Y al volver la democracia la tendencia electoral postoligárquica no ha variado. La elección de Toledo le dio una nueva forma, pero volvió a mostrar el rostro de este Perú indiferente a las propuestas de los candidatos más cercanos a los grupos de poder. Finalmente, en 2006 —ya lo vimos— los candidatos que representaron al Perú pobre, sin Estado y/o sin Nación, superaron nuevamente, como en la mayor parte de las elecciones de los últimos treinta años, el 60%. La forma de estas votaciones es, pues, clara y constante. Las variantes del populismo nacional que han ganado apoyo han sido distintas, pero las necesidades y demandas, similares.

Una tendencia paralela y emparentada es el debilitamiento de las opciones tradicionalmente vinculadas a la derecha. Dejando fuera la elección de 1980, la derecha tradicional sólo consiguió pasar a una segunda vuelta presidencial en 1990 de la mano de Vargas Llosa. Luego, los partidos de derecha, tanto en 2000 como en 2001 y 2006, no han conseguido ni siquiera eso. Como vimos en el capítulo anterior, su discurso sólo es oído por la población bajo el horizonte postestadonacional. De hecho, Portocarrero (2006) afirma que una de las razones que permiten la vigencia del caudillismo es el profundo sentimiento antioligárquico en el Perú.

Ahora bien, la tendencia reseñada es crucial para entender el futuro político del país, pues se ha mantenido en contextos muy distintos. Bajo la crisis del primer gobierno de Belaúnde, con el telón de fondo de guerra de García, con el país pacificado de Fujimori y luego con el país saqueado, y aun bajo la “abundancia” del *toledato*, las fuerzas del sector estadonacional han vuelto a reflejar una forma particular de votación. Si distintas situaciones económicas y políticas no han alterado la composición de las votaciones, la composición demográfica tampoco. En 1986, con 18 millones de habitantes y en 2006 con 28 millones, más del 60% de los electores se fue siempre

con las fuerzas claramente postoligárquicas. El populismo desmembrado ha seguido campeando bajo contextos de todo signo. Esto parece confirmar la idea de Knight (1998): el populismo no necesita de crisis terminales para surgir o desarrollarse.

Sin embargo, aun cuando hay un país postoligárquico que durante estos treinta años ha reconocido en grandes oleadas a quienes no lo representan y a quienes sí, lo cierto es que esta tendencia social ha asumido distintos rostros políticos. El país ha ensayado por distintas vías las expectativas de ensanchar el Estado-Nación. Hemos intentado la democracia proteccionista y la democracia librecambista; el autoritarismo estabilizador y el autoritarismo cleptocrático; y hecho transiciones en uno y otro sentido, pasando de la dictadura a la democracia para transitar nuevamente hacia el autoritarismo y hacer una nueva transición hacia la democracia. Por tanto, el Perú postoligárquico ha tomado distintas rutas a cada momento. ¿Cuántas continuidades y cuántas rupturas políticas en este periodo posterior a 1978? ¿Cuáles son las idas y venidas de este país asentado en su condición postoligárquica, acaso siempre más democrático y por momentos menos liberal? ¿Y qué hay del futuro? Todo es tema del siguiente capítulo.

2. Las mil y una transiciones

—¿Oyeron las noticias? Gabinete militar, por los líos de Arequipa. Los arequipaños lo sacaron a Bermúdez. Esto es el fin de Odría.
—No te alegres tanto—dijo Carlitos—. El fin de Odría es el comienzo ¿de qué?
Mario Vargas Llosa, *Conversación en la Catedral*.

Entre 1975 y 1989 se desarrolló lo que Huntington (1994) denominó la “tercera ola de democratizaciones” en el mundo. Surgida en el sur de Europa con las democratizaciones de Portugal, España y Grecia, se expandió hacia Latinoamérica a inicios de los ochenta y sacudió las costas de Europa del Este a finales de la misma década. Jamás un número parecido de países había abandonado en un mismo lapso distintos tipos de autoritarismo para abrazar la democracia. Esto dio pie a numerosos estudios sobre las “transiciones” y apareció un nuevo tipo de científico social: el transitólogo.

El transitólogo se enfrentaba a distintas formas de transiciones y a países con situaciones sociales, políticas y culturales muy diferentes, pero que tenían un punto en común: todos abandonaban el autoritarismo. Así, el estudio de estas transiciones no se centró en las condiciones estructurales (económicas, sociales y culturales) que permitían los cambios de régimen, sino en la forma en que los líderes políticos actuaban para conseguir tales transiciones. Para los transitólogos, el advenimiento de las democracias fue, sobre todo, el producto de la negociación entre líderes políticos de oposición y las cúpulas en el poder. Esta negociación generalmente había terminado inclinando la balanza hacia los *aperturistas*, lo cual permitió a las cúpulas militares conseguir una salida “decorosa” con algún tipo de impunidad negociada⁵¹. De otro lado, como es

⁵¹ La referencia clásica para este acercamiento a las transiciones es O'Donnell y Schmitter (1986).

obvio, este estudio de las transiciones se centró en momentos muy cortos pero claves para la caída de los autoritarismos. El estudio de las transiciones se concentraba, entonces, en algunos meses de negociaciones hasta las primeras elecciones libres. Cuando éstas se llevaban a cabo, la transición a la democracia había terminado.

Ahora bien, este tipo de investigación, centrada únicamente en las estrategias utilizadas por las élites políticas para conseguir la democratización, fue de gran utilidad para explicar las transiciones, pero es menos poderosa para explicar los lentos procesos de consolidación de la democracia. Suelen asumir que hay *un* momento en el cual se transita del autoritarismo a la democracia; pero el paso a la democracia también se puede analizar en muy largos periodos de democratización. Los países industrializados, en términos generales, no hicieron *una* transición sino que:

“[...] tanto Europa “avanzada” como EEUU tuvieron muy largas transiciones hacia la democracia; transiciones cuyo punto final no era imaginable, algunas graduales como la británica o la americana que se extendieron del primer tercio del siglo XIX hasta 1918 y 1970 respectivamente, otras tumultuosas e interrumpidas por accidentes graves como la alemana, la española, la francesa o la italiana.” (Hermet 2001: 292.)

Para el caso peruano, esto es absolutamente relevante. “Hemos vuelto a la normalidad”, comentó Martín Adán al enterarse del golpe de Estado promovido por Odría contra José Luis Bustamante y Rivero. El comentario ha tomado todo tipo de formas para graficar nuestra propensión al vaivén infinito entre autoritarismo y democracia. Dargent (2000) ha hablado de la “transición interminable” y algunos otros del

“golpe de Estado permanente” (Conaghan 2005: 7). Así, más que preocuparme el estudio de *la* transición en el Perú (¿cuál de todas?), prefiero centrar la observación en distintos filones de nuestras transiciones (deliberadamente en plural) en los últimos treinta años. ¿Cuáles son las transiciones que quedan por hacer y cuáles las que deberíamos priorizar?

En el capítulo anterior, mostré una continuidad electoral importante de lo que podíamos llamar “el Perú postoligárquico”. Sin embargo, esta continuidad sociológica ha tenido claras discontinuidades políticas (vale decir, hemos transitado de terrenos autoritarios a otros que lo son menos). En esta sección final, analizaré dos dimensiones de la discontinuidad política para el mismo periodo post 1978: una dimensión institucional o de Estado de derecho, y otra respecto de los partidos políticos. Las dos dimensiones están relacionadas pero no unidas y nos permitirán tener un panorama del proceso —ya no de una transición— sino de *democratización* en el país. Una vez más, me anima dejar de lado el *snapshot* y correr el riesgo de la perspectiva histórica. Ahí vamos.

Dos transiciones del postfujimorato

En 1980 hicimos la transición indiscutible. Después de doce años con un régimen militar, el Perú regresó a la vida política libre. No sólo se volvió a las urnas, sino que se estrenó una Constitución con novedosas instituciones que garantizarían que los tradicionales desencuentros entre Parlamento y Ejecutivo no se repitieran. Durante doce años aquel sistema funcionó de manera correcta. Institucionalmente correcta. Tan correcta que Fujimori enunció a cada uno de sus pilares para justificar su golpe de Estado del 5 de abril de 1992: los partidos políticos eran unas rémoras (una partidocracia), el Tribunal de Garantías Constitucionales boicoteaba sus proyectos de reforma y, por último, el Parlamento impedía que

el Ejecutivo pusiera orden en casa. Las denuncias fujimoristas revelan que el sistema de pesos y contrapesos funcionaba y que, entre 1990 y 1992, Fujimori sufrió —sobre todo— de incompetencia institucional. Absolutamente ajeno al sistema político nacido en 1978, sin partido, sin conocimientos sobre el entramado legal y procedimental del Estado de derecho, Fujimori decidió denunciarlo antes que entenderlo. Y, ante el contexto de desgobierno generalizado, el Perú creyó en su versión⁵².

El golpe de Estado del 5 de abril de 1992 ha sido el único golpe de Estado exitoso en América Latina después de la tercera ola de democratizaciones (Hagopian & Mainwaring 2005). Y con él, y sus mutaciones posteriores, se abrió un periodo complicado para los politólogos. Una serie de etiquetas fueron creadas o adaptadas para el caso peruano (así como para otros regímenes que parecen establecerse en una zona gris entre democracia y autoritarismo): democradura, dictablanda, democracia delegativa, democracia no liberal, autoritarismo competitivo, etc. El esfuerzo conceptual destaca la hibridez del régimen y el hecho concreto de no estar frente a autoritarismos tradicionales (comúnmente llamados *dictaduras*).

Ahora bien, que el régimen político del fujimorismo (el fujimorato) se estableciera en esa zona amorfa donde no se reconoce con facilidad el lindero que separa el autoritarismo de la democracia, no me parece invalidar que en el año 2000 el Perú emprendiera una nueva transición. Y esta transición, como aquella de 1980, hubiera debido devolvernos dos cosas: la institucionalidad democrática y los partidos políticos. La primera parece haber sido ganada. La segunda es, más bien, una cruda ausencia.

⁵² Véase Tanaka (1998).

Transiciones institucionales: un diálogo con Tanaka

¿Al caer el gobierno de Fujimori se realizó una transición a la democracia? Martín Tanaka piensa que no. Según él, el régimen fujimorista fue autoritario, “pero no por las consecuencias del régimen en sí (las reglas de juego) sino por las condiciones reales de competencia política” (Tanaka 2004). Entonces, luego del desplome del gobierno de Fujimori, lo que ocurrió fue el aumento de la competencia política entre los actores del sistema. Durante el fujimorato, “el problema no estuvo tanto en el orden institucional propiamente dicho como en lo limitado de la competencia política”. Finalmente,

“Por todas estas razones, sostengo que es muy equívoco hablar de una “transición democrática” o de un “cambio de régimen” del gobierno de Alberto Fujimori al de Alejandro Toledo. Ese término tiene implícitas algunas evocaciones que conviene evitar: por ejemplo, que hubo una suerte de “despertar democrático” detrás de la caída del régimen anterior, que hubo antes una “dictadura” o un autoritarismo clásico, que hubo un clivaje o conflicto entre las fuerzas del autoritarismo y las de la democracia, y que con la transición se dio un cambio de régimen que marca un claro corte entre dos etapas cualitativamente distintas” (Tanaka, 2005b: 26-27).

Tanaka tiene razón en muchas cosas. Bajo Fujimori no hubo Tlatelolco ni Tienanmen; no se reprimió como en las viejas dictaduras. Y recuerdo que cuando anunció que dejaba la presidencia, apenas éramos unas decenas celebrándolo en un parque céntrico limeño. Así de triste: que no se invente una tradición contestataria donde hubo servidumbre voluntaria. Tanaka tiene razón y, por tanto, no caigo en el problema de creer “en una suerte de despertar democrático detrás

de la caída del régimen anterior” si definiendo que, en términos institucionales, sí se realizó una transición.

El régimen fujimorista fue autoritario en la dimensión institucional que Tanaka descarta. Es cierto, la Constitución y buena parte de la legalidad que conforman la institucionalidad del país se mantuvieron intactas entre uno y otro periodo, pero esto no equivale a decir que el juego institucional fuese el mismo antes y después de la caída del régimen. Las instituciones son las reglas escritas pero también aquellas que determinan las conductas de la gente sin que nadie se haya dado el trabajo de volverlas una ley positiva. Durante el fujimorato, el *accountability* horizontal era casi inexistente y el vertical, amañado⁵³. Cualquier persona que haya trabajado en algún ministerio en ambos periodos sabe que bajo Paniagua y Toledo los funcionarios del ejecutivo debieron re-aprender a negociar con el Parlamento. Antes no había ninguna necesidad de esto, ya que la horizontalidad de las instituciones era una quimera. Y si pensamos en el Tribunal Constitucional, el cambio también es absolutamente radical. El TC ahora es una institución que equilibra y desafía a los otros poderes. Cada institución del Estado recobró grandes dosis de autonomía.

Tanto Paniagua como Toledo y García han llevado a cabo administraciones donde las instituciones se interpelan y moderan unas a otras, donde la competencia política se realiza en un contexto de neutralidad, donde los procesos electorales han sido ejemplares; han afrontado duras movilizaciones populares dentro de los márgenes de la legalidad y han hecho frente a una prensa crítica en extremo sin intentar recortar tales libertades. Los cambios no me parecen menores, son rasgos que aluden a un cambio de régimen y no a un simple cambio de administración.

⁵³ *Accountability* vertical: periódicamente los gobernantes deben rendir cuentas ante las urnas. *Accountability* horizontal: se rinde cuentas a través de una red de “poderes relativamente autónomos (es decir, instituciones) que pueden examinar y cuestionar, y de ser necesario, sancionar actos irregulares cometidos durante el desempeño de los cargos públicos.” (O’Donnell 1997.)

La transición que falta e importa: el regreso de los partidos políticos

Si el postfujimorato nos ha devuelto las instituciones independientes y reestablecido la vigencia de las libertades, hemos mantenido el desorden en la representación política que campeaba en los noventa. El tablero político sigue siendo pasto de improvisación y aventura individual, los “independientes” siguen dando la hora en cada elección. No hemos visto una vuelta de los partidos políticos. Ni nuevos ni viejos.

El lector avisado pensará que olvido que el APRA está en el poder... ¿Nuestro único partido histórico gobierna y afirmo que los partidos no han vuelto? Una vez más, maticemos. Efectivamente, desde la caída de Fujimori, algunos partidos parecieron volver a la primera plana luego de una década de olvido. Valentín Paniagua, líder de AP, presidió el gobierno de Transición. En 2001, el APRA obtuvo 26% de los votos en primera vuelta, 47% en la segunda y consiguió 20% de la representación parlamentaria (sólo un año antes, la candidatura de Abel Salinas apenas si había superado el 1%). Lourdes Flores, encabezando la alianza UN y líder del histórico PPC, consiguió 24% de los votos y 14% de la representación parlamentaria. Un año antes el PPC ni siquiera había presentado candidatura presidencial y no había conseguido representación parlamentaria alguna. Finalmente, un año después, en las elecciones regionales y municipales de 2002, el APRA consiguió doce gobiernos regionales de veinticinco en disputa. No es una sorpresa que muchos estudiosos hayan percibido la resurrección del sistema de partidos en el Perú (Kenney 2003; Schmidt 2003).

No obstante, tal regreso no ha pasado de ser un amago. Aun cuando en la elección presidencial de 2006 los partidos nacionales obtuvieron más o menos la misma votación que en 2001 (algo más del 50% si tomamos como partidos a AP, el APRA y el PPC), fuera del nivel presidencial, los partidos no

articulan la vida nacional. Y los partidos son fuertes cuando pueden articularla en sus distintos niveles. Partidos que sólo existen a nivel presidencial se parece a unos que no existen.

¿Por qué son importantes los partidos políticos? En primer lugar, porque los partidos fuertes eliminan la incertidumbre en los sistema políticos. Acaso podamos inventar una norma: dime cuán débiles son tus partidos y te diré cuán imprevisible es tu futuro político⁵⁴. Esta imprevisibilidad generalizada se puede apreciar en los grados de volatilidad (vale decir, el porcentaje de votantes que migra de un movimiento político a otro entre dos elecciones). Por ejemplo, en Estados Unidos, entre 1978 y 2002 sólo el 3,2% de los electores abandonó en algún momento su opción por el partido Republicano, Demócrata o un eventual tercero en favor de otro. En el Perú, durante el mismo lapso, la volatilidad fue de 51,9% (Mainwaring 2006). Más de la mitad de nuestro electorado, de una elección a otra, modificó la organización política a la que favoreció con su voto. El problema no es, desde luego, no parecemos a Estados Unidos (de hecho, no nos parecemos a nadie porque de no ser por un par de países más volátiles que nosotros, encabezaríamos el ranking mundial), el problema son las consecuencias que esto acarrea. La fundamental, ya lo dije, la política no es previsible. Con un electorado tan dado a la experimentación no hay forma de saber a ciencia cierta qué ocurrirá en el horizonte político de corto plazo. Y, desde luego, no me refiero a que no sabemos *quién* ganará las próximas elecciones (eso nunca se sabe en una democracia) sino que no tenemos idea de *cómo* gobernará.

De otro lado, los partidos políticos ordenan la participación política. Si son sólidos, la multitud de actores sociales con demandas (legítimas o ilegítimas) deben pasar por ellos para hacerlas oír (Mainwaring y Scully 1995). Si los partidos no son fuertes, intentarán otras vías para hacerse sentir, recurriendo,

⁵⁴ Véase Mair (1998).

más bien, al mundo privado de amistades bajo la mesa. Asimismo, de pasar por los partidos políticos, las demandas son canalizadas hacia el Congreso u otras instancias de discusión democrática. Sin partidos políticos, las demandas terminan en las calles con pedradas y llantas quemadas. Así, la existencia de partidos reduce las pulsiones belicosas en el sistema político y propicia el enfrentamiento entre argumentos antes que entre pandillas; y el elector es llamado a comprender las discusiones antes que a decidir una trinchera desde la cual luchar políticamente. Esto, por ejemplo, parece muy claro para el caso del linchamiento del alcalde de Ilave en 2004. Más que un problema de naturaleza cultural, el crimen del alcalde aparece vinculado con la ausencia de partidos, una situación donde la población es movilizadada por distintos liderazgos individuales a cada elección, lo cual genera inestabilidad y, en este caso concreto, violencia (Meléndez 2005).

En el capítulo anterior, señalé que los partidos tradicionales afrontan en el Perú dificultades de orden histórico, estructurales, un descrédito que no será fácil de revertir. Algunos académicos han advertido que la estructura social en el país ha variado tanto respecto de mediados del siglo XX (cuando los partidos se establecieron) que es casi imposible que bajo el nuevo contexto resurjan. Sumado a esto, la presencia de la televisión también boicotea la resurrección de los partidos (Cameron y Levitsky 2003). El diagnóstico es certero y las dificultades que enuncian aparecen difíciles de remontar. Sin embargo, ¿debemos asumir que la ausencia de partidos es una fatalidad de la historia, cruzarnos de brazos ante fuerzas estructurales que nos dominan infaliblemente? Creo que, aunque las dificultades de los partidos son profundas, hay un nivel menos profundo que puede paliarlas. Las reformas institucionales son el nivel que puede atenuar las dificultades históricas... o agravarlas.

Martín Tanaka tiene razón al señalar repetidamente que el gran problema de la política peruana es la inexistencia de partidos políticos. Ahora bien, aceptar el diagnóstico debería llevarnos a tomar medidas que privilegien la existencia de éstos. La reforma política debería tomar conciencia de la prioridad. Sin embargo, tengo la impresión de que tal prioridad no está clara y las reformas institucionales, desde la transición, han apuntado en muchas direcciones que, involuntariamente, debilitan aun más los partidos nacionales.

No es el lugar aquí para hacer un análisis exhaustivo de las distintas medidas puestas en marcha, pero baste mencionar algunas. Por ejemplo, en un contexto de debilidad extrema de los partidos políticos, la descentralización emprendida desde el gobierno de Alejandro Toledo tal vez los debilita todavía más. Partidos que ya tenían problemas serios para llegar a los niveles municipales, ahora tienen, además, que intentarlo en el nivel regional que antes no existía. Esto, por lo demás, no es un fenómeno extraño. Al fraccionar el poder, éste se aleja del centro (que es el único nivel donde nuestros partidos parecen tener alguna presencia). Lo que puede ser muy saludable en la teoría democrática, en un contexto de desarticulación de la representación política puede agudizar tales problemas⁵⁵.

De la misma manera, los distintos mecanismos de participación civil establecidos desde el gobierno de transición tampoco parecen ir en la vía del fortalecimiento de los partidos. Aunque el propósito de todos ellos descansa en la necesidad de legitimar las acciones del Estado, relativizan la importancia de la representación política. Según esta lógica, la sociedad civil organizada debe concertar presupuestos y

⁵⁵ Para las reformas descentralistas y sus inesperadas consecuencias en América Latina (sobre todo en Argentina, Bolivia y Venezuela), véase Grindle (2000). Para la manera en que la descentralización y/o centralización del poder afecta a los sistemas de partidos, véase Chibber y Kollman (2004).

planes; y a los elegidos (alcaldes o presidentes regionales) les toca la simple aplicación de lo pactado con la sociedad. A mi modo de ver, esto desvirtúa la lógica del gobierno representativo. El furor participativo de los últimos años (expresado en leyes de Presupuestos Participativos, Consejos de Coordinación Regional o Local, Mesas de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, etc.) tiene como principio que la política está sucia, que hace falta que la sociedad se involucre para limpiarla: suponen y mantienen “la política bajo sospecha”, para utilizar la fórmula de María Isabel Remy (2005). Pero ¿tiene sentido curar los problemas de representación con mecanismos que parecen querer eliminarla? Difundir espacios de democracia directa en un contexto de partidos débiles y donde la sociedad civil también lo es, puede redistribuir el poder hacia cacicazgos locales, debilitar a las autoridades elegidas y, por extensión, acentuar las dificultades de los partidos nacionales⁵⁶.

Finalmente, desde 2003 el Perú cuenta con una Ley de Partido Políticos que busca fortalecerlos y conseguir que la competencia política sea menos tumultuosa. Aunque los propósitos de la ley son los mejores, de momento no son efectivos. El excesivo número de candidaturas presentadas en las elecciones regionales y municipales de 2002 (cuando no había Ley de Partidos) ha sido casi el mismo en las de 2006 (con la ley ya vigente). Así, la participación no se ha ordenado. La ley tiene varios problemas que se pueden enunciar genéricamente: distingue entre partidos políticos nacionales (aquéllos con representación en el Congreso) y movimientos de alcance regional y local. Los partidos están obligados a cumplir una serie de medidas en extremo complicadas y costosas. Los movimientos no lo están.

⁵⁶ Para la fiebre participativa y sus consecuencias, véase el excelente Remy 2005. En la misma dirección, Tanaka (2005b: 110-113).

Con esto, indirectamente, se promociona a los movimientos independientes y se perjudica a los partidos nacionales. Para ponerlo de la manera más simple: es muy caro participar en elecciones subnacionales con un partido y casi gratuito hacerlo con un movimiento regional o local. La moraleja es la misma: en un contexto de partidos extremadamente débiles, tales reformas institucionales acentúan la debilidad.

Entonces, aunque creo que los problemas de los partidos políticos tienen raíces históricas, las reformas institucionales pueden paliar o agudizar tales problemas. Me parece crucial para la vida política del Perú orientar las reformas institucionales hacia el fortalecimiento de los partidos nacionales. Con esto no quiero descalificar las reformas emprendidas desde la transición, sólo advertir que ellas se ponen en marcha en un contexto determinado donde los partidos son en extremo endeble y que esto no parece ser tomado en cuenta. Con sus defectos, atrofias y corruptelas, son los partidos que hay y deberíamos fortalecerlos. Porque son necesarios para todo el mundo. Hasta Fujimori necesitó uno al final de sus días (Roberts 2006).

Para terminar un último punto: la combinación de descentralización con ricos recursos en las regiones y con ausencia de partidos puede ser explosiva. No invento nada. Hace cuarenta años Huntington (1968) mostró que la inestabilidad de los países no se debía a la pobreza, sino a que eran pobres *enriqueciéndose* en un marco de instituciones débiles. El principal detonante de la inestabilidad era, según el clásico estudio de Huntington, la modernización económica acompañada de movilizaciones sociales en estados donde dichos procesos no están regidos por instituciones fuertes (principalmente partidos políticos) que temperen el ánimo de participación de la población que se ve atraída hacia la cosa pública por la riqueza. Me parece que esto es absolutamente pertinente para el caso peruano. En un momento donde las regiones están en

manos de agrupaciones que se organizan en las vísperas de las elecciones, en que los partidos son más débiles que nunca en dichos niveles y donde las regiones reciben mucho dinero por el canon, los desencuentros pueden ser graves. Y esto no se soluciona con más participación civil (de hecho, los mecanismos de participación sólo han aumentado en los últimos años y, sin embargo, las protestas no han amainado ni para Toledo ni para García), sino con partidos que articulen la vida nacional en sus distintos niveles. Los partidos permiten que lo local esté vinculado con lo nacional; sin ellos, cada nivel se atomiza y emprende sus propias vías de desarrollo (o subdesarrollo).

Conclusiones

Nada hace más sensata a la gente que la perspectiva verosímil de prosperidad.
Fernando Savater

En 2001 Lima votó mayoritariamente por Lourdes Flores (Unidad Nacional) y en 2006 repitió su preferencia. En la segunda vuelta de aquella misma elección, prefirió por mucho al candidato del APRA frente a Humala. En las elecciones municipales de 2006, 31 distritos limeños (¡el 74%!) ha quedado en manos de partidos políticos. Aunque hay un elemento de “arrastre” en la figura de Castañeda, Lima parece preferir a candidatos con cierta institucionalidad partidaria detrás. La capital pareciera favorecer opciones menos aventureras que los movimientos inventados de la noche a la mañana. Esto contrasta, desde luego, con el interior del país, donde dichos partidos (APRA, UN, AP) no consiguen mayores apoyos y sí, más bien, los movimientos improvisados a cada elección (de los 25 movimientos regionales vencedores en 2006, 13 no existían en la elección de 2002)⁵⁷.

Przeworzki y Limongi (1997) realizaron el estudio empírico más completo que hay sobre transiciones a la democracia: más de 180 a partir de 1950. Según el estudio, la riqueza en las sociedades no elimina el autoritarismo ni las democratiza mágicamente (como querían las viejas teorías sobre la modernización); sin embargo, los países que abandonaron el autoritarismo teniendo un Producto Bruto Interno *per capita* importante consiguieron un régimen más estable sin recaer

⁵⁷ Meléndez (2007) ha hecho bien en recordarnos que esos “desconocidos actores políticos” de provincias no lo son tanto y que, más bien, tales calificativos reflejan la ignorancia de los analistas limeños respecto de las dinámicas políticas del interior. Meléndez demuestra que los actores de provincias tienen muchos años en política y que no son ningunos improvisados. Ahora bien, olvida que el mero trajín en la vida política provinciana no garantiza ni eficiencia ni articulación del sistema político y cae en el problema de celebrar esta “experiencia” provinciana por el sólo hecho de “ser experimentada”. El desafío principal, entonces, es que la experiencia esté al servicio de proyectos duraderos, que articulen las diferentes demandas y las canalicen hacia instituciones nacionales. La experiencia al servicio de caudillismos locales no mejora nuestra situación política.

en el autoritarismo. Si un país hizo su transición con un *per capita* menor a mil dólares, el estudio comprobó que éste volvería al autoritarismo en un lapso máximo de ocho años. Si el país tenía un *per capita* entre mil uno y dos mil dólares, la esperanza de vida de la democracia se extendía a 18 años. Ahora bien, “la probabilidad de que una democracia muera en un país con un *per capita* superior a cuatro mil dólares es prácticamente cero: dos en mil años”⁵⁸.

Una hipótesis que habría que explorar a partir de estas investigaciones comparadas es, entonces, que el crecimiento desigual del país puede estar generando pulsiones democráticas entre los sectores de la población que se benefician del desarrollo económico (y de la presencia del Estado), pero que tales pulsiones no aparecen en las zonas del país donde las condiciones precarias de vida también hacen la democracia más precaria. Mientras Lima tiene un *per capita* que se acerca al monto con el cual los países pueden mantener una democracia estable (algo más de tres mil quinientos dólares), muchos departamentos del Perú tienen un *per capita* de entre cero y mil dólares, vale decir, un ingreso que, según el estudio citado, sería el de un país destinado a recaer en el corto plazo en el autoritarismo. Acaso esto pueda explicar, parcialmente, por qué Lima prefiere reiteradamente organizaciones políticas más sólidas y de alcance nacional.

Esto, además, ratifica las ideas expuestas en este ensayo: en el Perú conviven poblaciones en horizontes muy distintos, lo que condiciona nuestra vida política y, concretamente, los resultados electorales. Si confiamos en la literatura comparada, para que la democracia se asiente hará falta que las condiciones para la democracia que están apareciendo en Lima se expandan a otras zonas del país.

⁵⁸ Hay un estudio posterior (Stokes & Boix 2003) que confirma y radicaliza las tesis de Przeworski y Limongi (1997).

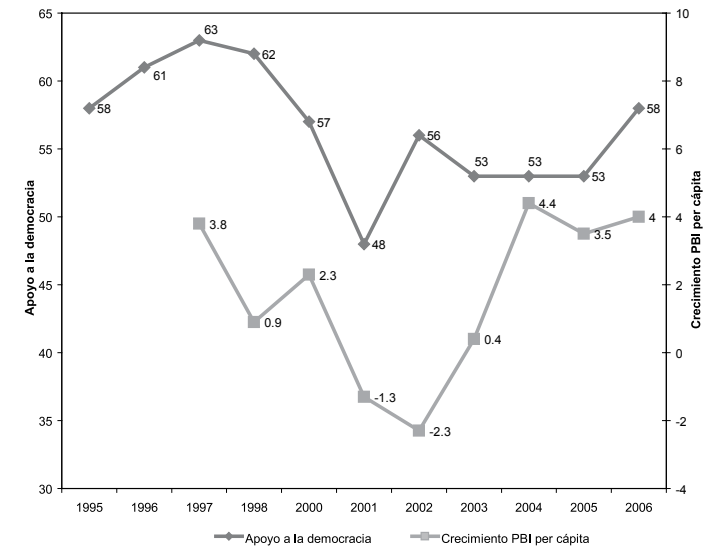
En este ensayo he tratado de poner una elección particular en perspectiva histórica y observarla de tal manera que permita entender tanto el pasado reciente como el futuro cercano (de entenderlo, no de predecirlo). Desde el inicio, he querido mostrar que los análisis estáticos y fundados en las dimensiones puramente económicas o institucionales dejan de lado componentes centrales de la política peruana, en particular, el peso de una historia determinada. Además, espero haber demostrado cuán equivocados están aquellos que predicán la irracionalidad de nuestro electorado así como su falta de memoria. Nuestro elector es memorioso en extremo y ha demostrado actuar con racionalidad política.

Así, a partir de lo mencionado he tratado de mostrar tres ideas centrales. En primer lugar, la convivencia en el país de distintos “tiempos”. Coexisten poblaciones que esperan los primeros elementos de la ciudadanía moderna que T. H. Marshall ubicaba en el siglo XVIII (la aparición del Estado como un tercero que arbitra las relaciones entre particulares); con otras, globalizadas como las que más, que han culminado su proceso de inclusión en el proyecto del Estado-Nación peruano y que ya piensan más allá de sus fronteras. Por lo tanto, debe quedar claro que no invoco la mera desigualdad económica entre ricos y pobres, sino la que se da entre las prestaciones que el Estado brinda a distintas poblaciones del país y, de otro lado, subrayo la desigualdad en la manera en que la Nación reconoce a sus nacionales. Por tanto, subrayo que este ensayo no opone “civilizados a bárbaros”, ni “arcaicos a modernos”, este ensayo trata de demostrar la coexistencia en el Perú de bolsones de población bajo el paradigma estadonacional (moderno por todos los lados) y el de bolsones bajo el paradigma postestadonacional (si se me apura, postmodernos).

En segundo lugar, la convivencia de poblaciones con situaciones materiales y simbólicas tan dispares viene configurando los resultados electorales del Perú contemporáneo. Y lo seguirá haciendo. Y seguirá generando tensiones entre ambos horizontes. En un plano institucional, por ejemplo, no nos extrañemos si la población rechaza mayoritariamente fallos provenientes de jurisdicciones internacionales (vale decir, donde predomina una lógica postnacional) ni nos sorprendamos si los políticos explotan esta dualidad al interior del país. En el plano económico, si la costa continúa creciendo como en los últimos años gracias al comercio internacional y al libre intercambio de productos manufacturados o agroindustriales (vale decir, beneficiándose del carácter postnacional de su economía), pero la sierra sigue siendo un territorio del cual extraer materias primas (un sistema económico que ha probado su ineficiencia), el foso entre uno y otro horizonte sólo se ensanchará. Aquéllos pensarán cada vez más con reflejos postestadonacionales, mientras éstos agudizarán los reflejos estadonacionales.

En tercer lugar, he querido demostrar que la Historia importa. Más allá de los análisis hechos en términos de *fotos*, donde se aprecia un tablero con actores e intereses, aquí he querido demostrar que esos actores con intereses actúan en un contexto e insertados en una historia. Cada personaje político peruano es identificado con una tradición particular y con una historia que ha moldeado patrones de conducta. Creo que Conaghan (2005: 14) tiene razón cuando afirma que Montesinos y Fujimori no inventaron la corrupción ni la debilidad institucional en el Perú: ellos agudizaron esos problemas a partir de una historia donde tales prácticas estaban asentadas. Así, el acento en la perspectiva histórica desplegada en este ensayo también ha sido un esfuerzo por llamar la atención sobre nuestras continuidades y rupturas, un esfuerzo por señalar que en el desorden también hay cierto orden.

Cuando Alexis de Tocqueville (1981) comparó los Estados Unidos con América Latina, constató que ambos contaban con instituciones democráticas, pero sólo los norteamericanos poseían los *valores* de la democracia. Acaso Tocqueville tuviera razón, han faltado los valores igualitarios que dan vida a la democracia cotidianamente. En la misma dirección, Gonzalo Portocarrero (2006: 24) ha sugerido recientemente como remedio a la exclusión y el caudillismo “una cultura del diálogo”. Por mi parte, creo que antes que los “valores” de la democracia o de una “cultura del diálogo” nos falta que los gobiernos elegidos democráticamente (y que son reconocidos como “el Estado” por la población) resuelvan problemas básicos y materiales. Sólo en la medida que esto se consiga florecerá la “cultura de la democracia”. El último Latinobarómetro (2006: 72) parece apuntar en esta dirección. El apoyo a la democracia aparece estrechamente vinculado con el crecimiento económico de los países.



Fuente: Latinobarómetro 2006.

Como se aprecia, las curvas de crecimiento económico y apoyo a la democracia parecen reflejarse. Así, más que un problema de “cultura”, la confianza en la democracia es un problema de bienestar ciudadano y de interés en ese tipo de régimen. Como en la célebre frase de Adam Smith, la confianza en la democracia parece responder a una lógica de “dame lo que necesito y tendrás lo que deseas”.

Creo que la primera necesidad para asentar el sistema democrático en el país es que el APRA haga un buen gobierno. Y un buen gobierno no significa mantener el “piloto automático” de la Era Toledo: significa hacer política y políticas, darle contenido a la democracia. Hace falta un Estado que dé solución a los problemas más básicos de la población en términos de seguridad, justicia, salud y educación. Y, de otro lado, el Estado debería procurar que los beneficios que el mercado está dejando en la costa asomen de alguna manera también en la sierra y amazonía⁵⁹. Finalmente, una buena gestión aprista podría enterrar el temor engendrado en los ochenta hacia los partidos políticos. Sin partidos, la democracia será irremediablemente precaria y cualquiera de las vertientes históricas del populismo llamará siempre a la puerta para recoger los frutos del malestar. ¿Son el APRA y García conscientes de su responsabilidad?

La preocupación última de este ensayo es la supervivencia del sistema democrático en el Perú: el de las condiciones para mantenerlo a flote. Las condiciones son muchas pero he tratado de llamar la atención sobre: i) la necesidad de reducir la brecha material y simbólica que separa a los dos horizontes bajo los cuales se encuentra la población; y ii) en la aparición de partidos que ordenen la participación política. Creo que el desarrollo de estos dos factores está entrelazado y son aqué-

⁵⁹ Como muestran Carrión y Zárate (2007), en la sierra sur las actitudes hacia la democracia son muy diferentes del resto del país (vale decir, bastante menos favorables). Desde luego, debe haber elementos culturales que expliquen tales diferencias, pero un acercamiento efectivo del Estado y la solución de intereses básicos podrá paliar tales variables culturales.

llos que permitirían contar con un sistema político donde se destierre la incertidumbre cíclica, el portazo electoral malhumorado y esa crónica obligación de los peruanos de votar para “salvarse de algo”. De hoy hacia atrás, los peruanos votaron para salvarse del nacionalista, para salvarse de Alan, para salvarse de la dictadura, para salvarse del *shock*... En última instancia, este ensayo es una reflexión para imaginar un país político en el que las urnas no sean un espacio para “salvarnos de algo”. Este ensayo es un esfuerzo, en fin, por pensar un país donde los peruanos podamos votar desde la convicción y no desde la urgencia.

Referencias

Aljovín de Losada, Cristóbal. 2000. *Caudillos y Constituciones. Perú: 1821-1845*. Lima: Fondo de Cultura Económica y Pontificia Universidad Católica del Perú.

Aljovín de Losada, Cristóbal. 2005. “Sufragio y Participación Política: Perú 1808-1896”. En: *Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el Gobierno Representativo*, Cristóbal Aljovín de Losada y Sinesio López, eds., pp. 19-74. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Aljovín, Cristóbal y Nils Jacobsen. 2005. “The long and the short of it: A pragmatic perspective on political cultures, especially for the modern history of the Andes”. En: *Political cultures in the Andes 1750-1950*, Jacobsen, Nils y Cristóbal Aljovín, eds., pp. 1-24. Duke University Press.

Anderson, Benedict. 1993. *Comunidades imaginadas. Reflexión sobre el origen y difusión del nacionalismo*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Barnechea, Alfredo. 1995. *La República Embrujada*. Lima: Aguilar ediciones.

Berlin, Isaiah. 1979. “Nacionalismo, descuido del pasado, poder actual”. En: *Contra la corriente. Ensayos sobre historia de las ideas*, pp. 415-438. México DF: Fondo de Cultura Económica.

Boix & Stokes. 2003. *Endogenous democratization*. En: *World Politics*, 55. 4. pp. 517-549.

Cameron & Levitsky. 2003. "Democracy without parties? Political parties and Regime Change in Fujimori's Peru". En: *Latin American Politics and Society*, 45: 3.

Carrión, Julio. 2006. *Conclusiones a The Fujimori legacy. The rise of electoral authoritarianism in Perú*, pp. 294-318. The Pennsylvania State University Press.

Carrión y Zárate. 2007. *Cultura política de la democracia en el Perú: 2006*. Lima, IEP, Latin American Public Opinion Project, Vanderbilt University.

Chibber & Kollman. 2004. *The Formation of National Party Systems. Federalism and Party competition in Canada, Great Britain, India and United States*. Princeton, Princeton University Press.

Collier, David. 1978. *Barriadas y élites: de Odría a Velasco*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Conaghan, Catherine. 2005. *Fujimori's Peru. Deception in the public sphere*. Pittsburgh: The University of Pittsburgh.

Connor, Walker. 1972. "Nation building or national destroying?" En: *World Politics*, 24.

Contreras, Carlos y Marcos Cueto. 2004. *Historia del Perú contemporáneo*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, Pontificia Universidad católica del Perú y Universidad del Pacífico.

Contreras, Carlos. 2002. *El centralismo peruano en su perspectiva histórica*. Lima, IEP. Documento de Trabajo 127.

Contreras, Carlos. 2005. "The Tax Man Cometh: Local Authorities and the Battle Over Taxes in Peru, 1885-1906". En: Aljovín & Jacobsen eds, *Political cultures in the Andes 1750-1950*, pp. 117-136. Duke University Press.

Cotler, Julio. "Political parties and the problems of democratic consolidation in Peru". En: *Building Democratic Institutions. Party Systems in Latin America*, Mainwaring Scott y Timothy R. Scully eds., (pp. 323-353). Stanford University Press, 1995.

Cotler, Julio. 2006. *Clases, Estado y Nación en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Dahl, Robert. 1971. *Poliarchy: participation and opposition*. New Haven: Yale University Press.

Dargent, Eduardo. 2000. "La transición interminable. ¿Qué pasó con los partidos políticos en el Perú?" En: *Lecturas sobre temas constitucionales*, 15. Lima: Comisión Andina de Juristas.

Demelas, Marie Danielle. 1992. *L'invention du politique. Bolivie, Equateur, Pérou au XIX siècle*. París: Editions recherches sur les civilisations.

Degregori, Carlos Iván. 1991. "El aprendiz de brujo y el curandero chino. Etnicidad, modernidad y ciudadanía". En: Degregori & Grompone (eds), *Demonios y redentores en el nuevo Perú. Una tragedia en dos vueltas*. Lima, IEP.

Degregori, Carlos Iván. 2001. *La década de la antipolítica. Auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos*. Lima: Institutos de Estudios Peruanos.

Drinot, Paulo. 2006. *Historiografía, identidad historiográfica y conciencia histórica en el Perú*. Lima: Universidad Ricardo Palma.

Eliás, Norbert. 2003. *La civilisation des moeurs*. Paris: Pocket.

Favre, Henri. 2002. *América Latina frente al desafío del Neoliberalismo*. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos.

Ferry, Jean Marc. 2004. *L'Europe, l'Amérique et le monde*. Plein feux: Bruxelles.

Fukuyama, Francis. 2005. *La construcción del Estado*. Barcelona: Ediciones B.

García Calderón, Francisco. 2000. *El Perú contemporáneo*. Lima: Ediciones del Congreso de la República.

Gellner, Ernst. 1983. *Nations and nationalism*. Ithaca: Cornell University Press.

Gellner, Ernst. 1995. "Nationalism and Modernization". En: *Nationalism* (Oxford readers), John Hutchinson y Anthony Smith, eds., pp. 55-62. Nueva York: Oxford University Press.

Guerra, François Xavier. 2003. "Las mutaciones de la identidad en la América hispánica". En: Guerra y Annino (coordinadores), *Inventando la Nación. Iberoamérica Siglo XIX*, pp. 185-220. México DF: Fondo de Cultura Económica.

Grindle, Merilee. 2000. *Audacious Reforms. Institutional invention and Democracy in Latin America*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Habermas, Jürgen. 1999. *Après l'Etat Nation. Une nouvelle constellation politique*. París: Fayard.

Hagopian, Frances y Scott Mainwaring. 2005. *The third wave of democratization in Latin America. Advances and setbacks*. New York: Cambridge University Press.

Heller, Herman. 1985. *Teoría del Estado*. México DF: Fondo de Cultura Económica.

Hermet, Guy. 2001. "Les démocratisations au vingtième siècle: une comparaison Amérique Latine / Europe de l'Est". En: *Revue Internationale de Politique Comparée*, vol 8, n.º2.

Hinojosa, Iván. 1999. "Sobre parientes pobres y nuevos ricos: Las relaciones entre S.L y la izquierda radical peruana". En: Steve Stein, ed., *Los senderos insólitos del Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos-Universidad de Humanga.

Hobsbawm, Eric y Terence Ranger. 1992. *The invention of tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.

Huntington, Samuel P. 1968. *Political order in changing societies*. New Haven & London: Yale University Press.

Huntington, Samuel P. 1994. *La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX*. Barcelona: Paidós.

Inglehart, Ronald. 1971. "The silent revolution in Europe: Intergenerational change in post-industrial societies." *American Political Science Review*, vol 65, n.º 4, pp 991-1017.

Jenson, Jane. 2006. "Introduction: Thinking about Citizenship and Law in an Era of Change". En: *Law Commission of Canada, ed. Law and Citizenship*. Vancouver: University of British Columbia Press. pp. 3-21.

Juaristi, Jon. 2001. *El bucle melancólico. Historias de nacionalistas vascos*. Madrid: Espasa Calpe.

Kenney, Charles. 2003. "The Death and rebirth of a party system, Peru 1978-2001". En: *Comparative Political Studies*, vol 36, n.º 10, pp. 1210-1239.

Klarén, Peter. 2005. *Nación y Sociedad en la Historia del Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Knight, Alan. 1998. "Populism and Neopopulism in Latin America. Especially Mexico". En: *Journal of Latin American Studies*. vol 30, n.º 2, pp. 223-248.

Knight, Alan. 2001. "Democratic and Revolutionary Traditions in Latin America". En: *Bulletin of Latin American Research*. vol 20, n.º 2. pp. 147-186.

Knight, Alan. 2005. "Is political culture good to think?". En: *Political cultures in the Andes 1750-1950*, Jacobsen, Nils y Cristóbal Aljovín, eds., pp. 25-57. Duke University Press.

Latinobarómetro. 2006. Informe.

Lauer, Mirko. 2006. "Últimos tiempos de Valentín Paniagua". En: *La República*, 17 de octubre.

Linz, Juan & Alfred Stepan. 1996. *Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America and post-communist Europe*. Baltimore & London: The Johns Hopkins University.

López-Alves, Fernando. 2000. *State Formation and democracy in Latin America, 1810-1900*. Duke University Press.

López Soria, José Ignacio. 2001. *Adiós al discurso moderno en el Perú*. En: *Hueso Húmero*, n.º 39, pp. 47-57.

Lowenthal, Karl. 1983. *Conclusiones de "The Peruvian experiment reconsidered"*, McClintock y Lowenthal, eds., pp. 415-430. Princeton: Princeton University Press.

Mac Adam, Doug, Sidney Tarrow & Charles Tilly. 2001. *Dynamics of contention*. Cambridge: Cambridge University Press.

Mair, Peter. 1998. "L'hypothèse du gèle des clivages: Une évaluation". En: *Revue Internationale de Politique Comparée*, vol 5. 3, pp. 669-693.

McClintock, Cynthia. 2006. "An unlikely comeback in Peru". En: *Journal of Democracy*, vol. 17, n.º 4. pp. 95-109.

McClintock, Cynthia. 2006a. "Electoral Authoritarian versus Partially democratic Regimes: The Case of the Fujimori Government and the case of the 2000 elections". En: Carrión, ed., *The Fujimori legacy. The rise of electoral authoritarianism in Perú*, pp. 81-101. The Pennsylvania State University Press.

Mainwaring, Scott. 2006. "The Crisis of Representation in the Andes". En: *Journal of Democracy*, vol. 17, n.º 3, pp. 13-27.

Mainwaring, Scott & Timothy Scully, eds. 1995. *Building Democratic institutions. Party systems in Latin America*. Standford C.A: Standford University Press.

Marshall. T. H. 1992. "Citizenship and social classes". En: *Citizenship and social classes*, T. H Marshall y Tom Bottomore, pp. 1-51. London: Pluto Press.

Meléndez, Carlos. 2005. "Mediaciones y conflictos: las transformaciones de la intermediación política y los estallidos de violencia en el Perú". En: Victor Vich, ed. *El Estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Meléndez, Carlos. 2007. “Los movimientos regionales: “los viejos desconocidos” Las elecciones regionales del 2006 y la trivialización del análisis político”. En: *Coyunturas*, 10.

Méndez, Cecilia. 1996. “Incas sí, Indios no. Notes on peruvian creole nationalism and its contemporary crisis”. En: *Journal of Latin American Studies*, 28: 1 pp. 197-225.

Memoria del Banco Central de Reserva, 2005.

Miller, David. 1997. *On Nationality*. Nueva York: Oxford University Press.

Montoya, Rodrigo. 2006. “Entrevista a Rodrigo Montoya”. En: *Hueso Húmero*, n.º 49, pp. 3-18.

Moore, Barrington. 1966. *Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and peasant in the making of the world*. Boston: Beacon Press.

Murakami, Yusuke. 2007. *Perú en la era del chino. La política no institucionalizada y el pueblo en busca de un salvador*. Lima: IEP.

Naef, Werner. 1973. *La idea del Estado en la edad moderna*. Madrid: Aguilar ediciones.

Nairn, Tom. 1995. “The maladies of Development”. En: *Nationalism* (Oxford readers), John Hutchinson y Anthony Smith, eds., pp. 70-75. Nueva York: Oxford University Press.

Neira, Hugo. 1996. *Hacia la tercera mitad. Perú XVI-XX: ensayos de relectura herética*. Lima: Seminario interdisciplinario de estudios andinos, SIDEA.

O'Donnell, Guillermo y Philippe C. Schmitter. 1986. *Transitions from authoritarian rule: Tentative conclusions about uncertain democracies*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

O'Donnell, Guillermo. 1997. “¿Democracia delegativa?” En: *Contrapuntos: ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*. Buenos Aires: Paidós.

Oakeshott, Michael. 2001. *El Estado europeo moderno*. Madrid: Paidós.

Portocarrero, Gonzalo. 2006. “Caudillismo y Oligarquía”. En: *Libros y Artes. Revista de Cultura de la Biblioteca Nacional del Perú*, n.º 16-17.

Przeworski, Adam y Fernando Limongi. 1997. “Modernization: Theories and facts”. En: *World Politics*, vol. 49, n.º 2.

Quijada, Mónica. 2003. “¿Qué Nación? Dinámicas y dicotomías de la nación en el imaginario hispanoamericano”. En: Guerra y Annino (coordinadores), *Inventando la Nación. Iberoamérica siglo XIX*, pp. 287-305. México DF: Fondo de Cultura Económica.

Rawls, John. 1971. *A theory of justice*. The Belknap Press of Harvard University Press.

Remy, María Isabel. 2005. *Los múltiples Campos de la Participación ciudadana en el Perú. Un reconocimiento del terreno y algunas reflexiones*. Lima, IEP.

Ribeyro, Julio Ramón. 2006. *Prosas apátridas*. Barcelona: Seix Barral.

Rivera Martínez, Edgardo. 1993. *País de Jauja*. Lima: Peisa.

Roberts, Kenneth y Moisés Arce. 1998. "Neoliberalism and lower classes voting behaviour in Peru". En: *Comparative Political Studies*, vol. 31, n.º 2, pp. 217-246.

Roberts, Kenneth. 2006. "Do parties matter? Lessons from the Fujimori experience". En: Carrión, ed., *The Fujimori legacy. The rise of electoral authoritarianism in Perú*, pp. 81-101. The Pennsylvania State University Press.

Roncagliolo, Santiago. 2006. *Abril Rojo*. Lima: Alfaguara.

Sandel, Michael. 1982. *The limits of political liberalism*. Cambridge University Press.

Sanders, Karen. 1997. *Nación y Tradición. Cinco discursos en torno a la nación peruana. 1885-1930*. Lima: Fondo de cultura Económica y Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Scorza, Manuel. 1983. *Redoble por Rancas*. Barcelona: Plaza & Janés.

Schmidt D, Gregory. 2003. "The 2001 presidential and congressional elections in Peru". En: *Electoral Studies* 22, pp. 344-351.

Sieyes, Emmanuel Joseph. 2002. *Qu'est ce que le tiers état*. Paris: Flammarion.

Skidmore, Thomas y Peter Smith. 2001. *Modern Latin America*. Oxford University Press.

Stein, Steve. 1999. "The path to populism in Peru". En: *Populism in Latin America*. Michael Conniff, ed., pp. 97-116. Tuscaloosa: The University of Alabama Press.

Stepputat, Finn. 2004. "Marching for Progress: Rituals of citizenship, State and belonging in a high Andean District". En: *Bulletin of Latin American Research*, pp. 244-259.

Tanaka, Martín. 1998. *Los espejismos de la democracia*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Tanaka, Martín. 2004. "Situación y perspectiva de los partidos políticos en la Región Andina: el caso peruano". En: *Partidos Políticos en la Región Andina: entre la crisis y el cambio*. Lima: Ágora democrática, pp. 93-112.

Tanaka, Martín. 2005a. "Los estudios políticos en Perú. Ausencias, desconexión de la realidad y la necesidad de la ciencia política como disciplina". En: *Revista de Ciencia Política*, vol. 25, n.º 1, pp. 222-231.

Tanaka, Martín. 2005b. *Democracia sin partidos. Perú 2000-2005*. Lima: Institutos de Estudios Peruanos.

Taylor, Charles. 1998. "Nationalism and modernity". En: *The State of the Nation. Ernst Gellner and the theory of nationalism*. John A. Hall, ed., pp. 191-218. Cambridge: Cambridge University Press.

Thorp, Rosemary, Corinne Caumartin y George Gray-Molina. 2006. "Inequality, ethnicity, political mobilisation and political violence in Latin America: The cases of Bolivia, Guatemala and Peru". En: *Bulletin of Latin American Research*, vol. 25, n.º 4, pp. 453-480.

Thurner, Mark. 2006. *Republicanos Andinos*. Lima, IEP y Centro Bartolomé de las Casas.

Tilly, Charles. 1975. "Reflections on the history of European state-making". En: *The formation of national status in Western Europe*. Princeton: Princeton University Press.

Tilly, Charles. 1985. "War making and state making as organized Crime". En: *Bringing the state back in*. Evans, Rueschemeyer y Skocpol, eds., pp. 169-191. Cambridge: Cambridge University Press.

Tocqueville, Alexis. 1981. *De la démocratie en Amérique*. Paris: Flammarion.

Touraine, Alain. 1988. *La parole et le sang. Politique et société en Amérique Latine*. Paris: Odile Jacob.

Tuesta, Fernando. 2001. *Perú político en cifras. 1821-2001*. Lima: Fundación Friederich Ebert.

Ubillús, Juan Carlos. 2006. *Nuevos súbditos. Cinismo y perversión en la sociedad contemporánea*. Lima, IEP.

Vargas Llosa, Mario. 1996. *Conversación en la Catedral*. Lima: Peisa.

Vergara, Alberto. 2002. "¿Fin del discurso moderno en el Perú?" En: *Hueso Húmero*, n.º 41.

Walker, Charles. 1999. *Smoldering Ashes. Cuzco and the Creation of Republican, Peru 1780-1840*. Durham: Duke University Press.

Weber, Eugene. 1976. *From peasants to frenchmen: the modernization of rural France. 1870-1914*. Stanford: Stanford University Press.

Weber, Max. 1977. *Economie et Société*. Paris: Plon.

Weber, Max. 1995. "The Nation". En: *Nationalism* (Oxford readers), John Hutchinson y Anthony Smith, eds., pp. 21-25. Nueva York: Oxford University Press.

Weyland, Kurt. 1996. "Neopopulism and Neoliberalism in Latin America: Unexpected Affinities". En: *Studies in Comparative International Development*, vol. 31, n.º1, pp. 3-31.

Weyland, Kurt. 1999. "Populism in the age of neoliberalism". En: Conniff, Michael, ed., *Populism in Latin America*, pp. 172-190. Tuscaloosa: The University of Alabama Press.

Weyland, Kurt. 2006. "The Rise and Decline of Fujimori's neopopulist leadership". En: Carrión, ed., *The Fujimori legacy. The rise of electoral authoritarianism in Perú*, pp. 11-38. The Pennsylvania State University Press.

Yashar, Deborah. 1999. "Democracy, Indigenous Movements, and the postliberal challenge in Latin America". En: *World Politics*, vol 52:1, pp76-104.

Agradecimientos

Este libro es producto de varias estaciones. Primero, fue una servilleta garabateada en medio de un almuerzo con mi padre. Luego de unas semanas, ordené un poco aquellos garabatos para poder exponerlos en una clase universitaria. Casi al mismo tiempo, los amigos de Desco me encargaron un artículo y, entonces, desarrollé la mayor parte de las ideas que son recogidas en la introducción de este libro. Cuando terminé dicho artículo tenía ya planeado el libro. Pero preparaba una mudanza hacia el otro hemisferio y al llegar a Canadá el doctorado no me dejó un minuto libre para pensar en él.

Cuando terminaba mi primer semestre doctoral y el invierno empezaba a mostrar los dientes, me enteré de la convocatoria al concurso de ensayo de la Universidad Católica de 2007. El jugoso primer premio que era ofrecido despertó el viejo interés en el libro y decidí aprovechar unas cortas y gélidas vacaciones para escribirlo. Durante un mes y medio me dediqué a él por completo. Originalmente se tituló “Inclusiones inconclusas y el misterio del voto. Las elecciones de 2006 en perspectiva histórica” y lo presenté al concurso con el seudónimo de “Faroeste Caboclo” (sólo lo menciono para que quede alguna huella de mi homenaje anónimo a Renato Russo). Finalmente, no gané aquel primer premio que había despertado mi codicia, pero el jurado me otorgó una mención honrosa, un cheque vital para el verano de estudiante, y sugirió la publicación del texto. Por todo esto, agradezco a los miembros del jurado, los doctores Salomón Lerner Febres, Max Hernández y Manuel Burga.

Sin embargo, nadie recogió la sugerencia de publicación. Por tanto, luego de algunos meses, pensé que el ensayo no se publicaría y que no tendría más destino que el de engordar el disco duro de mi computadora. Sin embargo, un día, conversando con mi amigo Jaime Gianella, apareció la idea de ofre-

cerlo a la editorial Solar. Ahí, Dante Trujillo Ruiz se interesó por el proyecto y acordamos publicarlo. Por tanto, mi reconocimiento a Tito Trujillo y su gente, que hacen un trabajo editorial magnífico. Así, el texto se convirtió en libro con muy pequeñas modificaciones.

De otro lado, debo agradecer también a quienes siempre tienen la gentileza de leer mis textos. Es una suerte increíble contar con un grupo de amigos tan agudos, que jamás se ahorran sus críticas más severas y que moderan, comentan y corrigen (casi) cada uno de los textos que escribo. Eduardo Dargent, Mariana Chu, Santiago Roncagliolo, Hugo Arrué, Cecilia Perla y Ricardo Vergara me dieron, como siempre, incisivos comentarios en uno u otro momento de la elaboración del libro. También recibí comentarios que agradezco de María Balarín, Martín Mujica y Jaime Porras. A Lula Paniagua debo agradecerle ser mis ojos y mis manos en medio de mi biblioteca abandonada en Lima (que a estas alturas conoce mejor que yo), además del cariño y el coraje que le pone a cada momento de la vida. A Carmen Díaz le agradezco la foto. Gracias también a Martha Álvarez (tantas veces).

Finalmente, quiero agradecer a María Inés quien colaboró con este libro de tantas formas como era posible. El libro es un poco suyo también.

Alberto Vergara
Montreal, octubre de 2007

Este libro se terminó de imprimir en los talleres de
Editorial Gráfica Ebra EIRL
Calle Carlos Pedemonte 198, Urb. El Pino, San Luis
Lima, octubre de 2007

Impreso en Perú